



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE TULUÁ

Jurisdicción:

Ordinaria

Especialidad:

Laboral

Categoría:

Circuito

Código:

76-834-31-05-001

Clase de proceso:

ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

Cuaderno:

1 de 1

Folios: 62

Asunto:

-

Demandante(s):

FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA

C.C./NIT: 14.798.345

T.P.: no refiere ser abogado.

Dirección: CR 22B #15-79 TULUA, VALLE

Email: no se aporta.

Teléfono: 3178120503

Apoderado: ORLANDO GOMEZ NOVOA

C.C./NIT: 16.356.320

T.P.: 76.322

Dirección: CL 26 #24-54 TULUA, VALLE

Email: orgono@hotmail.com

Teléfono: 3156474820-3168653127

Demandado(s):

PORVENIR S.A

C.C./NIT: no se aporta.

T.P.: no se aporta.

Dirección: CR 26 #27-17 TULUA, VALLE

Email: 0

Teléfono: -

Apoderado: -

T.P.: -

Dirección: -

Email: -

Teléfono: -

Presentación: 15 de febrero de 2018

Tomo: 24

Folio: 0

Código único de radicación nacional:

76-834-31-05-001-2018-00066-00



Orlando Gómez Novoa

ABOGADO

Señor:

JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO DE TULUA VALLE (REPARTO)

E.

S.

D.

FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA, mayor, vecino de este municipio, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, mediante el presente escrito manifiesto al despacho que confiero Poder Especial, amplio y suficiente al Abogado ORLANDO GOMEZ NOVOA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 16.356.320 de Tuluá Valle, portador de la Tarjeta Profesional Nro. 76.322 del C.S.J., para que en mi nombre y representación inicie y lleve a Término PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., con domicilio en la sede de la carrera 26 Nro. 27-17 de Tuluá Valle., con Nit 800144331-3, representada legalmente por el Doctor MIGUEL LARGACHA MARTINEZ, en su condición de Presidente de dicha entidad o por quien haga sus veces, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 y que se dejaron de cancelar por parte de la entidad demandada al momento en que se me otorgó la pensión por invalidez el día 13 de febrero de 2017.

Mi apoderado queda ampliamente facultado para recibir sumas de dinero, conciliar, transigir, sustituir, reasumir el poder, desistir y demás facultades legalmente otorgadas en el artículo 77 del C.G.P.

Atentamente,

Fabio alonso Espinosa Olaya
FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA
C.C. 14.798.345 de Tuluá V.

Acepto,

Orlando Gómez Novoa
ORLANDO GOMEZ NOVOA
C.C. 16.356.320 de Tuluá V.
T. P. Nro. 76.322 del C.S.J.

República de Colombia
NOTARIA PRIMERA DE TULUA VALLE
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Y RECONOCIMIENTO

La Notaria Primera de Tuluá Valle hace constar: que el escrito que antecede fue presentado personalmente por:

01 NOTARIA PRIMERA DE TULUA 97019
AUTENTICACION

Fecha: 04/06/2017 FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA
Doc No. 14798345 Hora: 08:37

quien además declaró que su contenido es cierto y que la firma y huella que en él aparecen son suyas

Fabio alonso Espinosa Olaya
Declarante

Rosa Adriel Castro Pineda
Notaria Primera de Tuluá Valle

Calle 26 No. 24 - 54 2do Piso Cel: 316 865 3127 - 315 647 4826 Tuluá - Valle
organo24@gmail.com



Orlando Gómez Novoa

2

ABOGADO

Señora

JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO DE TULUA VALLE

E.

S.

D.

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL DE ÚNICA INSTANCIA

DTE: JHON ALEXANDER SANCHEZ

DDO: JHON ALBERT GOMEZ

ORLANDO GOMEZ NOVOA, mayor, vecino de este municipio, identificado como aparece al pie de mi firma, abogado en ejercicio de la profesión, portador de la Tarjeta Profesional Nro. 76.322 del C.S.J., obrando en condición de apoderado judicial del señor JHON ALEXANDER SANCHEZ, mediante el presente escrito procedo a impetrar PROCESO ORDINARIO LABORAL DE ÚNICA INSTANCIA en contra del señor JHON ALBERT GOMEZ, también mayor y vecino de este municipio.

HECHOS

PRIMERO: El día 1 de agosto de 2013, el señor JHON ALEXANDER SANCHEZ, fue vinculado mediante contrato laboral de carácter indefinido por el señor JHON ALBERT GOMEZ, para que desarrollara labores de agricultura dentro de varios cultivos de frutas localizados en el Corregimiento de Nariño Tuluá Valle, y otros cultivos en el corregimiento de Tres Esquinas Tuluá valle.

SEGUNDO: La relación laboral entre mi representado y su empleador JHON ALBERT GOMEZ se desarrolló en jornada completa desde el día 1 de agosto de 2013, hasta el día 8 de septiembre de 2014, fecha en la cual mi representado fue despedido en forma injusta por el demandado sin que a la fecha se le haya cancelado las prestaciones sociales a las cuales tiene derecho.

TERCERO: El señor JHON ALEXANDER SANCHEZ, se desempeñó desarrollando labores propias del campo y oficios varios, labor que desarrolló en un horario comprendido entre las 7:00 A.M. y las 6: P.M. todos los días del mes.



ABOGADO

TERCERO: HORIZONTE Pensiones y Cesantías hoy PORVENIR S.A., mediante documento fechado 2 de marzo de 2005, negó la pensión solicitada argumentando que no reunía los requisitos del artículo 139 de la ley 100 de 1993, puesto que tan sólo había cotizado 25,71 semanas en los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, esto es desde enero de 2002 hasta enero de 2005, y que se requería un mínimo de 50 semanas.

CUARTO: En múltiples ocasiones mi pupilo le manifestó a los funcionarios de HORIZONTE Pensiones y Cesantías hoy PORVENIR S.A., que tuvieran en cuenta el tiempo del servicio militar obligatorio que tenía a su favor, sin embargo hicieron caso omiso a dicha solicitud negándome rotundamente el reconocimiento y pago de la Pensión por Invalidez a que tenía derecho.

SEXTO: Debido al desconocimiento en materia de pensiones mi representado dejó pasar el tiempo resignando las posibilidades de obtener la pensión por invalidez, pero en el mes de octubre de 2016, por consejo de un amigo el señor FABIO ALONSO ESPIN OSA, presentó Acción de Tutela en contra de PROVENIR S.A. solicitando nuevamente la Pensión por Invalidez y aportando nuevamente el bono del tiempo del servicio militar obligatorio para crear una nueva historia laboral. En la mencionada Acción de Tutela se profirió sentencia de primera instancia el día 19 de octubre de 2016, tutelando los derechos fundamentales a la Seguridad Social, al Mínimo Vital, al Debido proceso, a la Salud y a la vida en condiciones dignas para el Accionante; Así mismo ordenó a PORVENIR S.A. que en el término no superior a 20 días proceda a computar las cotizaciones bajo el servicio militar obligatorio y generar una nueva historia laboral de los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Sin embargo la entidad en mención nuevamente se negó a dar respuesta positiva a lo ordenado por la sentencia de Tutela y procedió a impugnar la mencionada sentencia de primera instancia, la cual fue confirmada por el Juez Tercero Civil del Circuito de Tuluá Valle .

SEPTIMO: En vista que pasaron más de tres meses sin que PORVENIR S.A., accediera a cumplir lo ordenado tanto en primera como en segunda instancia, el señor FABIO ALONSO ESPNOSA se vio obligado a presentar el día 31 de enero de 2017, incidente de DESACATO en contra de PORVENIR S.A. con el fin que se diera cumplimiento a lo ordenado en las dos sentencias de Tutela.



Orlando Gómez Novoa

4

ABOGADO

OCTAVA: Finalmente para el día 13 de febrero de 2017, PORVENIR S.A., mediante documento escrito procedió a otorgar la Pensión por Invalidez a favor de mi pupilo a partir del 09 de enero de 2005, cancelando un retroactivo por la suma de \$ 90.095.854 y reconociendo una mesada pensional por la suma de \$ 737.717.

NOVENO: Dentro del documento privado que reconoció la Pensión al señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA, No se reconocieron los intereses por mora por concepto del retroactivo pagado.

DECIMO: En vista que el señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA, tenía derecho a la pensión por invalidez desde el día 9 de enero de 2005, fecha de estructuración según la calificación de invalidez realizada por la junta Regional de Calificación de Invalidez del valle y fecha tomada como base por PORVENIR S.A. para reconocer y pagar el retroactivo al señor ESPINOSA, se procederá a solicitar el pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el día 10 de mayo de 2005, hasta el día 13 de febrero de 2017.

DECIMO PRIMERO: Para el día 15 de marzo de 2017, el señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA, presentó derecho de petición ante PORVENIR S.A., solicitando la cancelación de los intereses moratorios originados en el retardo injustificado por parte de dicha entidad en el reconocimiento y pago de su pensión, pues a pesar de haberse solicitado desde enero 9 de 2005, sólo hasta el mes de febrero de 2017, se le hizo el pago del retroactivo y sin los intereses moratorios a que por ley tiene derecho el pensionado.

DECIMO SEGUNDO: En respuesta al Derecho de Petición presentado por el señor ESPINOSA, la entidad PORVENIR S.A., manifestó en documento privado que "No es procedente el pago de intereses moratorios, teniendo en cuenta que esta Sociedad Administradora desde el momento de la definición de su reclamación pensional de vejez invalidez, ha reconocido y pagado su mesada pensional asignada. Por otro lado, el 7 de febrero de 2017 se pagó retroactivo por valor de \$ 90.095.854, desde la fecha de estructuración es decir el 9 de enero de 2005 al mes de febrero de 2017". " Por lo anterior, no es procedente llevar a cabo el pago de los intereses moratorios de acuerdo al artículo 141 de la Ley 100 de 1993".

DECIMO TERCERO: Como consecuencia de la negativa por parte de PORVENIR S.A., en el reconocimiento y pago de los intereses moratorios a



Orlando Gómez Novoa

ABOGADO

favor de mi representado, se procede a presentar la presente acción judicial con el fin de obtener tutela a los derechos del señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA.

PRETENSIONES

Con base en los hechos anteriormente expuestos, solicito al despacho que previo el reconocimiento de mi personería para poder actuar como apoderado judicial del señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 14.798.345 de Tuluá Valle, y con domicilio en esta ciudad, mediante los trámites de un PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA, mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, se hagan las siguientes declaraciones y condenas en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., entidad que tiene su domicilio principal en Bogotá D.C., en la calle 13 Nro. 46-15, pero con oficina seccional en Tuluá Valle en la carrera 26 Nro. 27- 17 y representada por el Doctor MIGUEL LARGACHA MARTINEZ o quien haga sus veces y a favor de mi representado FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA.

PRIMERA: Se condene a SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., entidad que tiene su domicilio principal en Bogotá D.C., pero con oficina seccional en Tuluá Valle en la carrera 26 Nro. 27- 17 y representada por el Doctor MIGUEL LARGACHA MARTINEZ o quien haga sus veces, ordenar a quien corresponda el pago de los intereses moratorios a favor del señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA, de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes y vigentes, desde el día 10 de mayo de 2005, hasta el día 13 de febrero de 2017, en concordancia con el artículo 884 del C.C., sobre la suma de \$ 90.095.854, que fue cancelado por PORVENIR S.A. como retroactivo a favor del señor FABIO ALONSO ESPINOSA.

SEGUNDA: Que se condene a la entidad demandada al pago de las costas y agencias en derecho que cause el presente cobro judicial.

TERCERA: Que se condene a la entidad demandada al pago de cualquier derecho que resultare probado durante el trámite judicial conforme las facultades Ultra y Extra petita otorgadas al Juez laboral.



Orlando Gómez Novoa

ABOGADO

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se tiene como fundamentos de derecho para la presente demanda los artículos 46, 48 y 53 de la Constitución Nacional, art. 36 y ss de la Ley 100 de 1993, art. 12 y 13 del acuerdo 049 de 1990 del iss, aprobado por el decreto 758 de 1990, art. 4 de la Ley 797 de 2003 y los artículos 120,121, y 141 de la Ley 100 de 1993 y art. 884 del C.C.

Nuestro país, es un estado social de derecho, y como tal se rige por una serie de disposiciones legales, las que una vez expedidas, integran los distintos códigos que nos rigen y uno de ellos es el Código de trabajo y Seguridad social de Colombia, en donde las normas de seguridad social tienen prioridad, pues constituyen el pasado y el futuro de los nacionales.

La ley 100 de 1993, en su artículo 41, estableció el pago de los intereses en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales, y estipula que las administradoras de fondos de pensiones tienen un término de cuatro (4) meses máximo contados a partir del momento en que se radicó la documentación exigida para acceder a una prestación económica, para resolver de fondo sobre la procedencia o no de una pensión sin importar si es por vejez o invalidez como es el caso del señor FABIO ALONSO ESPINOSA, quien presentó la solicitud de pensión por primera vez el día 9 de enero de 2005, recibiendo una respuesta negativa de parte del mencionado fondo de pensiones el cual también se abstuvo de sumar el tiempo en cotizaciones que mi pupilo había pagado cuando prestó su servicio militar obligatorio, sustrayéndose de la obligación legal que tienen los fondos de pensiones de elaborar una historia laboral en forma integral, esto es, teniendo en cuenta el bono de las cotizaciones correspondientes al tiempo del servicio militar obligatorio. Según sentencia T- 699/01 expediente T-434531 Magistrado ponente, Doctor ALVARO TAFUR GAVIRIA expresó en uno de sus apartes " El bono pensional adquiere relevancia constitucional cuando las empresas obligadas a solicitarlo y expedirlos tardan en hacerlo por negligencia o falta de comunicación e información entre éstas, puesto que tales circunstancias perjudican al extra-bajador, trabajador o afiliado no dejándolo que disfrute de una pensión solicitada." Es de procedimiento obligatorio que las entidades responsables del pago de una prestación, o pensión para quienes con el reconocimiento de tales se completa con el bono, son estas instituciones las que deben solicitar el pago del bono, más no el afiliado reclamante o accionante.



Orlando Gómez Novoa

ABOGADO

Artículo 53 de la Constitución Nacional, señala que el estado garantiza el derecho de pago oportuno y al reajuste periódico de las prestaciones.

La finalidad del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, fue afianzar el carácter vital de la pensión, propender por su pronto pago y proteger a los pensionados disuadiendo las dilaciones en su trámite y por ello los intereses moratorios antes que ser una sanción para la entidad obligada, son una medida resarcitoria en el caso de no pago oportuno de la mesada y por lo mismo se debe entender que se causan desde el momento en que debe hacerse el pago y no se realiza.

Los intereses de mora se hacen exigibles cuando se produce el retardo o retraso en el pago de las pensiones y para ello se deben cumplir varios requisitos según lo expresado por la corte suprema de justicia en sentencia 33233 de 2008 que dice: 1. Requisitos. Se deben haber cumplido los requisitos para tener derecho a la pensión. 2. Solicitud. Se debe presentar la respectiva solicitud de reconocimiento, fecha a partir de la cual se comienza a contabilizar los términos legales de respuesta. Retiro. Se debe realizar el retiro definitivo del servicio activo, tan es así que cuando el reconocimiento se hace con posterioridad al retiro se ordena el pago de los retroactivos respectivos. Términos. Que se cumpla el término que la entidad administradora cuenta para resolver la petición, de modo que los intereses solamente comienzan a causarse si el pago se hace por fuera de aquel plazo. La mora debe ser pagada por la entidad responsable del pago de la pensión y que ha incurrido en la mora. Se debe cancelar el monto adeudado más los intereses moratorios vigentes al momento en que se efectúe el pago y este pago se le debe hacer a favor del pensionado.

INTERES MORATORIO VIGENTE: Corresponde al señalado en el artículo 884 del C.C., que dice: " será equivalente a una y media veces del bancario corriente". En este asunto para su calculo se aplica la tasa de interés corriente certificada para los créditos de consumo y ordinario, los cuales se liquidan en términos efectivos anuales (E.A.) Decreto 519 de 2007.

Me permito enunciar apartes de algunas de las sentencias de la Corte que tienen aplicación en presente caso:

SENTENCIA 42783 junio 13 de 2002. Magistrado ponente JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ. " La aplicación de la norma (art.141 de la Ley 100 de 1993) radica exclusivamente en la mora y reconocimiento y pago de la pensión, que es desde el momento en que se adquiere el derecho o desde la fecha en que



Orlando Gómez Novoa

ABOGADO

se hace la solicitud de la prestación. Se aplica por la simple mora o retardo en el pago de las mesadas pensionales, sin conexión directa con la demostración de buena o mala fe de la entidad accionada.”

SENTENCIA 32355 DEL 2 DE JUNIO DEL 2009

SENTENCIA 18789 DEL 29 DE MAYO DE 2003

SENTENCIA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 (RADICACIÓN 18512)

De acuerdo al artículo 141 de la Ley 100 de 1993,” A partir del 1 de enero de 1994, en caso de mora en el pago de la mesada pensional de que trata la presente Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado además de las obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”.

SENTENCIA 41392 DE 2011

SENTENCIA S L 5603 DE 2016

SENTENCIA S L 6398 DE 2016 concepto 96037563-2 de marzo 3 de 1997.

Artículo 141 de la Ley 100 de 1993. “ Se refiere a los intereses que se causen desde el momento en que la entidad correspondiente debe pagar la mesada pensional hasta la fecha en que efectivamente se realiza el pago. La causación de los intereses referidos no es, entonces, desde el momento en que se tiene el derecho a la prestación ni desde aquel que se presenta la respectiva solicitud de reconocimiento y pago de los intereses moratorios lo constituye , precisamente, la mora en el pago de las mesadas pensionales.

Art. 326 numeral 7 literal d del estatuto orgánico del sistema financiero, concordancia art. 19 del decreto 656 de 1994.

SENTENCIA SL 15310 (42599) DEL 5 DE NOVI. DE 2014: En dicha sentencia precisó la corporación que la figura de los intereses moratorios a que se refiere el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se contrae únicamente al retardo en el reconocimiento y pago de las pensiones derivadas de dicha Ley. Sin que sea posible extender dichos alcances al pago de los reajustes pensionales.

SENTENCIA C.S.J. SL 22 DE AGOSTO DE 2012 Rdo. 42477

SENTENCIA 41392 DE DICIEMBRE 6 DE 2011.



Orlando Gómez Novoa

ABOGADO

Según los hechos de la demanda y el estudio de toda la normatividad existente que amparo los derechos de mi representado, es claro deducir que el señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA, tiene derecho a que se reconozcan y paguen los intereses moratorios por todo ese tiempo en que la entidad PORVENIR S.A. en forma injustificada se sustrajo de esa obligación negándose a reconocerle y pagarle sus mesadas pensionales desde el día 10 de mayo de 2005, pues hay que tener en cuenta que dicho pago se vino a reconocer la pensión solicitada y pagar el retroactivo, sólo hasta el día 13 de febrero de 2017. De tal manera que al señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA, tiene derecho a reclamar el pago de los intereses de mora a partir del día 10 de mayo de 2005, hasta el día 13 de febrero de 2017, pues hay que tener en cuenta que mi representado en repetidas ocasiones le pidió a PORVENIR S.A., que le tuvieran en cuenta el tiempo cotizado en el servicio militar obligatorio, pero la entidad demandada siempre se negó a reconocer dichas cotizaciones y siempre le argumentaron que él no tenía derecho a la pensión por invalidez. Dicha situación obligó al señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA, a impetrar Acción de Tutela contra la entidad ya referida y fue de la única manera que PORVENIR S.A., se vio en la obligación de reconocer y pagar la mencionada carga prestacional.

Mediante sentencia 22531 del 1 de diciembre de 2004 la corte suprema de justicia expresó: " Realmente el querer del legislador con la expedición del artículo 141 de la ley 100 de 1993, no es otro que hacer justicia a aquellos trabajadores que al alcanzar determinada edad de su vida para acceder a la pensión luego de haber aportado a la seguridad social, frente a la morosidad del pago de las mesadas, se vieran resarcidos económicamente mediante el reconocimiento de intereses moratorios".

PRUEBAS

Con el fin de probar la veracidad de los hechos expuestos en el libelo de la demanda, comedidamente solicito al a señora Juez, tenga, valore y decrete los siguientes medios de prueba:

DOCUMENTALES:

- 1 – Copia de la cédula del señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA
- 2 – Documento de respuesta de la entidad HORIZONTE (hoy PORVENIR S.A.)
fechado 2 de marzo de 2005, mediante el cual le negaron la pensión al señor FABIO ALONSO ESPINOSA.



Orlando Gómez Novoa

120

ABOGADO

- 3 – Copia de la sentencia de primera instancia fechada 19 de octubre de 2016, proferida por el Juzgado de pequeñas causas de Tuluá V. ✓
- 4 – Copia de la sentencia de segunda instancia, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tuluá Valle. ✓
- 5 – Copia del incidente de desacato. ✓
- 6 - Documento fechado 13 de febrero de 2017, mediante el cual PORVENIR S.A., reconoce la pensión y cancela el retroactivo. ✓
- 7 – Copia del derecho de petición solicitando el pago de los intereses moratorios. ✓
- 8 – Documento de respuesta fechado 23 de marzo de 2017, mediante el cual PORVENIR S.A., niega el pago de los intereses moratorios. ✓
- 9 - Poder conferido para actuar en el proceso. ✓

CUANTIA Y COMPETENCIA

Por la naturaleza de las pretensiones, por la sede seccional que tiene la entidad demandada en esta ciudad, y por la cuantía que la estimo superior a (20) salarios mínimos legales mensuales (\$12.887.000), de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 46 de la Ley 1395 de 2010, es usted, señora Juez, competente para conocer de este proceso.

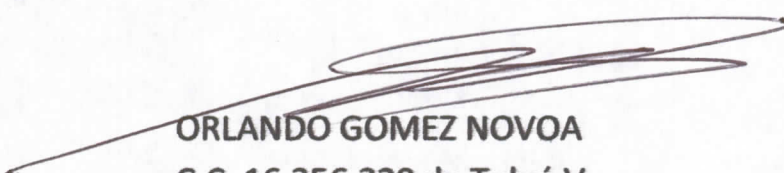
NOTIFICACIONES

LA PARTE DEMANDADA: La entidad PORVENIR S.A., puede ser notificada en la carrera 26 Nro. 27-17 de Tuluá Valle.

LA PARTE DEMANDANTE: Puede ser notificado en la carrera 22b Nro. 15-79 de Tuluá valle. Tel. 317 8120503.

EL APODERADO: Las personales las recibiré en la secretaría de su despacho y las demás en mi oficina de Abogado localizada en la calle 26 Nro. 24-54 de Tuluá Valle. TEL. 315 647 4820- 316 865 3127. Correo electrónico: orgono@hotmail.com

Cordialmente,


ORLANDO GOMEZ NOVOA
C.C. 16.356.320 de Tuluá V.
T.P. 76.322 del C.S.J.



Orlando Gómez Novoa

ABOGADO

- 3 - Copia de la sentencia de primera instancia fechada 19 de octubre de 2016, proferida por el juzgado de pequeñas causas de Tulua V.
- 4 - Copia de la sentencia de segunda instancia, proferida por el juzgado Tercero Civil del Circuito de Tulua Valle.
- 5 - Copia del incidente de descasto.
- 6 - Documento fechado 13 de febrero de 2017, mediante el cual PORVENIR S.A., reconoce la pensión y cancela el retroactivo.
- 7 - Copia del derecho de petición solicitando el pago de los intereses moratorios.
- 8 - Documento de respuesta fechado 23 de marzo de 2017, mediante el cual PORVENIR S.A., niega el pago de los intereses moratorios.
- 9 - Poder conferido para actuar en el proceso.

RECIBIDO
JUZGADO LABORAL
15 FEB 2018

CUANTIA Y COMPETENCIA

Por la naturaleza de las prestaciones, por la sede seccional que tiene la entidad demandada en esta ciudad, y por la cuantía que la estimó superior a (20) salarios mínimos legales mensuales (\$212.887.000), de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 46 de la Ley 1392 de 2010, es usted, señora juez, competente para conocer de este proceso.

NOTIFICACIONES

LA PARTE DEMANDADA: La entidad PORVENIR S.A., puede ser notificada en la carrera 26 Nro. 27-47 de Tulua Valle.
 LA PARTE DEMANDANTE: Puede ser notificado en la carrera 25b Nro. 12-79 de Tulua valle. Tel. 317 8120203.
 EL APODERADO: Las personas las recibirá en la secretaría de su despacho y las demás en mi oficina de Abogado localizada en la calle 26 Nro. 24-24 de Tulua Valle. TEL. 315 647 4820- 316 865 3127. Correo electrónico: orgono@hotmail.com

Confidencialmente,

ORLANDO GOMEZ NOVOA
 C.C. 16.356.820 de Tulua V.
 T.P. 78.322 del C.S.J.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A18120963B786A

15 DE FEBRERO DE 2018 HORA 10:52:02

BA18120963

PAGINA: 1 de 5

* * * * *

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

RENUEVE SU MATRÍCULA A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S A

N.I.T. : 800144331-3

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00475512 DEL 23 DE OCTUBRE DE 1991

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 21 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

ACTIVO TOTAL : 2,370,546,914,618

TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 13 NO. 26 A 65

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE

NOTIFICACION

JUDICIAL

:

notificacionesjudiciales@porvenir.com.co

DIRECCION COMERCIAL : CR 13 NO. 26 A 65

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : dsadavi@porvenir.com.co

CERTIFICA:

AGENCIA:

BOGOTA (2)
SOACHA (1)
CHIA (1)

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2250 DE LA NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C., DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 INSCRITA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01795106 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBE MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDAD AFP HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A LA CUAL LE TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.

CERTIFICA:

ESTATUTOS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA NO.	NO. INSCRIP.
5.307	22- X-1991	23 STAFE BTA	23-X-1991- 343478
3.208	9- VI-1992	23 STAFE BTA	12-VI-1992- 368288
1.877	5- IV-1993	23 STAFE BTA	11-V -1993- 404963
1.442	23-III-1994	23 STAFE BTA	4-IV-1994 442612
179	2- II-1995	50 STAFE BTA	8-II-1995 480419
216	24- I-1997	23 STAFE BTA	4-II-1997 572417

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000836	2000/03/17	NOTARIA 23	2000/03/30	00722400
0002143	2001/06/29	NOTARIA 23	2001/07/11	00785305
0001937	2002/09/18	NOTARIA 46	2002/09/25	00846033
0004440	2003/11/20	NOTARIA 23	2003/11/28	00908593
0003820	2004/09/28	NOTARIA 23	2004/11/16	00962326
0000SIN	2005/04/12	REVISOR FISCAL	2005/04/18	00986505
0002628	2005/07/15	NOTARIA 23	2005/07/18	01001616
0003559	2005/C9/12	NOTARIA 23	2005/09/20	01012189
0000001	2006/04/28	REVISOR FISCAL	2006/04/28	01052550
0002211	2007/09/19	NOTARIA 46	2007/09/26	01160486
0000001	2007/10/04	REVISOR FISCAL	2007/10/12	01164415
0482	2009/03/26	NOTARIA 46	2009/04/01	01286838
1674	2009/09/30	NOTARIA 65	2009/10/05	01331779
1708	2010/10/11	NOTARIA 65	2010/10/12	01420850
358	2013/03/14	NOTARIA 65	2013/04/03	01718969
2250	2013/12/26	NOTARIA 65	2013/12/31	01795106
00436	2014/03/31	NOTARIA 65	2014/04/01	01822566
759	2015/04/30	NOTARIA 65	2015/05/26	01942591
01870	2015/09/28	NOTARIA 65	2015/09/29	02023448
443	2016/03/28	NOTARIA 65	2016/04/08	02091593
1557	2016/09/13	NOTARIA 65	2016/09/19	02141614
2192	2016/11/28	NOTARIA 23	2016/12/01	02162523
422	2017/04/04	NOTARIA 65	2017/04/11	02206159

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: TENDRÁ POR OBJETO SOCIAL EXCLUSIVO LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEMÁS NORMAS QUE LO COMPLEMENTEN, SUSTITUYAN, MODIFIQUEN O ADICIONEN, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS QUE CONSTITUYAN LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS DESCENTRALIZADAS DESTINADOS A LA GARANTÍA Y PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES A SU CARGO, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES. EN DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ:

A). CONTRATAR TECNICOS, EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR EN RELACION CON



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A18120963B786A

15 DE FEBRERO DE 2018

HORA 10:52:02

BA18120963

PAGINA: 2 de 5

* * * * *

LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU OBJETO; B). REALIZAR O COORDINAR SEMINARIOS Y PRESTAR LA CAPACITACION EN TODAS SUS MANIFESTACIONES SOBRE LAS MATERIAS PROPIAS DE SU OBJETO; C). ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR Y ADMINISTRAR TODA CLASE DE BIENES; D). INTERVENIR COMO DEUDORA O COMO ACREEDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO, DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTIAS DEL CASO CUANDO HAYA LUGAR A ELLAS; E). CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO Y CON COMPAÑIAS ASEGURADORAS TODA CLASE DE OPERACIONES RELACIONADAS CON LOS BIENES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD; F). TOMAR O DAR DINERO EN PRESTAMO, DAR EN GARANTIA O ADMINISTRACION SUS BIENES, MUEBLES O INMUEBLES, GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, CANCELAR O PAGAR LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, PAGARES O CUALESQUIERA OTROS TITULOS VALORES, O ACEPTARLOS O DARLOS EN PAGO Y EJECUTAR O CELEBRAR EN GENERAL EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES; G). CELEBRAR CONTRATOS DE PRENDA, DE ANTICRESIS, DE DEPOSITO, DE GARANTIA, DE ADMINISTRACION, DE MANDATO, DE COMISION Y DE CONSIGNACION H) FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES, ENTIDADES O ASOCIACIONES, EN LA FORMA AUTORIZADA POR LA LEY, QUE LE PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES, COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS DE LA EMPRESA SOCIAL O QUE SEAN DE CONVENIENCIA Y UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES O ABSORBER TAL CLASE DE EMPRESA. TAMBIÉN PODRÁ FUSIONARSE BAJO LAS MODALIDADES PREVISTAS POR LA LEY Y CELEBRAR CONTRATO DE PARTICIPACIÓN; Y CELEBRAR CONVENIOS DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA O ADMINISTRATIVA CON OTRAS PERSONAS; I) ORGANIZAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO NECESARIOS PARA LA PRESTACION Y COMERCIALIZACION DE SUS SERVICIOS; J). SUSCRIBIR O ADQUIRIR TODA CLASE DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL, ADMINISTRARLAS O ENAJENARLAS, EN LA FORMA AUTORIZADA POR LA LEY; K). TRANSIGIR, DESISTIR, Y APELAR DECISIONES ARBITRALES O JUDICIALES, EN LAS CUESTIONES EN QUE TENGAN INTERES FRENTE A TERCEROS, A LOS ASOCIADOS MISMOS Y A SUS TRABAJADORES, Y L). EN GENERAL EJECUTAR TODOS LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS ANTERIORES Y QUE TENGAN POR FINALIDAD EJERCER SUS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES U OPERACIONES QUE LAS NORMAS LEGALES APLICABLES LE AUTORICEN EFECTUAR

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

6630 (ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE FONDOS)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

6810 (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR

: \$130,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 130,000,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR : \$109,210,640,000.00
NO. DE ACCIONES : 109,210,640.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **
VALOR : \$109,210,640,000.00
NO. DE ACCIONES : 109,210,640.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **
QUE POR ACTA NO. 58 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 21 DE ABRIL DE 2017 BAJO EL NUMERO 02217694 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
FIGUEROA JARAMILLO ALEJANDRO AUGUSTO	C.C. 000000008228877
SEGUNDO RENGLON	
CARDENAS MULLER MAURICIO	C.C. 0000000079486685
TERCER RENGLON	
OTERO ALVAREZ EFRAIN	C.C. 0000000014961168
CUARTO RENGLON	
ALVAREZ ALVAREZ JULIO LEONZO	C.C. 0000000008272092
QUINTO RENGLON	
ROBLEDO URIBE JUAN MARIA	C.C. 0000000017113328
SEXTO RENGLON	
PROMIGAS S.A. E.S.P.	N.I.T. 000008901055263

QUE POR ACTA NO. 21 DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS DEL 18 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 20 DE ABRIL DE 2017 BAJO EL NUMERO 02217259 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEPTIMO RENGLON	
GUTIERREZ NAVARRO MIGUEL IGNACIO	C.C. 0000000019065668

QUE POR ACTA NO. 18 DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS DEL 18 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 20 DE ABRIL DE 2017 BAJO EL NUMERO 02217255 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
OCTAVO RENGLON	
ARDILA DUARTE RAFAEL	C.C. 0000000013818364

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **
QUE POR ACTA NO. 58 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 21 DE ABRIL DE 2017 BAJO EL NUMERO 02217694 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
PEREZ BUENAVENTURA CARLOS ERNESTO	C.C. 0000000079141430
SEGUNDO RENGLON	
PABON PABON LUIS FERNANDO	C.C. 0000000019381997
TERCER RENGLON	
ZULOAGA SEVILLA IGNACIO HERNANDO	C.C. 0000000079142476
CUARTO RENGLON	
BERRIO ZAPATA DOUGLAS	C.C. 0000000003229076
QUINTO RENGLON	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A18120963B786A

15 DE FEBRERO DE 2018 HORA 10:52:02

BA18120963 PAGINA: 3 de 5
* * * * *

ZULUAGA MACHADO ARTURO DE JESUS C.C. 000000000023864
SEXTO RENGLON
ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES
DE FLORES ASOCOLFLORES N.I.T. 000008600376658
QUE POR ACTA NO. 21 DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS DEL 18 DE MARZO DE 2016,
INSCRITA EL 20 DE ABRIL DE 2017 BAJO EL NUMERO 02217259 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
SEPTIMO RENGLON

ALAJMO CARRISOZA PIETRO C.C. 000000017171433
QUE POR ACTA NO. 18 DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS DEL 18 DE MARZO DE 2016,
INSCRITA EL 20 DE ABRIL DE 2017 BAJO EL NUMERO 02217255 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
OCTAVO RENGLON

RODRIGUEZ URIBE GLORIA MARGARITA MARIA C.C. 000000041674613
CERTIFICA:

ACLARACION CONFORMACION DE LA JUNTA DIRECTIVA
LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO ESTA CONFORMADA ASI:
RENGLONES PRIMERO AL QUINTO:

EN REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS.
RENGLON SEXTO:

EN REPRESENTACION DE LOS EMPLEADORES.
RENGLON SEPTIMO:

EN REPRESENTACION DE LOS AFILIADOS AL FONDO DE CESANTIAS.
RENGLON OCTAVO:

EN REPRESENTACION DE LOS AFILIADOS AL FONDO DE PENSIONES.
CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 0000039 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE MARZO DE
2008, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2008 BAJO EL NUMERO 01214933 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

KPMG S.A.S. N.I.T. 000008600008464
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 23 DE
OCTUBRE DE 2017, INSCRITA EL 26 DE OCTUBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO
02270661 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL

MOJICA BARON HOLMAN ANDRES C.C. 000000080758140
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 31 DE
OCTUBRE DE 2017, INSCRITA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO
02272793 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE
ROJAS HERRERA ADALY

C.C. 000000052027404

CERTIFICA:

QUE PARA EFECTOS DE LOS PREVISTO EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY 633 DE 2000, MEDIANTE COMUNICACIÓN DEL 19 DE JUNIO DE 2003 INSCRITA EL 25 DE JUNIO DE 2003 BAJO EL NÚMERO 00885842 DEL LIBRO IX, SE REPORTÓ LA (S) PÁGINA (S) WEB O SITIO (S) DE INTERNET:

- WWW.PORVENIR.COM.CO

QUE PARA EFECTOS DE LOS PREVISTO EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY 633 DE 2000, MEDIANTE COMUNICACIÓN DEL 4 DE AGOSTO DE 2006 INSCRITA EL 9 DE AGOSTO DE 2006 BAJO EL NÚMERO 01071514 DEL LIBRO IX, SE REPORTÓ LA (S) PÁGINA (S) WEB O SITIO (S) DE INTERNET:

- INSCRIPCION PAGINA WEB

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 12 DE ABRIL DE 2007, INSCRITO EL 8 DE JUNIO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01137085 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S A, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- APORTES EN LINEA S A

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 1999, INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 1999 BAJO EL NUMERO 00665230 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- BANCO DE BOGOTA

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 1999, INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 1999 BAJO EL NUMERO 00665531 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S A

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : PORVENIR CALLE 106

MATRICULA NO : 01150432 DE 22 DE ENERO DE 2002

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 16 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

DIRECCION : CR 15 NO. 106 - 62

TELEFONO : 3393000

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : grodriguez@porvenir.com.co

NOMBRE : PORVENIR BOGOTA LA CABRERA

MATRICULA NO : 01164524 DE 11 DE MARZO DE 2002

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 16 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

DIRECCION : CR 11 NO. 87 - 51 LC 2

TELEFONO : 3393000

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : grodriguez@porvenir.com.co



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A18120963B786A

15 DE FEBRERO DE 2018

HORA 10:52:02

BA18120963

PAGINA: 4 de 5

* * * * *

CERTIFICA:

SUCURSAL (ES) O AGENCIA (S) MATRICULADAS ANTE ESTA JURISDICCION

NOMBRE DE LA AGENCIA : ZONA INDUSTRIAL PORVENIR S.A.

MATRICULA : 00640259

RENOVACION DE LA MATRICULA : 16 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

DIRECCION : CL 13 NO. 46 - 15

TELEFONO : 3393000

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : grodriguez@porvenir.com.co

NOMBRE DE LA AGENCIA : LAS NIEVES PORVENIR S.A.

MATRICULA : 00640265

RENOVACION DE LA MATRICULA : 16 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

DIRECCION : CR 7 NO. 17 - 49

TELEFONO : 3393000

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : grodriguez@porvenir.com.co

NOMBRE DE LA AGENCIA : LAS GRANJAS PORVENIR S.A.

MATRICULA : 00640266

RENOVACION DE LA MATRICULA : 16 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

DIRECCION : CR 68 D NO. 13 - 79

TELEFONO : 3393000

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : grodriguez@porvenir.com.co

NOMBRE DE LA AGENCIA : CHICO PORVENIR S.A.

MATRICULA : 00640269

RENOVACION DE LA MATRICULA : 16 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

DIRECCION : CR 15 NO. 93 A - 63

TELEFONO : 3393000

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : grodriguez@porvenir.com.co

NOMBRE DE LA AGENCIA : CENTRO PORVENIR S.A.

MATRICULA : 00640272

RENOVACION DE LA MATRICULA : 16 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

DIRECCION : CR 13 NO. 26 A - 65 P 1

TELEFONO : 3393000
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
EMAIL : grodriguez@porvenir.com.co

NOMBRE DE LA AGENCIA : OFICINA AVENIDA CHILE PORVENIR S A
MATRICULA : 00979735
RENOVACION DE LA MATRICULA : 16 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
DIRECCION : CL 72 NO. 10 - 03
TELEFONO : 3393000
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
EMAIL : grodriguez@porvenir.com.co

NOMBRE DE LA AGENCIA : PORVENIR S A CHAPINERO
MATRICULA : 01279221
RENOVACION DE LA MATRICULA : 16 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
DIRECCION : CR 13 NO. 53 - 93
TELEFONO : 3393000
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
EMAIL : GRODRIGUEZ@PORVENIR.COM.CO

NOMBRE DE LA AGENCIA : PORVENIR SOACHA
MATRICULA : 02407500
RENOVACION DE LA MATRICULA : 16 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
DIRECCION : CR 71 B NO. 32 - 37 LC 204 - 05
TELEFONO : 3393000
DOMICILIO : SOACHA (CUNDINAMARCA)
EMAIL : grodriguez@porvenir.com.co

NOMBRE DE LA AGENCIA : PORVENIR CHIA
MATRICULA : 02412686
RENOVACION DE LA MATRICULA : 16 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
DIRECCION : CL 10 NO. 11 - 36 LC 110 - 113
TELEFONO : 3393000
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
EMAIL : grodriguez@porvenir.com.co

NOMBRE DE LA AGENCIA : PORVENIR S.A. NIZA
MATRICULA : 02659395
RENOVACION DE LA MATRICULA : 16 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
DIRECCION : CL 127 NO. 70 D - 05
TELEFONO : 3393000
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
EMAIL : grodriguez@porvenir.com.co

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A18120963B786A

15 DE FEBRERO DE 2018 HORA 10:52:02

BA18120963 PAGINA: 5 de 5

* * * * *

COMERCIO DE BOGOTA)

* * *	EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE	* * *
* * *	FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO	* * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 1 DE NOVIEMBRE
DE 2017

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

***** ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES. *****
 ** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
 ** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 5,500

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
 INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
 COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
 SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

Constanza Puent-A.

57
16


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 14798345

APELLIDOS ESPINOSA OLAYA

NOMBRES FABIO ALONSO

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1982

TULUA (VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

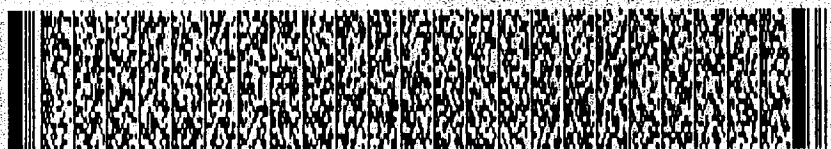
1.67 ESTATURA A+ G.S. RH M SEXO

27-NOV-2001 TULUA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO



P-3110600-66100531-M-0014798345-20020128 06620 02026B 01 105558036

CJB -05 7989
Bogotá D.C.,

Señor
FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA
Manzana E Casa No. 28 Urbanización Paraíso
Tel: 2315200
Tulúa – Valle del Cauca

Apreciado señor:

En relación con el trámite de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez solicitada por usted y considerando que:

1. Usted suscribió formulario de vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS, en calidad de trabajadora dependiente el día 01 de julio de 2004.
2. La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, le dictamino el siguiente porcentaje de pérdida de capacidad laboral: DEFICIENCIA: cuarenta y cinco punto cero ciento (45.00%), DISCAPACIDAD: nueve punto treinta por ciento (9.30%) y MINUSVALIA: veinticinco punto veinticinco por ciento (25.25%) para un total de setenta y nueve punto cincuenta y cinco por ciento (79.55%) de pérdida de capacidad laboral tomando como base el Manual Unico para Calificación de Invalidez y estableciendo como fecha de estructuración el día 9 de enero de 2005 y de origen común.
3. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, se establece que se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.
4. Una vez en firme el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca se procedió a verificar el cumplimiento de las semanas que dan derecho a pensión de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que establece los requisitos para obtener la pensión de invalidez en los siguientes términos:

"Artículo 1. - Requisitos para obtener la pensión de invalidez.

Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que



Horizonte

Pensiones y Cesantías

FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA
c.c.14.798.345

conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:

a) Invalidez causada por enfermedad: que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez;

b) Invalidez causada por accidente: que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez

(...)"

5. Se procedió a verificar si usted cumple con el requisito de las cincuenta (50) semanas en los tres (3) años anteriores a su fecha de estructuración de la invalidez, esto es desde enero de 2002 hasta enero de 2005.
6. El estudio demostró que usted tan solo cotizó al Sistema General de Pensiones 25.71 semanas durante este tiempo, por lo que no reúne el requisito de las 50 semanas exigidas por la ley.
7. Ahora bien, la Ley 100 de 1993 en su artículo 72 establece la devolución de saldos por Invalidez, de la siguiente manera:

"ART. 72. DEVOLUCION DE SALDOS POR INVALIDEZ.- cuando el afiliado se invalide sin cumplir con los requisitos para acceder a una pensión de invalidez, se le entregará la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los rendimientos financieros y adicionado con el valor del bono pensional si a ello hubiera lugar.

No obstante, el afiliado podrá mantener un saldo en la cuenta individual de ahorro pensional y cotizar para constituir el capital necesario para acceder a una pensión de vejez."

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos ya señalados de la Ley 100 de 1993 y Ley 860 de

2003 el Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS. **RECHAZA** su solicitud de pensión de invalidez.

Por lo anterior, y en caso de que usted no desee continuar cotizando para acceder a una pensión de vejez, esta Sociedad Administradora procederá a devolverle los aportes consignados en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos financieros y el bono pensional si a ello hubiera lugar.

A continuación informamos la documentación que debe presentar con el fin de hacer efectiva la devolución de saldos:

- Formatos de autorización de devolución de saldos que se anexan debidamente diligenciados.
- Certificación emitida por la entidad bancaria donde conste el tipo, número de cuenta y su nombre como titular de la misma.

Cualquier información adicional con gusto será atendida en la oficina de BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS, más cercana al lugar de su residencia.

Atentamente,


DIRECTOR DE AFILIACIONES Y BONOS PENSIONALES

JRGO
c.c. 14.798.345



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia



**JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS
Y COMPETENCIA MULTIPLE
TULUA VALLE**

Oficio No.1517
Fecha: octubre 21/2016
Radicado: 2016-000329

Señor (a)
FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA
CARRERA 22B No. 15-79 barrio Maracaibo
TULUA - VALLE

Cordial Saludo.



Me permito REMITIRLE copia del fallo de tutela No. 190 de fecha 19 de octubre de los cursantes, interpuesta por el señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA.

Se adjunta copia del fallo.

Atentamente

ANNY KARINA TORRES MUÑOZ

Secretaria Ad -Hoc

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE TULUA VALLE DEL CAUCA	 CASA DE JUSTICIA
CLASE DE PROCESO	ACCIÓN DE TUTELA	
DEMANDANTE	FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA	
DEMANDADO:	PORVENIR S.A	
RADICACIÓN:	76-834-41-89-001-2016-00329-00	
ASUNTO:	SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA	
FECHA DE LA PROVIDENCIA:	19 DE OCTUBRE DE 2016	
RECURSOS:	IMPUGNACIÓN	

SENTENCIA DE TUTELA N° 190

I. -OBJETO DEL PROVEÍDO:

Resolver lo pertinente a la solicitud de amparo constitucional promovida por el señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA, quien actúa en nombre propio, contra PORVENIR S.A tendiente a amparar los derechos al MÍNIMO VITAL, la SALUD, la SEGURIDAD SOCIAL, la IGUALDAD y la VIDA EN CONDICIONE DIGNAS de las personas con DISCAPACIDAD

II. -FUNDAMENTOS DE HECHO

Refiere el accionante que: i) se encuentra afiliado al fondo de pensiones y cesantías PORVENIR S.A; ii) presenta patología de SECUELAS DE HEMATOMA SUBDORAL AGUDO por motivo de accidente de tránsito ocurrido en julio de 2004 dejando COMO secuelas lesiones cerebrales, con crisis epilépticas, parálisis del lado izquierdo de su cuerpo con sordera total del mismo lado, hidrocefalia manejada con válvula de Hacking de manera permanente; iii) la Junta Regional de Invalidez del Valle del Cauca le profirió como perdida de la capacidad laboral un porcentaje del 79.55 cuya fecha de estructuración corresponde al 09 de enero de 2015; iv) indica que cotizó al sistema de seguridad social en pensiones en dos periodos: uno de julio a diciembre de 2004 y otro en enero de 2005 lo que el fondo de pensiones indica que corresponde a 30 semanas; v) además según certificación del ejercito nacional, por haber prestado el servicio militar obligatorio entre los periodos de enero de 2002 y el 18 de noviembre de 2003 suma un periodo total de 22 meses y 18 días que representa 96.65 semanas, que se le suman las otras 30 semanas, arrojando un total de 126.65 semanas cotizadas; vi) dado la fecha de estructuración y las 50 semanas durante los últimos tres años, es merecedor de la pensión de invalidez, pues ya sumaría en ese tiempo 118.15 semanas, lo que supera y cumple en forma total con los requisitos; vii) por el continuo deterioro de su salud, el día 08 de marzo de 2015 radicó en el fondo de pensiones los documentos para acceder a su prestación, donde PORVENIR respondió que tan solo cotizó al sistema

(22) 16

general 25.71 semanas durante el tiempo exigido, por lo que no reúne los requisitos de las 50 semanas; viii) el 09 de septiembre de 2016 su apoderado se presentó en el fondo de pensiones PORVENIR de la ciudad de Cali para radicar la totalidad de los documentos que permitieran liquidar y pagar la pensión de invalidez, al respecto indicaron que la solicitud quedaba en suspenso hasta tanto el Ministerio de la Defensa Nacional no girara los valores del bono pensional a la entidad, posteriormente el citado fondo envía comunicación 104 de septiembre 22 de 2016 en donde niega el pago de la pensión de invalidez manifestando que el tiempo cotizado por el servicio militar obligatorio no cubre la contingencia de invalidez, sino la pensión por vejez amparándose en el artículo 40 de ley 48 de 1993; ix) el fondo de pensiones desconoció y violó el reconocimiento del estado de discapacidad y de debilidad manifiesta e indefensión al negar el acceso al mínimo vital, teniendo en cuenta que sus patologías son degenerativas, progresivas, catastróficas e incurables sin ningún pronóstico de vida; x) indica que su situación económica es de extrema pobreza, sobrevive de lo que le regalan las personas de buen corazón, tampoco posee bienes de ninguna índole.

III. -PRETENSIONES DEL ACCIONANTE

- Solicita que se le amparen los derechos fundamentales a la salud, la vida, la vida digna, teniendo en cuenta su situación de discapacidad, a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y el debido proceso.
- Se le ordene a PORVENIR S.A liquidar y pagar la pensión de invalidez en el menor tiempo posible.
- Que la prestación se haga efectiva a partir de la fecha de estructuración.

IV. -ACTUACIÓN PROCESAL

-Una vez admitido el presente trámite constitucional de tutela, mediante auto No. 826 de fecha 05 de octubre de 2016, se corrió traslado a la entidad accionada. Se vinculó como tercero a la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA, BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS Y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

En escrito allegado el día 10 de octubre de 2016 solicita que se decrete medida provisional por ser una persona discapacitada, con una enfermedad de orden catastrófica, degenerativa y progresiva e incurable, sin ningún pronóstico de vida, ya que sus lesiones son irremediables y no tiene una calidad de vida debido a su padecimiento. Asimismo, carece del mínimo vital, y no tiene recursos para su mínima subsistencia.

-Mediante auto No. 885 del 14 de octubre de 2016 el juzgado no accede a la medida provisional por no reunir los presupuestos del artículo 7 del decreto 2591 de 1991, amén que debía ser objeto de análisis a la hora de tomar una decisión de fondo.

V. PRONUNCIAMIENTOS OBTENIDOS

-Se recepcionó respuesta de la entidad accionada -12 de octubre de 2016- rubricada por la doctora DIANA MARTÍNEZ CUBIDES obrando en calidad de Directora de Litigios quien manifestó que la pensión de invalidez solicitada por el accionante no puede ser reclamada por vía de tutela, no solo porque existe otro medio de defensa judicial para reclamar como lo es por la especialidad de la materia la jurisdicción ordinaria laboral sino porque está plenamente demostrado que no se cumplieron con los requisitos señalados en la ley para generar el derecho a la pensión, haciendo inviable imponerle a esta sociedad administradora una obligación que la ley no ha establecido, pues se estaría incurriendo en una vía de hecho al ordenarse el pago claramente no contemplado ni ordenado legalmente.

Por otro lado, en cuanto los requisitos para adquirir una pensión de invalidez o sobrevivencia, el conceder prestaciones sin el lleno de los requisitos legales afecta el equilibrio financiero del sistema, por tratarse de un régimen contributivo se entiende que la prestación se encuentra financiada cuando se satisface el número mínimo de cotizaciones fijado por el legislador y que obedece a una racionalidad económica pensada en función del colectivo de asociados al sistema de seguridad social integral (sentencia 4167 del 07 octubre 2015).

El señor ESPINOSA OLAYA radicó solicitud de pensión de invalidez siendo verificada por la entidad respecto del cumplimiento de los requisitos contenidos en la Ley 860 de 2003, donde se demostró que no cumplió con los requisitos de las 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de la estructuración de invalidez (9 enero de 2002 a 9 de enero de 2005), por lo tanto Porvenir el 25 de febrero de 2005 informó al accionante el rechazo de la solicitud de pensión de invalidez, en consecuencia se le indicó que lo procedente respecto de su caso era la devolución de saldos.

Ahora bien, acogiendo lo anterior el accionante el 09/06/2016 aceptó la devolución de los saldos y solicitó el pago por cheque a través de la sucursal Tuluá.

El 19 de septiembre de 2016 el tutelante ejerció derecho de petición solicitando la reconsideración de la pensión de invalidez, siendo rechazada por la entidad el 22 del mismo mes y año, toda cuenta que no cumplía con los requisitos exigidos por la normatividad que regula tema.

Sumado lo anterior, indica que el tiempo de cotización en los tiempos servidos por parte del accionante a las Fuerzas Militares bajo el servicio militar obligatorio, por tratarse de un régimen exceptuado, no son computables como cotizaciones dentro del sistema general de pensiones (cita artículo 279 Ley 100 de 1993).

Los tiempos de servicio de una persona vinculada al régimen especial y exceptuado de las fuerzas militares no se constituyen como aportes válidos dentro del cubrimiento de la pensión de invalidez y sobrevivientes de los afiliados al RAIS, dichos tiempos no se pierden ya que se reconocen como bonos pensionales (Numeral 3.1 artículo 3 de la ley 923 de 2004). Asimismo, la entidad accionada refiere el artículo 40 de la ley 40 de 1993 (debe entenderse ley 48 de 1993) estos tiempos únicamente pueden computarse para

(24) 28

cesantías, pensión de jubilación por vejez y prima de antigüedad. Por lo tanto, considera que no han vulnerado derecho fundamental alguno.

Adicionalmente solicita la improcedencia de la acción de tutela por el requisito de la inmediatez y para ello cita abundante jurisprudencia del tema; lo anterior, teniendo en cuenta que según la accionada, han transcurrido más de 11 años de haberse rechazado la solicitud en comento.

-Se recibió respuesta de la entidad vinculada, JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ del Valle del Cauca el día 12 de octubre de 2016 por medio de la Doctora JULIETA BARCO LLANOS Directora Administrativa y Financiera quien manifiesta que el señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA fue remitido por BBVA HORIZONTE para dirimir controversia de la patología, solicitud decidida mediante dictamen No. 0152-4931 de fecha 31 de enero de 2005, que se calificó: diagnóstico: trauma craneoencefálico con ruptura comunicante posterior para hidrocefalia y derivación ventrículo-peritoneal, secuela: hemiparesia izquierda, cuadro psicótico. PLC: 79.55%. Origen: Común. Fecha de estructuración: 09 enero de 2005. Notificado el dictamen en debida forma ninguna de las partes interpuso recurso, quedando en firme y ejecutoriado el 03 de marzo de 2005. En cuanto a las pretensiones indica que la junta no ha vulnerado derecho fundamental alguno y solicita declarar la improcedencia de su vinculación.

VI. CONSIDERACIONES

El problema jurídico que este despacho entrará a resolver es si efectivamente se han vulnerado los derechos fundamentales del señor **FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA** a LA SALUD, LA VIDA, LA VIDA DIGNA, teniendo en cuenta su situación de discapacidad, A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL MÍNIMO VITAL, A LA IGUALDAD Y EL DEBIDO PROCESO por parte de la administradora del fondo de pensiones y cesantías **PORVENIR S.A.** al no computar el tiempo cotizado durante la prestación del servicio militar obligatorio y negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

Para resolver lo planteado anteriormente se abordarán los siguientes temas: 1. Procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar acreencias pensionales; 2. pensión de Invalidez; 3. tiempo y semanas cotizadas durante la prestación del servicio militar obligatorio; 4. estudio del caso concreto; y, por último, 5. se dispondrán las respectivas órdenes.

1. Procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar acreencias pensionales

La acción tutela fue creada como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, por tanto, artículo 86 de la Constitución señala: *"toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública"*.

Igualmente el Decreto 2591 de 1991 indica que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando se utilice como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Como mecanismo excepcional, por regla general se ha indicado que en cuanto a derechos y reconocimientos pensionales no es la vía judicial idónea ya que el mecanismo competente es la jurisdicción ordinaria laboral o la contenciosa administrativa según sea caso; pero, de manera excepcional la Corte ha señalado que la acción de tutela procede aun cuando existen otros medios de defensa judicial cuando se trate de personas que se encuentran en un estado de *debilidad manifiesta*, por razón de enfermedad, edad o cualquier otra causas, asimismo, cuando los medios ordinarios de defensa judicial carecen de idoneidad o eficacia, o porque se busca evitar la inminente consumación de un perjuicio irremediable, puede el juez constitucional estudiar de fondo la situación que se denuncia como violatoria de derechos fundamentales imposterables.

Ahora, en cuanto a la pensión de invalidez, su procedibilidad resulta injustificado agotar un trámite ordinario debido a las graves condiciones de salud de la persona y la situación precaria en que se encuentra sin los mínimos recursos que garanticen su subsistencia digna. La Corte ha sostenido que:

"Considerados estos factores, el derecho a la pensión de invalidez adquiere el carácter de derecho fundamental por sí mismo, por tratarse de personas que por haber perdido parte considerable de su capacidad laboral, no pueden acceder al mercado de trabajo, de modo que dicha pensión se convierte en la única fuente de ingresos con la que cuentan para la satisfacción de sus necesidades básicas y las de sus familia, así como para proporcionarse los controles y tratamientos médicos requeridos. Esta penosa situación coloca a dichos individuos en un completo estado de indefensión y vulnerabilidad que hace indispensable la adopción de medidas urgentes para evitar la consumación de un perjuicio irremediable." (Sentencia T653 de 2004, MP Marco Gerardo Monroy Cabra)

Asimismo, la Corte indica que la tutela es el mecanismo idóneo para proteger derechos fundamentales como el mínimo vital, y demás derechos fundamentales del afectado por su incapacidad:

"Tal es el caso del reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, cuando se acredita que la negativa afecta la vida en condiciones dignas de una persona que por su estado de incapacidad, requiere especial protección y asistencia del Estado para proteger el mínimo vital. En estos supuestos, la subsidiariedad de la acción de tutela es relativa, ya que según las circunstancias del caso, los medios ordinarios de defensa judicial pueden resultar absurdos para garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales del afectado, en cuanto el trámite ordinario no propicia una solución expedita para colmar la garantía propia de una vida en condiciones dignas." (Sentencia T 789 de 2014, MP. Martha Victoria Sáchica Méndez)

Conforme lo anterior, es necesario verificar cada caso en concreto y se valore las circunstancias de tal manera que su procedencia resulte excepcional; de igual manera, cuando se trate de sujetos de especial protección constitucional por debilidad manifiesta, tales como los niños, las mujeres en estado de gestación, los ancianos, las minorías étnicas o las personas con algún tipo de discapacidad, el juicio que debe hacer el juez constitucional de procedibilidad de la acción de tutela debe ser menos riguroso, debido que, al someter a estas personas a un trámite ordinario o

la afectación actual de los derechos fundamentales del tutelante producto del no reconocimiento de la prestación económica de invalidez.

2. Pensión de invalidez

Cuando la capacidad laboral de un individuo se ve disminuida a causa de una enfermedad laboral o un accidente de cualquier origen, el sistema de seguridad social debe garantizar las prestaciones asistenciales y económicas frente a una afectación en su estado de salud, asimismo, es necesario diferenciar el régimen aplicable a cada caso para determinar el origen de la enfermedad, que puede ser común o laboral; cuando se trata de una enfermedad común está a cargo del Fondo de Pensiones, y cuando se trata de origen laboral deben ser asumidas por la Administradora de Riesgos Laborales.

La Ley 100 de 1993 en el artículo 38 define el estado de invalidez en los siguientes términos: *Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.*

Asimismo, respecto de los requisitos para acceder a la pensión de invalidez se enuncian de la siguiente manera:

ARTICULO. 39.- *Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan con alguno de los siguientes requisitos:*

- a) *Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez,*
- b) *Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.*

Posteriormente, la Ley 100 de 1993 fue modificada mediante la ley 860 de 2003, el artículo 39 respecto de la pensión de invalidez quedo así:

Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. *Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:*

1. *Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-428 de 2009.*

2. *Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-428 de 2009.*

(23) 24

Conforme lo anterior, la regla general para dar aplicabilidad de la normatividad se debe tener en cuenta la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, debiendo aplicarse la vigente en la mencionada fecha.

3. TIEMPO Y SEMANAS COTIZADAS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

Respecto de las semanas cotizadas en función de la prestación del servicio militar obligatorio, la ley 48 de 1993, en su artículo 40 señala que:

ARTICULO 40. Al término de la prestación del servicio militar. Todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio, tendrá los siguientes derechos:

- a) *En las entidades del Estado de cualquier orden, el tiempo de servicio militar le será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley;8...)*

Teniendo en cuenta el precepto anterior, la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del cómputo de tiempo prestado para efectos pensionales, de la siguiente manera:

"Sin embargo, de las consideraciones precedentes se tiene que el artículo 40 de la Ley 48 de 1993 debe ser aplicado frente a pensiones que se rigen por el principio de cotización efectiva, en la medida en que si bien el principio de sostenibilidad financiera resulta central en la regulación del sistema de pensiones, no puede restringirse injustificadamente los derechos de los ciudadanos, por cuanto, se reitera que:

i) La prerrogativa prevista en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993 tiene una vocación de aplicación general y universal, por lo que cubre a todo ciudadano que haya prestado el servicio militar.

ii) **No reconocer el tiempo de servicio militar para efectos pensionales cuando estos dependen de sus cotizaciones es una distinción cuyo origen subyace en el régimen pensional al cual se encuentra afiliada la persona, lo cual supondría una violación del derecho a la igualdad, pues se estaría otorgando un trato distinto, sin una razón objetiva y razonable que así lo justifique[56].**

iii) El hecho de computar las semanas correspondientes a la prestación del servicio militar, con el propósito de reconocer una pensión al amparo de lo previsto en la Ley 100 de 1993 o de otro régimen especial que exija la efectiva realización de una cotización (vía régimen de transición), supone la obligación a cargo de la Nación de realizar directamente el aporte al régimen pensional que haya sido elegido por el ciudadano." (Sentencia 510 de 2014 MP. Alberto Rojas Ríos) (negrilla fuera de texto)

Asimismo, en la mencionada sentencia de tutela indica que:

"En este orden de ideas, no cabe duda de que PROTECCIÓN S.A. vulneró los derechos fundamentales fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, al debido proceso y a la vida en condiciones dignas del señor Dairo Anaya, por negarse a tener en cuenta las 124.41 semanas en las que prestó el servicio militar obligatorio, en los términos previstos en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, para efectos de reconocer su derecho a la pensión de invalidez, conforme al artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Dicha decisión, como previamente se explicó, le ha impedido al actor solventar directamente sus necesidades básicas, en especial en lo referente a los requerimientos que demanda su precaria situación de salud." (Negrilla fuera de texto)

En reciente pronunciamiento de la Corte, en sentencia T 413 DE 2016 manifiesta la necesidad de contabilizar el tiempo para efecto del reconocimiento de pensiones y demás prestaciones:

"La sentencia T-063 de 2013 analizó el caso de una persona con más de setenta años de edad y con una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, a quien el ISS no le tenía en cuenta el tiempo correspondiente a la prestación del servicio militar obligatorio. En este caso, la Corte le ordenó a la accionada liquidar y pagar la pensión de vejez incluyendo las semanas correspondientes a la prestación del servicio militar obligatorio. Después de analizar las normas que establecen los beneficios para las personas que prestaron el servicio militar obligatorio concluyó que "desde el año de 1945 se estableció un régimen de carácter legal y reglamentario, en el que se reconoce la obligación de tener en cuenta el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio para el cálculo de varias prestaciones sociales, entre ellas la pensión de vejez. Este régimen se mantuvo con la expedición de la Constitución Política de 1991, en la que se dispuso el deber del legislador de reconocer prerrogativas a quienes prestan dicho servicio y así se consagró en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993." (MP. Alejandro Linares Cantillo)

Teniendo en cuenta los recientes pronunciamientos de la Corte en la materia, su principal argumento radica en el respeto al derecho a la igualdad, pues de igual manera indican que *"no existe una razón objetiva para excluir a las pensiones que se someten al principio de cotización efectiva del reconocimiento del tiempo prestado en el servicio militar conforme al artículo 40 de la Ley 48 de 1993."* Por tanto, no se justifica restringir los derechos pensionales vulnerando los derechos fundamentales de las personas, ni lo es tampoco brindar un trato diferencial en cuanto al reconocimiento del tiempo de servicio militar porque no existe una justificación objetiva y razonable.

4. ESTUDIO DEL CASO CONCRETO

Según quedó expuesto en los hechos narrados y con fundamento en las anteriores consideraciones, se analizará si efectivamente se presentó la trasgresión a los derechos fundamentales del señor **FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA** a LA SALUD, LA VIDA, LA VIDA DIGNA teniendo en cuenta su situación de discapacidad, A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL MÍNIMO VITAL, A LA IGUALDAD Y EL DEBIDO PROCESO por parte de la administradora del fondo de pensiones y cesantías PORVENIR S.A. al no computar el tiempo cotizado durante la prestación del servicio militar obligatorio y negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

Primeramente, es necesario tener en cuenta que en este caso en particular nos encontramos frente a una persona con una pérdida de la capacidad laboral correspondiente a un porcentaje del 79.55% con diagnóstico de *trauma craneoencefálico con ruptura comunicante posterior para hidrocefalia y derivación ventrículo peritoneal* (fl. 3) fundado en el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca según oficio NT-04 – 054 del 31 de enero de 2005 (fl. 4 a 6), y que el mismo se encuentra debidamente ejecutoriado mediante oficio EJE-05-318 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2005 (FL. 2), por tanto, es considerado por el ordenamiento jurídico como sujeto de especial protección constitucional debido a su estado de debilidad manifiesta quien goza actualmente de un especial protección.

23
29

... el accionante padece una enfermedad progresiva, sin evidencia de recuperación o restablecimiento de su salud, que lo coloca en un estado de debilidad y vulnerabilidad, además, se encuentra incapacitado para trabajar actualmente, lo que le impide desarrollar cualquier actividad económicamente productiva, por tanto no tiene una fuente propia de recursos económicos para su sostenimiento de sus necesidades básicas.

Asimismo, aunado al porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral, la junta indicó que la fecha de estructuración correspondía al día el 09 de enero de 2005, motivo por el cual el accionante le solicitó a BBVA HORIZONTE reconocer la pensión de invalidez, pero dicha petición fue negada por cuanto el señor ESPINOSA OLAYA no había cotizado las 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración, sino que tenía cotizados desde enero del 2002 hasta enero del 2005 un total de 25.71 semanas sin cumplir el requisito de la ley 860 de 2003 para acceder a la pensión de invalidez (Fls. 7 a 9).

Ante dicha negativa, y debido a su estado de salud, el actor pidió reconsideración a la entidad accionada el 19 de septiembre de 2016 para acceder a su pensión de invalidez, asimismo, solicitó que tuviera en cuenta el tiempo comprendido en el cual prestó el servicio militar obligatorio pero el 22 de septiembre de 2016 fue negada nuevamente, indicando que no se podía tener en cuenta este tiempo porque no son aportes válidos para pensiones de invalidez y sobrevivencia conforme lo estipula la Ley 48 de 1993, de igual manera le indican que tiene derecho respecto de esos tiempos al reconocimiento de bonos pensionales según lo dispuesto en la Ley 923 de 2004 (fls. 20 a 22).

Se encuentra acreditado que el señor FABIO ALONSO ingresó a prestar el servicio militar obligatorio como soldado regular el día 11 de enero de 2002 hasta el 16 de noviembre de 2003, según certificación expedida el día 22 de agosto de 2016 por el Ministerio de Defensa Nacional (historias laborales del ejercito) (fls. 24 a 26). También se evidencia una solicitud de devolución de saldos de fecha 09 de junio de 2016 (fl. 311) la cual no se tramitara hasta tanto Ministerio de Defensa cancele a la entidad PORVENIR S.A el valor correspondiente de los aportes y se proceda a reconocer dichos periodos para ser computados nuevamente.

Contrastando las consideraciones jurisprudenciales con las particularidades del presente caso, encuentra este Despacho Judicial que guarda analogía y por ello impera prodigar aquí el mismo tratamiento de allá, por tanto, se ordenara computar las cotizaciones que bajo el servicio militar obligatorio realizó al sistema y generar una nueva historia laboral de los últimos tres años anteriores a la fecha de la estructuración de la pérdida de la capacidad laboral.

En este orden de ideas, considera esta judicatura que **PORVENIR S.A** vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, al debido proceso, a la salud y a la vida en condiciones dignas del señor **FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA**, por negarse a tener en cuenta las semanas en las que prestó el servicio militar obligatorio para efectos de reconocer su derecho a la pensión de invalidez, ya que tal decisión le ha impedido al accionante solventar sus necesidades básicas teniendo que estar todos estos años a la merced de quienes le ofrezcan algo para sobrevivir afectando de esta manera su mínimo vital y la vida en condiciones dignas, y en especial en lo referente a los requerimientos que aqueja su precaria situación de salud.

En consecuencia, se concederá el amparo deprecado para la protección de los derechos fundamentales instados por el del señor **FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA**; por lo tanto, se dispondrá que en el término de no mayor a 20 días proceda a COMPUTAR las cotizaciones bajo el servicio militar obligatorio y generar una nueva historia laboral de los últimos tres años anteriores a la fecha de la estructuración de la perdida de la capacidad laboral.

Por lo anteriormente expuesto, EL JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley:

V. -RESUELVE:

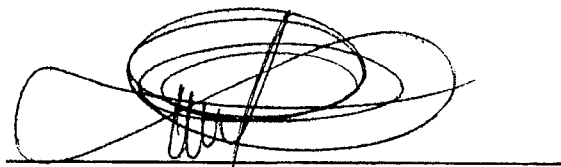
PRIMERO: CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales a LA SEGURIDAD SOCIAL, AL MÍNIMO VITAL, AL DEBIDO PROCESO, A LA SALUD Y A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS del señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA de condiciones civiles anotadas, incoada contra la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A, en cabeza de su representante legal, o quien haga sus veces.

SEGUNDO: ORDENAR a la contra la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A para que en el término no superior a 20 días proceda a COMPUTAR las cotizaciones bajo el servicio militar obligatorio y generar una nueva historia laboral de los últimos tres años anteriores a la fecha de la estructuración de la perdida de la capacidad laboral.

TERCERO: NOTIFÍQUESE este Fallo a las partes por el medio más expedito y hágaseles saber, que contra la presente decisión procede el recurso de impugnación

CUARTO. En caso de no ser recurrida la presente decisión, envíese el expediente a La Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



ALFONSO LEYVA MORENO
JUEZ

31 25

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO
TULUÁ VALLE

Oficio No 3374 Diciembre 1º de 2016

Señor (a)
FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA
Carrera 22B N° 15 -79 B/ Maracaibo
Tuluá Valle

Expediente: Acción de Tutela
Accionante: FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA
Accionado: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES -PORVENIR
Radicación: 76-834-41-89-001-2016-00329-01 (2016-241)

Para los fines legales pertinentes, me permito transcribirle la parte resolutive de la sentencia de Tutela N°. 254, a efecto de surtir su notificación, que dice:

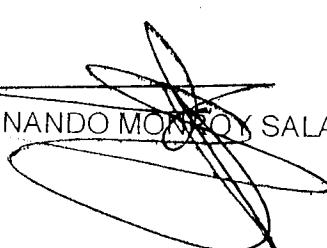
“RESUELVE:

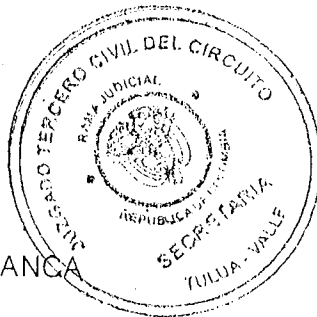
PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia Nro.190 del 19 de octubre de 2016, proferida por el Juzgado de pequeñas causas y competencia múltiple de ésta localidad. De conformidad a lo expuesto en la parte motiva de éste proveído.

SEGUNDO. Por secretaría **NOTIFICAR** a las partes el presente fallo por el medio más expedito (Art. 30 Decreto 2591/91).

TERCERO. ORDENASE la remisión de las presentes diligencias a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.** La Juez (fdo.) SANDRA LETICIA SÚA VILLEGAS”

Atentamente,


DIEGO FERNANDO MONTOYA SALAMANCA
Secretario



REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE BUGA
JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO
TULUA, VALLE DEL CAUCA.

Acción de Tutela de Segunda Instancia Nro.254

Accionante: FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA
Accionado: AFP PORVENIR S.A. y otros
Radicación: 768344189001-2016-00329-01 (2016-241)

Tuluá, Valle del Cauca, treinta (30) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016).

I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Se decide la impugnación interpuesta por la AFP PORVENIR S.A., contra la decisión tomada en la Sentencia Nro.190 del 19 de octubre de 2016, proferida por el Juez de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Tuluá, Valle del Cauca, dentro del trámite de tutela en contra de la **AFP PORVENIR S. A.**

II. ANTECEDENTES**1º. Lo que el accionante pretende.**

El accionante actuando en nombre propio pretende que en sede de tutela se proteja los Derechos Fundamentales tales como a la salud, seguridad social, mínimo vital, la vida en condiciones dignas, el mínimo vital, y debido proceso, los cuales considera vulnerados por la AFP PORVENIR, por cuanto se ha negado a reconocerle la pensión de invalidez, argumentando que solo presenta 25.71 semanas cotizadas a la fecha de estructuración de la invalidez, o sea que no cumple con el requisito establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.

2º. Fundamentos de hecho

Los fundamentos de hecho plasmados en el escrito de tutela se resumen así:

1.- Que el actor se encuentra afiliado al fondo PORVENIR antes Horizonte.

2.- Que presenta secuelas por accidente de tránsito, ocurrido el 11 de julio de 2004; secuelas como: hidrocefalia manejada por válvula de HACKIM, con tubo que drena liquido desde el centro del cerebro hasta adentro de abdomen.

3.- Que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, con seden en la ciudad de Cali, profirió calificación con pérdida de la capacidad laboral en porcentaje de 79.55, fecha de estructuración 9 de enero de 2005.

4.- Que cotizó al sistema en dos oportunidades, de julio a diciembre de 2004, y enero de 2005, que corresponde a 30 semanas.

5.- Que de acuerdo certificación del Ejército Nacional, del tiempo de prestación de servicio militar obligatorio del periodo comprendido entre el enero 2002 a noviembre de 2003, presenta 22 meses y 18 días, equivalen a 96.65 semanas, que sumadas a las cotizadas al fondo suman 126.6 semanas.

6.- Que como quiera que la norma establece que con fecha anterior a la estructuración de la invalidez, debe haberse cotizado 50 semanas durante los últimos tres años, considera que cumple con dicho requisito, pues a dicha fecha había cotizado 118.5 semanas.

7.- Que radicó los documentos ante el fondo de Pensiones Porvenir, el cual le respondió que el estudio demostró que había cotizado al sistema general de pensiones 25.71 semanas, por lo que no reúne el requisito de las 50 semanas.

8.-Que en el mes de agosto de 2016, su apoderado se presentó PORVENIR Cali, donde le fue informado que las semanas del servicio militar pagado si sumaban como aporte para el reconocimiento de pensión, y que debía además allegar carta de ejecutoria de la calificación de la Junta regional de Calificación y el certificado de bono pensional. Y fueron radicados en septiembre de 2016, donde le fue informado a su apoderado que la solicitud quedaba en suspenso hasta tanto el Ministerio de defensa girara los valores del bono pensional. Más tarde recibe comunicado de septiembre 22 de 2016, negándole el pago de la pensión de invalidez, alegando que el tiempo cotizado por el servicio militar obligatorio no cubría contingencia de invalidez sino pensión de vejez.

9.- Considera por ello que el fondo quebranta la normatividad vigente en relación a la seguridad social en Colombia como también los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional.

10.- Que sumado a lo anterior, desconoce los pronunciamientos de la Corte respecto de los principios constitucionales y la dignidad humana al no permitirle mejorar sus condiciones dado que sus padecimientos de salud son progresivos.

III. ACTUACIÓN PROCESAL EN LA PRIMERA INSTANCIA.

La solicitud de tutela fue presentada el día 04 de Octubre de 2016, ante la Oficina de Apoyo Judicial local, correspondiéndole su conocimiento al Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de esta ciudad, quien la admitió mediante proveído Nro.826 del 5 de Octubre del 2016, concediéndole el término de dos (2) días para que se pronunciara respecto de los hechos y las pretensiones de la acción de tutela, tanto al FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. como a los

vinculados JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA, BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS y al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Requirió al actor para que allegara prueba que justificara ordenar medida provisional.

Las entidades accionadas y vinculadas fueron enteradas mediante oficios que fueron remitidos a través del servicio de correo postal 472.

Frente a la medida provisional, el a-quo la denegó, considerando que no se cumplía con los requisitos del artículo 7º del decreto 2591 de 1991.

PRONUNCIAMIENTO de FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

Esta entidad mediante su apoderada judicial, manifestó que el actor no cumple con los requisitos establecidos por la normatividad vigente, y que de ello fue enterado el actor en el año 2005, pues a la fecha de estructuración de su invalidez -9 de enero de 2005- no cumplía con el termino de cotización al sistema, esto es 50 semanas en los últimos tres años. Agrega, que el tiempo de prestación de servicio militar obligatoria no se puede computar dado que este hace parte de un régimen diferente y que de acuerdo al artículo 40 de la Ley 40 de 1993, solo se calcula para efectos de cesantías, pensión de jubilación de vejez y prima de antigüedad.

Menciona, que lo que procede en el caso del señor ESPINOSA OLAYA, es lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 100 de 1993, esto es la devolución de saldos, y al respecto el actor radicó comunicado aceptando la devolución de saldos en el mes de junio de 2016, sin embargo con solicitud fechada 19 de septiembre solicita que se reconsidere el reconocimiento de su pensión de invalidez, ante lo cual le dio respuesta con comunicado fechado 22 de septiembre de 2016.

De otro lado, alega que en el caso en comento no se cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción constitucional, en atención al principio de inmediatez y subsidiaridad. En consecuencia, expresa que respecto del derecho de petición elevado se encuentra ante un hecho superado por haberse dado respuesta de fondo, y solicita se deniegue el amparo invocado por improcedencia de la acción constitucional.

IV. FALLO IMPUGNADO.

El A-quo, en Sentencia Nro.190 del 19 de octubre de 2016, resolvió: **"PRIMERO.- CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales a la SEGURIDAD SOCIAL, AL MÍNIMO VITAL, DEBIDO PROCESO, A LA SALUD Y LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, del señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA... ORDENAR a la contra la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. para que en el término no superior a 20 días proceda a COMPUTAR las cotizaciones bajo el servicio militar obligatorio y generar una nueva historia laboral de los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral(...)"**

V. LA IMPUGNACIÓN.

Inconforme con lo decidido, la accionada AFP PORVENIR S.A. estando dentro del termino legal, el día 22 de Octubre de 2016 impugnó la decisión por considerar que no se ajusta a derecho, insistiendo en los argumentos expuestos en la contestación de la acción constitucional. Exponiendo además, que el actor no cumple con los requisitos señalados en la ley para acceder al derechos a la pensión, como tampoco, que la acción constitucional invocada, no cumple con los requisitos constitucionales para acceder al amparo, como son los principios de inmediatez y subsidiaridad, y que el actor no logró demostrar que estuviese ante un perjuicio irremediable, en consecuencia solicita que se revoque, se deniegue o declare improcedente.¹

VI. CONSIDERACIONES

Con el propósito de resolver lo concerniente con la impugnación presentada contra el fallo de primera instancia, se hace necesario tomar las siguientes determinaciones:

a. Decisiones sobre validez y eficacia del proceso.

I. Competencia:

En primer lugar cabe destacar que se encuentra agotado todo el trámite procesal previsto en el Decreto 2591 de 1991 y en los Decretos reglamentarios 306 de 1992 y 1382 de julio 12 de 2000, para la acción de tutela, en lo concerniente a la primera instancia, y siendo competente este Juzgado, se debe proceder, en consecuencia, a proferir el fallo de mérito, en el presente asunto, al no observar causal de nulidad alguna que lo pueda afectar.

II. Eficacia del proceso:

En el presente caso se encuentran reunidos los requisitos señalados para emitir sentencia consistente en que la demanda se presentó en debida forma, la capacidad para ser partes está demostrada para ambas partes pues el accionante está legitimado para impetrar la acción como quiera que es el presunto afectado con la actuación de las entidades accionadas y éstas a su vez se encuentran legitimadas, por pasiva, como quiera que son las que presuntamente están afectando con su actuación los derechos reclamados por el accionante.

b. Problema Jurídico a resolver:

El tema a decidir, en asuntos como el que nos ocupa, gira en torno a la vulneración o amenaza de uno o varios derechos fundamentales de una persona por parte de una acción u omisión de una autoridad privada. En el presente caso el objeto de la decisión se circunscribe a determinar si la decisión de primera instancia, tomada por el Juez de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Tuluá, de proteger los derechos fundamentales reclamados está o no ajustada a derecho, teniendo en cuenta que el actor alega que tiene derecho a que se

¹ Fl 1 y ss Cdno 2°

le compute el tiempo cotizado durante la prestación del servicio militar obligatorio, a fin de que le sea reconocida la pensión de invalidez.

El Despacho sostendrá la tesis de que, en el presente caso, dadas las pretensiones, condiciones de salud del actor, y los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, se considera procedente ordenar que se compute el tiempo de prestación de servicio militar obligatorio, para que se defina si se cumple o no con los requisitos para que el actor pueda acceder al reconocimiento de su pensión de invalidez, en aras de proteger los derechos fundamentales invocados, esencialmente el derecho a la vida en condiciones dignas.

Para iniciar, se dirá que la acción de tutela se creó como un mecanismo para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política. El artículo 86 de la Carta establece que esta acción *"sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable"*. Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, se deduce que la procedencia de esta vía judicial está supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales ordinarias con que cuente el interesado².

Frente al tema de subsidiariedad, la Honorable Corte Constitucional, en sentencia T-413 de 2016, conceptuó:

"... 28. *Subsidiariedad: Sobre la base de lo dispuesto en los numerales 23 y 24 de esta providencia, la subsidiariedad se deriva del carácter excepcional, preferente y sumario que tiene la acción de tutela, el cual le impone al ciudadano la obligación de acudir a los mecanismos judiciales antes de invocar la protección de los derechos fundamentales a través de la tutela, salvo que de no invocarse se presente la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el cual para ser tal exige que sea inminente, grave, que requiera medidas urgentes de protección y que la acción de tutela sea impostergable*[32].

Al respecto, la sentencia T-222 de 2014 manifestó: *"[e]ste requisito de subsidiariedad implica, en otros términos, que el amparo constitucional procede siempre y cuando, en principio, no exista en el ordenamiento jurídico otro mecanismo judicial para defender el derecho que se discute. La idea es que la tutela no se convierta en un sustituto ni en una vía paralela a otras instancias. Precisamente, todos los procesos judiciales deberían, como en efecto tiene que suceder, ser los principales guardianes y defensores de los derechos fundamentales de las personas. Los primeros llamados a protegerlos son los jueces ordinarios (Artículo 4 CN). A partir de allí, esta Corporación ha fijado unas reglas que deben tenerse en cuenta"*.

Acto seguido, la sentencia T-222 de 2014 al realizar el examen de subsidiariedad afirmó que dicho análisis no finaliza con corroborar la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, sino que además, implica verificar que dicho medio de defensa sea eficaz e idóneo, puesto que en caso de no serlo, la acción de tutela será el mecanismo indicado para proteger los derechos fundamentales y, en consecuencia, evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

La eficacia consiste en que el mecanismo judicial este *"diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho"*[33]. Es decir, que una vez resuelto por la autoridad judicial o administrativa[34] competente, tenga la virtualidad de garantizarle al solicitante oportunamente el derecho. A su vez, se entiende que una acción judicial es inidónea, cuando

² Sentencia T-983 de 2001.

"no permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución integral frente al derecho comprometido." [35]

De acuerdo con los fundamentos de hecho que plantea el presente caso, la Sala considera que la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de la seguridad social, en principio es la idónea para resolver la controversia que se plantea en el presente caso y determinar si el tiempo de duración de la prestación del servicio militar obligatorio, debe ser contabilizado como tiempo de servicio válido en el trámite de prestaciones sociales y si el señor Roberto Belarmino Piedrahita Henao cumple con los requisitos establecidos en la ley para acceder a la pensión de invalidez.

En este sentido, la Ley 712 de 2001, mediante la cual se reformó el Código Procesal del Trabajo en el artículo 2, estableció:

"ARTÍCULO 2º. El artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social quedará así: "ARTICULO 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: (...) 4. Modificado por el art. 622, Ley 1564 de 2012. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan (...)". (Subrayado fuera del texto original)

De lo anterior, se desprende que el ordenamiento jurídico previó un mecanismo judicial idóneo para resolver y brindar una solución integral al problema jurídico que plantea la situación fáctica relatada por el demandante. Sin embargo, como ya se advirtió, no basta con corroborar la existencia de un mecanismo de defensa judicial, sino que además es necesario que dicho mecanismo sea idóneo y eficaz.

Teniendo en cuenta lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que el requisito de subsidiariedad se flexibiliza y la tutela se hace procedente cuando (i) el beneficiario de la pensión es un sujeto de especial protección constitucional; (ii) pese a existir mecanismos ordinarios para la defensa de los derechos invocados, estos no son idóneos para proteger los derechos fundamentales invocados; (iii) si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo resulta evidente la configuración de un perjuicio irremediable [36]; y (iv) cuando, el actor ha acreditado un mínimo de diligencia en la búsqueda administrativa del derecho presuntamente conculcado, la afectación de su mínimo vital como consecuencia de la negativa pensional, y una meridianamente convicción sobre el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento del derecho reclamado [37].

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha entendido que los sujetos que merecen especial protección constitucional son, por ejemplo, menores de edad (Art. 44 C.P.), personas de la tercera edad (Art. 46 C.P.), discapacitados (Art. 47 C.P.) y madres cabeza de familia (Art. 43 C.P.), y en estos casos "(...) es posible presumir que los medios ordinarios de defensa no son idóneos y, por tanto, la acción de tutela debe proceder y ser concedida." [38]

En el presente caso se observa que el señor Roberto Belarmino Piedrahita Henao cuenta con los mecanismos previstos ante la jurisdicción competente para solicitarle a Porvenir S.A. el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez o la devolución de saldos teniendo en cuenta el tiempo cotizado durante la prestación del servicio militar obligatorio. Sin embargo, la Sala considera que la acción de tutela es procedente por tratarse de un sujeto de especial protección constitucional al tener una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, además en este caso es posible inferir la afectación del derecho al mínimo vital debido a su condición de discapacidad, lo que supone una limitación para trabajar y procurarse sus necesidades básicas. De la misma forma, en el acervo probatorio del caso concreto, se evidencia que el actor ha llevado a cabo actividades administrativas para obtener la protección de los derechos.

Por los motivos expuestos, la Sala considera que en el presente caso, el requisito de subsidiariedad se satisfizo.

La Honorable Corte Constitucional en la Sentencia citada anteladamente, se pronunció respecto del derecho a la pensión de invalidez y sus requisitos para su reconocimiento, así:

"... LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, REQUISITOS Y BENEFICIARIOS DE ESTE DERECHO. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

30. Esta Corporación ha definido la pensión de invalidez como una compensación económica tendiente a resguardar las necesidades básicas de aquellas personas cuya capacidad laboral se ve disminuida, como una fuente de ingreso para solventar una vida en condiciones de dignidad[39]. Este derecho adquiere una connotación especial al buscar preservar los derechos de los sujetos de especial protección como las personas que tienen una disminución física, sensorial o psiquiátrica[40].

31. La Ley 100 de 1993 *"por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"*, en el capítulo III, regula lo relativo a la pensión de invalidez por riesgo común. En el 38 dispuso que se considera una persona inválida cuando por *"cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral"*.

32. El artículo 39 de la Ley 100 de 1993[41], modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, estableció que para el reconocimiento de la pensión de invalidez se requiere:

"(i) haber cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración.

"(ii) una fidelidad de cotización al sistema no menor al veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que la persona cumplió 20 años y la fecha de calificación de la invalidez.

"PARÁGRAFO 1o. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.

"PARÁGRAFO 2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años."

33. La Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 en la sentencia C-428 de 2009. En esta ocasión, estimó que el requisito de fidelidad de cotización al sistema -del 20% para el reconocimiento de la pensión de invalidez- contradecía el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, entre el cual se encuentra el derecho a la seguridad social. En virtud de lo anterior, la Sala Plena concluyó *"que el requisito de fidelidad contemplado en la norma analizada, tanto en su numeral 1º como en el 2º, deben ser declarados inexecutable puesto que no se logró desvirtuar la presunción de regresividad y justificar la necesidad de la medida de acuerdo con los fines perseguidos por la misma"*. [42] Siguiendo la misma línea, la sentencia C-556 de 2009 declaró inexecutable los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que también establecían requisitos de fidelidad al sistema.

34. De conformidad con lo señalado previamente la disposición aplicable en la actualidad tiene el siguiente texto:

"Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:

"1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.

"2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.

"Parágrafo 2º. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años."

En suma para acceder a la pensión de invalidez es necesario que el afiliado acredite una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50% y que haya cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. De forma particular, cuando el peticionario tiene 20 años o menos deberá demostrar que cotizó al menos 26 semanas en el año inmediatamente anterior al suceso que le origina la invalidez y cuando haya cotizado el 75% de las semanas requeridas para la pensión de vejez solo necesitará acreditar que cotizó 25 semanas en los últimos 3 años.

E. EL TIEMPO Y SEMANAS COTIZADAS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO DEBE ACUMULARSE AL TIEMPO COTIZADO EN EL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

35. La Ley 2 de 1945 *"por la cual se reorganiza la carrera de Oficiales del Ejército, se señalan prestaciones sociales para los empleados civiles del ramo de Guerra y se dictan otras disposiciones sobre prestaciones sociales a los individuos de tropa"*, en la sección II que versa sobre el retiro de oficiales y sus prestaciones, en el artículo 46 dispuso que el *"tiempo de servicio, para todos los efectos, se liquida a partir de la fecha del ingreso al Ejército, en cualquier grado, inclusive como soldados y los dos últimos años de permanencia en la Escuela Militar de Cadetes."* Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la disposición mencionada le reconocía a todos los integrantes de las fuerzas militares, incluso a los soldados, el derecho a contabilizar para el cálculo de la pensión de vejez el tiempo destinado a dicha labor, desde el mismo momento del ingreso[43]. La Ley 2 de 1945 fue derogada por la Ley 126 de 1959[44] y el Decreto Ley 2339 de 1971[45].

36. Posteriormente, el Decreto Ley 2400 de 1968[46], en el artículo 24, dispuso:

"Cuando un empleado del servicio civil es llamado a prestar el servicio militar obligatorio, sus condiciones como empleado en el momento de ser llamado a filas no sufrirán ninguna alteración, quedará exento de todas las obligaciones anexas al servicio civil y no tendrá derecho a recibir remuneración. Terminado el servicio militar será reintegrado a su empleo. Para efectos de cesantía y pensión de retiro no se considera interrumpido el trabajo de los empleados que sean llamados a prestar servicio militar obligatorio. (...)" (Subrayado fuera del texto original).

El Decreto Ley 2400 de 1968 reglamentado por el Decreto 1950 de 1973[47], señaló en el artículo 101[48] que el tiempo de servicio militar debía ser tenido en cuenta para efectos de cesantía, pensión de jubilación o de vejez y prima de antigüedad.

37. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 216 consagra la obligación de los colombianos de tomar las armas cuando las necesidades públicas así lo exijan. Las condiciones eximentes de la prestación del servicio militar, así como sus prerrogativas, serán previstas por la ley.

38. En desarrollo del mencionado mandato constitucional, la Ley 48 de 1993 que regula el servicio de reclutamiento y movilización, en su artículo 40 reza:

"Artículo 40. Todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio tendrá los siguientes derechos:

a. *En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar le será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación, de vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley; (...)"*

39. La sentencia T-063 de 2013 analizó el caso de una persona con más de setenta años de edad y con una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, a quien el ISS no le tenía en cuenta el tiempo correspondiente a la prestación del servicio militar obligatorio. En este caso, la Corte le ordenó a la accionada liquidar y pagar la pensión de vejez incluyendo las semanas correspondientes a la prestación del servicio militar obligatorio. Después de analizar las normas que establecen los beneficios para las personas que prestaron el servicio militar obligatorio concluyó que *"desde el año de 1945 se estableció un régimen de carácter legal y reglamentario, en el que se reconoce la obligación de tener en cuenta el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio para el cálculo de varias prestaciones sociales, entre ellas la pensión de vejez. Este régimen se mantuvo con la expedición de la Constitución Política de 1991, en la que se dispuso el deber del legislador de reconocer prerrogativas a quienes prestan dicho servicio y así se consagró en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993."*

40. A su vez, la sentencia T-510 de 2014 estudio el caso de un ciudadano que tenía una pérdida de la capacidad laboral del 56.75% y solicitaba a la entidad accionada el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez teniendo en cuenta las cotizaciones realizadas durante la prestación del servicio militar obligatorio. Al respecto, dicha providencia aseveró que la Corte Constitucional había establecido que *"no existe una razón objetiva para excluir a las pensiones que se someten al principio de cotización efectiva del reconocimiento del tiempo prestado en el servicio militar conforme al artículo 40 de la Ley 48 de 1993."*

41. De igual manera, la sentencia T-739 de 2014, analizó una acción de tutela contra providencia judicial en la que concluyó que se vulneró el derecho al debido proceso del actor por defecto sustantivo, puesto que en la sentencia reprochada se pasó por alto la normatividad aplicable al caso, esto es, el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, según la cual, todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio, tiene derecho a que este tiempo le sea computado para efectos de pensión de jubilación y vejez. La Corte sostuvo que *"el beneficio en comento se traduce en el derecho de cualquier colombiano a que, habiendo prestado el servicio militar obligatorio y solicitado su derecho pensional ante una entidad pública, le sea tenido en cuenta ese tiempo como útil o válido para acceder a la pensión. Adicional a ello, esta Corte considera que en concordancia con el principio de favorabilidad, este beneficio se aplica, incluso, en los casos en los cuales la prestación del servicio militar se realizó con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma..."*

CASO CONCRETO

Tenemos entonces, que del escrito de amparo constitucional el señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA, manifiesta que la Administradora de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., se niega a reconocerle pensión de invalidez, alegando que a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral -9 de enero de 2005- no cumplía con el requisito legal de haber cotizado 50 semanas en los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración. Que desconoce tanto los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional como su condición de salud, insistiendo en que lo que procede es la devolución de saldos. Agrega, que la accionada se niega a computar el tiempo cotizado en prestación del servicio militar obligatorio.

Revisado el expediente, se pudo comprobar que, efectivamente el señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA, fue calificado con pérdida de capacidad laboral en 79.55%, con fecha de estructuración del 9 de enero de 2005. De acuerdo a la respuesta emitida por la accionada HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS, hoy PORVENIR S.A, al actor, en oficio de respuesta a su solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez, le manifestó que no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, esto es, no había cotizado 50 semanas en los últimos tres años a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral, que solo

contaba con 25.71 semanas, en consecuencia lo que procedía era la devolución de aportes.³ De otro lado, a folio 25 obra, certificado de información laboral en el cual se certifica que el actor prestó su servicio militar en el periodo comprendido entre el 11 de enero de 2002 al 18 de noviembre de 2003.

De igual forma a folio 305 obra respuesta dada por la AFP PORVENIR S.A., mediante la cual frente a la nueva solicitud elevada por el actor de reconsiderar el reconocimiento de la pensión de invalidez, la accionada se sostiene en su teoría respecto al lleno de requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, agregando que el tiempo de servicio como miembro de las Fuerzas Militares, no se computan por tratarse de un régimen especial exceptuado, y no se constituyen en aportes válidos para el reconocimiento de pensión de invalidez y sobrevivientes y que solo aplican para la expedición de bonos pensionales, y que de acuerdo al artículo 40 de la Ley 48 de 1993, dichos tiempos solo pueden computarse para pensión de jubilación por vejez.

Igualmente, revisado el expediente se observa que el actor probó, ser sujeto de especial protección, pues no solo la calificación de pérdida de capacidad laboral lo confirma, sino su historia clínica en la cual se puede apreciar que como consecuencia del accidente sufrido, viene padeciendo, un conjunto de padecimientos que disminuyen su salud, y peor aún, su calidad de vida, sumado a que en su escrito de solicitud de amparo, manifiesta no contar con los recursos económicos, por lo que se ha visto disminuido su calidad de vida, y afectación al mínimo vital.

Ahora bien, teniendo en cuenta, los argumentos expuestos por la accionada, respecto del incumplimiento de los principio que rigen la acción de tutela, tenemos, que de acuerdo a la controversia suscitada entre el actor y la accionada, esto es la determinación de si para el reconocimiento de pensión de invalidez cuenta o no, el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio, a fin de cumplir con los requisitos establecidos para acceder a la pensión de invalidez, acertadamente es la jurisdicción ordinaria-laboral, la llamada a resolverlo, pues es el mecanismo judicial idóneo, sin embargo no basta con reconocer la existencia de dicho mecanismo, sino que se además idóneo y eficaz, ante lo cual la Corte ha dispuesto que este requisito se flexibiliza y se hace procedente cuando : "... (i) el beneficiario de la pensión es un sujeto de especial protección constitucional; (ii) pese a existir mecanismos ordinarios para la defensa de los derechos invocados, estos no son idóneos para proteger los derechos fundamentales invocados; (iii) si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo resulta evidente la configuración de un perjuicio irremediable[36]; y (iv) cuando el actor ha acreditado un mínimo de diligencia en la búsqueda administrativa del derecho presuntamente conculcado, la afectación de su mínimo vital como consecuencia de la negativa pensional, y una meridiana convicción sobre el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento del derecho reclamado..."

Así las cosas, tenemos que en el presente caso, tales condiciones se cumplen, pues efectivamente el señor ESPINOSA OLAYA, i) es persona de especial condición, dada su discapacidad y condición de salud; ii) es posible presumir que los medios ordinarios de defensa no son idóneos, dado los términos prolongados que conlleva la solución de estos conflictos. iii) Dada las condiciones de salud del actor y la falta de recursos, lo que le hace aún más vulnerable, pues su deterioro es progresivo, lo que además le impide

³ Fl 7 y ss Cđno ppal

solventarse por sus propios medios y iv) el actor, pese a sus múltiples limitaciones físicas y de salud, no ha desistido de reclamar el reconocimiento de pensión de invalidez, lo cual prueba su diligencia en busca de que se le reconozca el derecho alegado. Con lo previamente citado, se pueden concluir que dada la calidad del actor, en este caso se considera procedente reclamar por esta vía constitucional, un derecho prestacional.

Ahora bien, siendo procedente esta acción, se procederá a determinar si la decisión del A-quo estuvo conforme a las normas y pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, teniendo en cuenta que de acuerdo a lo expresado por la accionada, es evidente que el actor cumple con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, el cual fue modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, el cual establece que tendrán derecho a la pensión de invalidez las personas que tengan una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50% y que haya, cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración, sumado a que el actor le fue calificada pérdida de capacidad laboral en 79.55%.

De acuerdo con los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, se considera que el objetivo de la pensión de invalidez, es asegurar que las personas cuya capacidad laboral se ve disminuida reciban una compensación económica como una fuente de ingreso que les sirva para llevar una vida en condiciones dignas, y para lograr tal objetivo es indispensable que se cumpla con los requisitos plurimencionados en este proveído.

De otra parte, frente al argumento de la accionada, quien asevera que el actor, no cumple con los términos de cotización esto es las cincuenta semanas en los últimos tres años anteriores a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral, tenemos que en el caso en comento de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, tienen derecho las personas que hayan prestado el servicio militar obligatorio a que dicho tiempo les sea computado para efectos pensionales, entre otras prestaciones económicas. La anterior disposición cuenta con fundamento constitucional en el artículo 216 de la Carta.

En el caso concreto, el actor solicitó que le sea tenido en cuenta el tiempo cotizado durante la prestación del servicio militar obligatorio para el reconocimiento de la pensión de invalidez, el cual de acuerdo al material probatorio se evidencia que el señor ESPINOSA OLAYA, del 11 de enero de 2002 al 18 de noviembre de 2003, prestó el servicio militar obligatorio. Posteriormente, tuvo un accidente de origen común que le causó una pérdida de la capacidad laboral del 79.550%, con fecha de estructuración del 9 de enero de 2005, ante lo cual es evidente que en los tres años anteriores a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral, se habían cotizado 50 semanas.

Por todo lo anterior, comparte este despacho judicial, la decisión tomada por el Juzgado de primera instancia, al tutelar los derechos invocados y en consecuencia ordenar a la AFP PORVENIR S.A., generar una nueva historia laboral, anterior a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, en la que se compute el término, cotizado bajo la prestación del servicio militar obligatorio.

En conclusión, al vislumbrarse vulneración a los derechos del accionante, la titular de este estrado judicial procederá a confirmar la decisión adoptada en Sentencia Nro.190 del 19 de octubre de 2016, proferida por el Juzgado Pequeñas Causas y Competencia múltiple de Tuluá, Valle del Cauca.

VII. DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tuluá, Valle del Cauca, obrando como Juez Constitucional de Tutela, administrando Justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia Nro.190 del 19 de octubre de 2016, proferida por el Juzgado de pequeñas causas y competencia múltiple de ésta localidad. De conformidad a lo expuesto en la parte motiva de éste proveído.

SEGUNDO. Por secretaría NOTIFICAR a las partes el presente fallo por el medio más expedito (Art. 30 Decreto 2591/91).

TERCERO. ORDENASE la remisión de las presentes diligencias a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


SANDRA LETICIA SUA VILLEGAS
Jueza

"Con este Desacato Se Visión obligados a pagarme"

38
38

Tuluá valle, 31 de enero 2.017

31 ENE 2017

Señores

JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE
Tuluá Valle del Cauca.

REFERENCIA : INCIDENTE DE DESACATO.

31 ENE 2017
Juzgado Pequeñas Causas

Respetados señores.

En una forma muy comedida y atenta, me permito participarles que el **FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS - "PORVENIR"** representado legalmente por un **GERENTE o PRESIDENTE**, cualesquiera que en estos momentos haga sus veces, se **HA NEGADO ROTUNDAMENTE**, a dar **CUMPLIMIENTO**, a la **SENTENCIA DE TUTELA** con radicación **768344189001-2016-00329-01 (2.016-241)** del 30 de noviembre de 2.016.

Tampoco le significó nada la **SENTENCIA ORIGINAL** o de primera Instancia emitida por el despacho de Pequeñas Causas, sentencia de número 190 del 19 de octubre de 2.016- radicación 76-834-41-89-01- 2016- 00329-00, sin tener en cuenta **PORVENIR**, que las ordenes Judiciales son de imperativo cumplimiento.

Con la sentencia que emitía este despacho atendía la impugnación formulada por el Fondo de Pensiones —**"PORVENIR"**— contra la sentencia 190 del 19 de octubre de 2.016 que fue confirmada.

La decisión de **PRIMERA INSTANCIA** por cierto Favorable a mis pretensiones decía:

RESUELVE.

PRIMERO : CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales, a la **SEGURIDAD SOCIAL, AL MÍNIMO VITAL, AL DEBIDO PROCESO, A LA SALUD Y A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS** del señor **FABIO ALONSO ESPINOSA** de condiciones civiles anotadas, incoada contra la administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías **PORVENIR S.A.** En cabeza del representante legal o quien haga sus veces.

SEGUNDO.- ORDENAR a la contra la administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías **PORVENIR S.A.**, para que en el término no superior a 20 días proceda a **COMPUTAR** las cotizaciones bajo el servicio militar obligatorio y generar una nueva historia laboral de los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de Capacidad Laboral “.

Pero pese al mandato anterior no ha dado su cumplimiento, es decir hizo caso omiso al **ORDENAMIENTO DE LAS DOS SENTENCIAS.**

Como siempre ha tenido por costumbre este **FONDO DE PENSIONES PORVENIR**, quebrantar la totalidad de **MIS DERECHOS FUNDAMENTALES**, lo que me ha perjudicado **NOTABLEMENTE**, dada mi situación de **DISCAPACIDAD** y que mis **PATOLOGÍAS** son **CATASTRÓFICAS** sin que tenga un **BUEN PRONÓSTICO DE VIDA.**

Es notorio y de fácil comentario percibir mis patologías padecidas que muy fácil se adscriben a “ catastróficas “ entre ellas mi cerebro totalmente atravesado por **UNA VÁLVULA DE JAKER**; que llega a mi **CORAZÓN**; llegando hasta el ombligo por el abdomen; inserto en mi cerebro hay un **CATETER** de importante dimensión ; convulsiono con ataques epilépticos en forma casi continua y el lado izquierdo de mi cuerpo prácticamente paralizado, nada de esto ha causado importancia para **PORVENIR**, que sigue negando en forma de Vía de Hecho el otorgamiento de mi **PENSIÓN DE INVALIDEZ**, desde el año de 2.003.

AY
40
Q

Bajo la gravedad de juramento me permito informar a los señores del JUZGADO que en fecha 07 de septiembre de 2.016 mi apoderado en aquél entonces señor JOSÉ TEODORO GONZÁLEZ radicó la totalidad de documentos que me daban ACCESO a mi PENSIÓN DE INVALIDEZ, y la niña que los recibió contestó que tales requisitos estaban a satisfacción.

Además entregué la CERTIFICACIÓN DE MI BONO PENSIONAL, obtenido por el SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO cumplido en el ejército.

Al respecto me permito lo que dicen las normas sobre el BONO.

“20- LA TARDANZA INDEFINIDA EN EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD Y EXPPEDICIÓN DEL BONO PENSIONAL AFECTA LOS DERECHOS A LA VIDA DIGNA, INTEGRIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN DE LA TERCERA EDAD DEL FUTURO PENSIONADO “.

Sentencia T-699/01

Referencia expediente. T-434531.

Magistrado ponente. Doctor Álvaro Tafur Gaviria.

“El bono pensional adquiere relevancia constitucional cuando las empresas obligadas a solicitarlo y expedirlos tardan en hacerlo por negligencia o falta de comunicación e información entre éstas, puesto que tales circunstancias perjudican al extra-bajador , trabajador o afiliado no dejándolo que disfrute de una pensión solicitada.

“ ES DE PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO QUE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO DE UNA PRESTACIÓN, O PENSIÓN PARA QUIENES CON EL RECONOCIMIENTO DE TALES SE COMPLETA CON EL BONO, SON ESTAS INSTITUCIONES LAS QUE DEBEN SOLICITAR EL PAGO DEL BONO, MÁS NO EL AFILIADO, RECLAMANTE O ACCIONANTE “.

29.- "PARA EL RECONOCIMIENTO DE UNA PENSIÓN NO ES NECESARIO EL PAGO DEL BONO PENSIONAL. EN TODO CASO SERÁ NECESARIO QUE EL BONO HAYA SIDO EXPEDIDO.

SENTENCIA T-491/01

Referencia expediente T-411962

MAGISTRADO PONENTE.

Doctor JUAN MANUEL CEPEDA ESPINOSA.

"DE ACUERDO CON LOS HECHOS RESEÑADOS, PROCEDE LA CORTE CONSTITUCIONAL A ESTUDIADO SI LA NEGATIVA DEL I.S.S. A DEFINIR SI EL ACCIONANTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSION DE JUBILACION, NEGATIVA QUE EL I.S.S. JUSTIFICA POR LA EMISION DEL BONO PENSIONAL POR PARTE DE LA ENTIDAD COMPETENTE PARA EL EFECTO, VULNERA LOS DERECHOS DEL ACCIONANTE Y EN ESPECIAL EL DERECHO DE PETICION Y EVENTUALMENTE EL DERECHO A LA PENSION DE JUBILACION EN SU CALIDAD DE COMPETENTE DEL DERECHO DEL TRABAJO.

LA CORTE CONSTITUCIONAL SE HA PRONUNCIADO EN REINTERADAS OPORTUNIDADES ACERCA DEL DERECHO DE PETICION, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCION DE 1991 EN UN FALLO DE 1992, ESTA CORPORACION SE REFIRIO EN LOS SIGUIENTES TERMINOS A LA RELACION QUE SURGE ENTRE TAL DERECHO Y EL DERECHO A LA PENSION DE JUBILACION COMO CONSECUENCIA DEL DERECHO AL TRABAJO, CUANDO NO SE DA RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD PERTINENTE (EN DICHO CASO, EL I.S.S.) A LA PETICION DE UN ACCIONANTE PARA QUE SE HAGA RECONOCIMIENTO DE MENCIONADA PRESTACION LABORAL:

158

42

“DOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE OSTENSIBLEMENTE SE VIOLARON AL PETENTE, A SABER, EL DE PETICIÓN (AR.23, C.N.), PUES LA SUYA NO FUE RESUELTA DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES,PERO NI SIQUIERA DENTRO DE PERIODOS HUMANAMENTE IMAGINABLES,COMO SE HA DESCRITO, Y SE COMETIO CON EL UNA ABSURDA ARBITRARIEDAD EN TODASLAS FORMAS REPROCHABLE; Y EL DEL TRABAJO (ART.25,C.N.) QUE ES UNO DE LOS FINES DEL ESTADO Y CONSTITUYE FUNDAMENTO DE LA REPUBLICA [...]

ES DE NOTAR QUE [EL DERECHO DE PETICION] CONSISTE NO SIMPLEMENTE EN EL DERECHO DE OBTENER RESPUESTA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES SINO DE QUE HAYA UNA RESOLUCION DEL ASUNTO SOLICITADO, LO CUAL SI BIEN NO IMPLICA QUE LA DECISIÓN SEA FAVORABLE, TAMPOCO SE SATISFACE SIN QUE SE ENTRE A TOMAR UNA POSICION DE FONDO, CLARA Y PRECISA, POR EL COMPETENTE; POR ESTO PUEDE DECIRSE TAMBIEN QUE EL DERECHO DE PETICION QUE LA CONSTITUCION CONSAGRA NO QUEDA SATISFECHO CON EL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO EN ALGUNAS NORMAS DISPONEN, PUES ESTO APENAS EN MECANISMO QUE LA LEY SE INGENIA PARA EL ADELANTAMIENTO DE LA ACTUACION SEA POSIBLE Y NO SEA BLOQUEADA POR LA ADMINISTRACION,ESPECIALMENTE CON VISTA EN LA PROMOCION DE LAS ACCIONES JUDICIALES RESPECTIVAS, PERO EN FORMA NINGUNA CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES QUE SE DEJAN EXPUESTAS Y QUE RESPONDEN A UNA NECESIDAD MATERIAL Y SUSTANTIVA DE RESOLUCION Y NO UNA CONSECUENCIA MERAMENTE FORMAL Y PROCEDIMENTAL, ASI SEA DE TANTA IMPORTANCIA”.

EN UN FALLO RECIENTE DE UNIFICACION, ESTA CORPÓRACION REINTERO QUE LA PENSION DE JUBILACION ES UN COMPONENTE DEL DERECHO AL TRABAJO CUYO SENTIDO ES GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA EN CONDICIONES DIGNAS DE QUIEN, POR RAZONES DE LA

EDAD Y DEL TIEMPO DE COTIZACION EN EL CASO QUE A CONTINUACION SE CITA, ADQUIERE EL DERECHO A LA PRESTACION SEÑALADA:

EN INMUNERABLES PRONUNCIAMIENTOS DE LA CORTE HA REITERADO QUE EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES, EN CUANTO VINCULACION AL DERECHO A LA SUBSISTENCIA EN CONDICIONES DEGNAS, ADQUIERE LA CONNOTACION DE DERECHO FUNDAMENTAL.

Traigo a colación este grupo de sentencias en torno a mi BONO por cuanto PORVENIR, Fondo de Pensiones que siempre se ha distinguido por MENTIROsos y VULNERADORES de los Derechos Fundamentales puede manifestar que no HE REGISTRADO LOS BONOS por el SERVICIO MILITAR CUMPLIDO, con el ÚNICO FIN DE NEGARME MI PENSIÓN DE INVALIDEZ.

De la presentación de los bonos hay demasiadas constancias de haberlos radicado en **PORVENIR**, de manera que no puede este FONDO decir lo contrario que no me ha liquidado ni pagado la pensión por la falta de registro de este Bono, por cuanto se haría acreedor a una demanda por calumnia.

Lo que pasa y sucede es que **PORVENIR**, pese a existir el derecho a mi PENSIÓN DESDE hace muchos años atrás **NO HA QUERIDO NI QUIERE** pagarme la prestación ya citada.

Esta actuación de **MALA FE** de Porvenir, este manejo irregular, este abuso de poder, este abuso de autoridad y esta arbitrariedad me está causando males irremediables como es el caso de **NO TENER SEGURIDAD SOCIAL** y carezco de EPS, o cualesquier entidad de salud, teniendo en cuenta que antes para pagar COOMEVA, vendía boletas en compañía de mi madre , pero como los despachos judiciales me tutelaron gran parte de mis derechos fundamentales Renuncie al trabajo y no tengo como adquirir los medicamentos que tornan tan importantes para seguir viviendo, como es el caso de oxigenar mi Cerebro y los Medicamentos para evitar la **CONVULSIÓN PERMANENTE**; sigue el caso de que estoy **AGUANTANDO HAMBRE** , soy persona enferma **DESEMPLEADA**

358

44

e inútil. No tengo dineros para pagar el arriendo y menos los servicios públicos.

AUTÉNTICO DESACATO.

Por haber desatendido PORVENIR, las sentencias a mi favorables a mis pretensiones está cometiendo un **AUTÉNTICO DESACATO**, que debe ser sancionado por las leyes de Colombia

Se vislumbra, se tipifica, y mirado desde cualesquier óptica se desprende que hay un **INCUMPLIMIENTO DE PORVENIR** cuando no me ha querido pagar mi **PENSIÓN DE INVALIDEZ**, en este caso se ha burlado de las disposiciones Judiciales.

CAPÍTULO V.

SANCIONES.

ARTÍCULO 52. DESACATO.

"La persona que incumpliere una orden de un Juez proferida con base en el presente decreto, incurrirá en desacato sancionable hasta con arresto de **SEIS MESES y MULTA HASTA DE 20 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES** salvo que en este DECRETO ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 53, SANCIONES PENALES.

"EL QUE INCUMPLA EL FALLO DE TUTELA O EL JUEZ QUE INCUMPLA LAS FUNCIONES QUE LE SON PROPIAS DE SU CARGO CON ESTE DECRETO SEGÚN EL CASO, EN " fraude a Resolución Judicial, Prevaricato por omisión o en las sanciones penales a que hubiere lugar".

Le ruego respetuosamente al Juez del despacho que le corresponda este trámite aplicar el arresto para este Gerente, pues la ley NO puedo tolerar que se burlen de las personas y sobre todo el caso del suscrito que prácticamente estoy MUERTO.

(49) (5)

PRETENSIONES URGENTES.

PRIMERO.

Como conozco de los largos procedimientos a que conlleva el DESACATO y en virtud de los **GRANDES MALES IRREMEDIABLES** que me ha causado el **MAL COMPORTAMIENTO DE PORVENIR**, le suplico al señor Juez que mi trato sea preferencial o lo contemplado en el artículo 7° que dice.

ARTÍCULO 7° MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO.

Desde la presentación de la solicitud, cuando el Juez lo considere expresamente necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la Aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere “.

SEGUNDA.

ORDENAR que PORVENIR ME PAGUE EN FORMA INMEDIATA MI PENSIÓN DE INVALIDEZ.

ORDENAR QUE PORVENIR ME CANCELE LA TOTALIDAD DE PRIMAS DE JUNIO Y DICIEMBRE DESDE LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN.

ORDENAR que PORVENIR ME PAGUE MI PENSIÓN DE INAVLIDEZ DESDE LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN.

Anexos.

Les hago llegar siguientes documentos.

- Dos fotocopias de las sentencias
- Fotocopias del Bono Pensional
- Carta con las cuales radiqué documentos.

Cualesquier información con respecto a lo manifestado a través de este escrito está autorizada ampliamente la señora LADY JOHANNA GIRALDO CASTAÑO con dirección carrera 22B Número 15-79 Barrio Maracaibo Tuluá valle celular 3215887722 teléfono 2262874.

Se torna de vital importancia participar a los señores del Despacho que hoy 30 de enero de 2.017, me comuniqué con la línea gratuita de Porvenir 018000517170 y contestándome un señor de nombre CARLOS SIERRA me dijo " en el computador NO SE REFLEJA NADA ".

Al expresarle mi estado de salud me indicó ante esta situación busque su reclamación por el medio que mejor le convenga. Le indique que presentaría desacato y dijo si es lo correcto debe hacerlo.

EL DESACATO HAY QUE HACERLO CONTRA EL PRESIDENTE DE PORVENIR DOCTOR MIGUEL LARGACHA.

Con toda atención,

FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA
FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA.



Radicado - Porvenir S.A.



0200001140527000

2410/
Bogotá D.C.

13 FEB. 2017

Señor(a):
FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA
Carrera 22 B # 15 - 79
Tuluá, Valle.

Ref. Rad Porvenir N/A
Tipo de Solicitud: Solicitud por Invalidez
Afiliado: Fabio Espinosa
C.C. 14.798.345
T.N. N/A
COR -- BEN

Respetado(a) Señor(a):

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., se permite informarle que reconoce la solicitud Pensional con fundamento en la información y documentación allegada mediante Sentencia proferida por el Juzgado Tercero (03) del Circuito de Tuluá.

A continuación detallamos la información que usted debe conocer y los pasos a seguir:

1. ¿Cuál es el valor de la mesada?:

Para el año 2017 el valor de la mesada es de \$737.717.

2. ¿La mesada tiene algún descuento?:

Sí, se aplica un descuento del 12% sobre el valor total de la mesada para el pago de salud, que en su caso corresponde a la suma de \$88.526. El valor neto que recibirá mensualmente será de \$649.191.

Este descuento le permite acceder a los servicios en la Entidad Promotora de Salud (EPS) y se debe aplicar independientemente si usted ya es cotizante a salud como empleado o como beneficiario de algún cotizante, dado que el aporte a salud se hace por la totalidad de los ingresos que usted recibe.

3. ¿Qué pagos recibió a partir del presente reconocimiento?:

Un pago único por valor de \$90.095.854,00 que corresponde a las mesadas reconocidas a partir del 09 de Enero de 2005 hasta el mes de Febrero de 2017; pago realizado en cheque a través de la Oficina Porvenir Tuluá,

4. ¿Cómo se distribuye la pensión? Se distribuye de acuerdo con los beneficiarios que se presentaron en la solicitud y tienen derecho:

Nombre	Parentesco	% de distribución
FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA	TITULAR	100%

Próximos pasos que usted debe realizar:

5. Cuenta para realizar el pago de la mesada

Lo invitamos a que realice la apertura de una **cuenta bancaria pensional** con la cual obtendrá los siguientes beneficios:

- Sin cuota de manejo
- La cuenta es exenta del gravamen de cobro de transacciones financieras (4*1000)
- Tiene beneficios especiales en créditos de consumo y tarjetas de crédito.
- Es opcional el manejo de retiros con tarjeta débito o talonario.

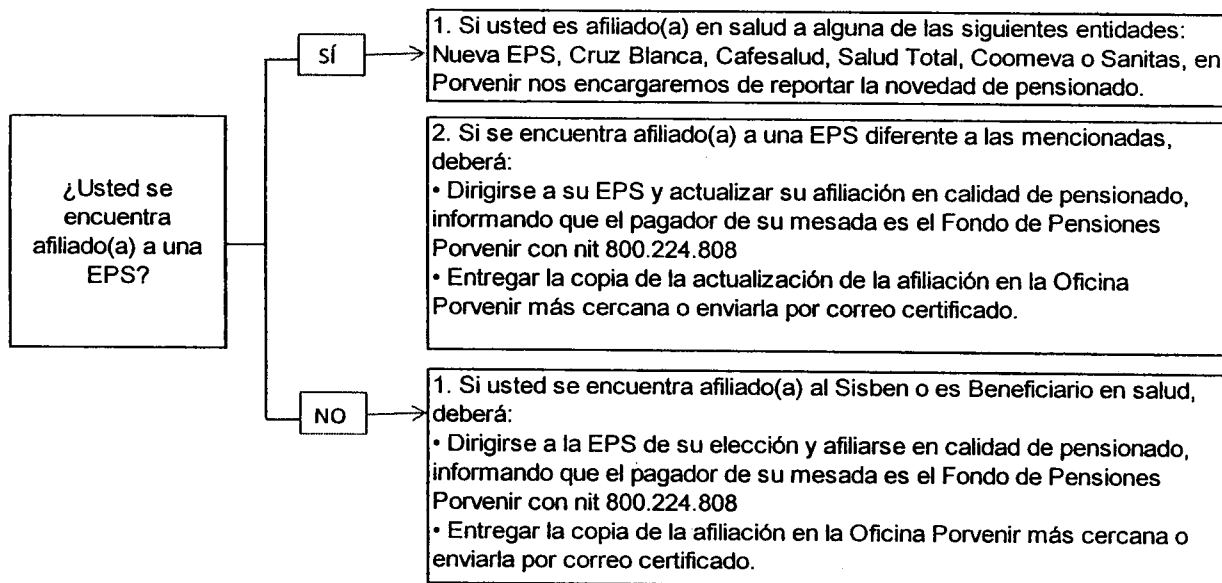
Dirijase a cualquiera de las oficinas a nivel nacional del Banco de Bogotá, Banco Popular, Bancolombia, BBVA donde debe informar que el pagador de su pensión será Porvenir S.A. a través del Fondo de Retiro Programado con nit 900.394.960-0 anexando:

- Copia de esta comunicación.
- Copia de su documento de identidad ampliado al 150%.

Una vez realizada la apertura de la cuenta pensional solicite una certificación de la cuenta y entréguela en la Oficina de Porvenir más cercana o envíela por correo certificado.

Si usted tiene una cuenta bancaria y la informó al momento de radicar su solicitud, en esta cuenta le realizaremos el pago de sus mesadas; si no la informó, le agradecemos solicitar una certificación bancaria de su cuenta y entregarla en la Oficina de Porvenir más cercana o enviarla por correo certificado.

6. Afiliación a la EPS





Recuerde que si en un futuro decide trasladarse de EPS, debe informarnos su traslado de forma oportuna en la Oficina Porvenir más cercana o enviarla por correo certificado, anexando la constancia de aceptación y aprobación de traslado; lo anterior garantizará la prestación de sus servicios de salud.

En resumen, es fundamental que realice los trámites correspondientes a la cuenta bancaria pensional y la EPS para recibir los beneficios del pago de la pensión y de los servicios de salud de manera oportuna.

Tenga la tranquilidad que lo acompañaremos en esta nueva etapa de su vida y que nuestros canales de servicio estarán a su disposición: www.porvenir.com.co, Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 7447678 o a nivel nacional sin costo 01800510800 y oficinas nivel nacional.

Cordialmente,

DIANA MARTINEZ CUBIDES
Dirección de Litigios
Yeny R/Johan M.

c.c. Archivo y correspondencia
Exp. PI 70729

50 94
Radicado - Porvenir S.A.



0103872011802900

Tuluá valle, 13 de marzo de 2.017

Señores

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS

"PORVENIR "

Ciudad,



REFERENCIA : UN DERECHO DE PETICIÓN. Artículo 23 NUESTRA CARTA.

ASUNTO: RECLAMACIÓN DE INTERESES MORATORIOS CAUSADOS
POR EL RETARDO INJUSTIFICADO DE PORVENIR EN EL PAGO
DE MI PENSIÓN DE GRAN INVALIDEZ.

RESPONSABLE EL FONDO DE PENSIONES PORVENIR.

De una manera atenta, respetuosa , comedida y con la facultad que me otorga el postulado 23 fundamental de la constitución , les solicito **LA CANCELACIÓN DE MIS INTERESES MORATORIOS**, originados por el **RETARDO INJUSTIFICADO** de su parte en la liquidación y pago de **MI PENSIÓN DE GRAN INVALIDEZ** ; ello sucedió pese a las múltiples solicitudes que les presenté y a todo momento me la negaban en forma rotunda , no obstante que los reglamentos estaban a mi favor. , por cuanto reunía los requisitos de manera abundante y completa.

La prestación advertida era exigible desde el 09 de marzo de 2.005, fecha de **ESTRUCTURACIÓN DE MIS GRAVES PATOLOGÍAS, SEGÚN dictamen de la CALIFICACIÓN de mi PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL**, cuyo estimativo fue del 79.55% que en aquella ocasión había proferido **LA JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA,,** con sede en la ciudad de Cali .

(S1) 457

Pero es que este **PORCENTAJE** en estos precisos instantes supera ampliamente el indicado en la parte superior, teniendo en cuenta **MI ESTADO DEPLORABLE DE MI SALUD** que me tienen más al lado de la **MUERTE** que de mi propia existencia.

COMPORTAMIENTO GRAVE DEL CITADO FONDO CON EL SUSCRITO.

Puedo censurar a Porvenir como un ente enseñado a la **VULNERACIÓN** de los **DERECHOS FUNDAMENTALES** y que en la mayoría de los casos sus administradores se aprovechan de los estados de indefensión, del estado de vulnerabilidad y del estado de debilidad manifiesta de sus afiliados.

Pero es que de este **MI CASO CONCRETO**, es bueno que se enteren las entidades encargadas del control de estos **LIQUIDADORES Y PAGADORES**.

ESTA ES MI TRISTE HISTORIA PARA QUE COMO HECHO RELEVANTE TENGA EN CUENTA.

Corría el año de 2004, había llegado de pagar **UN DURO SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO**, que por cierto me había tocado cumplirlo en un época de terrorismo cuando habían secuestrado los **DIPUTADOS** en la ciudad de Cali de la **ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL valle DEL Cauca**; fue el 04 de julio cuando sufrí el aparatoso **ACCIDENTE DE MOTO**, llegando a mi pobre morada.

Las lesiones sufridas serán un tormentoso recuerdo por cuanto éstas **NUNCA SANARÁN** teniendo en cuenta la gravedad de ellas.

PRIMERA.- FRACTURAS EN LA PARTE INTERNA DEL CRÁNEO. DE LA PARTE CENTRAL DE ÉSTE INTERNAMENTE ARRANCA LA VÁLVULA LLAMADA DE HAKER, ATRAVIEZA TODA LA CABEZA,

4/15
(52)

LUEGO LLEGA AL CORAZÓN Y BAJA POR EL abdomen, bajando por éste llega a mi ombligo.

Se persigue con este extraño aparato es que el cerebro drene.

SEGUNDA LESIÓN UN CATETER- FIJO EN EL CEREBRO. Este elemento permite oxigenar el cerebro.

TERCERA ENFERMEDAD GRAVE DEL ACCIDENTE EN COMENTO.

Toda la parte izquierda de mi cuerpo está paralizada , nada de los miembros que lo conforman me sirve, no tienen movimiento.

Además convulsiono con epilepsia constantemente y mi cerebro ha sido intervenido en múltiples ocasiones.

ESTAS SON MIS ENFERMEDADES SIN PRONÓSTICO DE VIDA.

• **MI PRIMERA RECLAMACIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ.**

Cuando fui declarado prácticamente como una PERSONA INÚTIL, con las LESIONES PADECIDAS de origen CATASTRÓFICAS para mi organismo y en especial para mi cerebro. Gran parte de mi familia me ABANDONÓ, entre ellos, mis hermanos, mis primos y mi primogenitor , quedando en la lucha solo MI QUERIDA MADRE de nombre CEDILIA OLAYA .

Con pleno conocimiento y al recordar que había sido declarado PERSONA INVÁLIDA según dictamen que había emitido la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y que estaba afiliado al FONDO DE PENSIONES HORIZONTE y por lógico -.debía pagarme mi tantas veces pretendida PENSIÓN DE INVALIDEZ.

Cuál sería MI DESAGRADABLE SORPRESA, cuando ostentando una situación de pobreza y hambre recurro a las OFICINAS DE HORIZONTE, acá en esta población y al presentar reclamación para que me paguen PENSIÓN , rechazan por escrito en forma absoluta y arbitraria el pago de cualesquier prestación.

53. 47

SEGUNDA PETICIÓN.

Después de escuchar recomendaciones y consejos regreso nuevamente a PORVENIR en busca de mi PENSIÓN DE INVALIDEZ, pero nuevamente me es rechazada y me dicen que debo mejor RETIRAR el valor de los aportes en forma definitiva que solo alcanza al valor que tengan las 25.71 y como si fuera poco en el mismo HORIZONTE me hacen una solicitud para tal efecto, pero no la presento.

Se desprende de lo anterior que el Fondo de pensiones Horizonte hoy Porvenir nunca tuvo interés de concederme mi prestación solicitada.

TERCERA PETICIÓN.

Continuo haciendo reclamaciones para poder subsistir al disfrutar de un salario Mínimo, tener además una seguridad social y en general una vida en condiciones dignas, pero todo esto fue inútilmente pedido.

CUARTA RECLAMACIÓN.

En esta oportunidad al llegar a PORVENIR, les manifesté que Había pagado el SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO y me dijeron que dos años, no sumaban como cotizaciones.

QUINTA Y ÚLTIMAS RECLAMACIONES DE MI PENSIÓN DE INVALIDEZ.

Pero es que PORVENIR, en todo momento quiso mostrarse ajeno a mis pretensiones, no obstante que tenían conocimiento de que me existía el pleno derecho a la prestación en cita y que solo ellos eran **LOS ÚNICOS Y DIRECTOS RESPONSABLES DEL PAGO.**

En agosto, septiembre y octubre del año que acaba de terminar RADIQUE EN PORVENIR de la ciudad de Cali, radiqué nuevamente los documentos siendo **NEGADA EN FORMA DEFINITIVA.**

48
(SA)

DEMANDA DE TUTELA.

En Tuluá valle, en el Valle del cauca, y en otras poblaciones vecinas estuvieron enterados y CONOCIERON MI CASO, como también criticaban a PORVENIR por la violación constante de mis derechos fundamentales y la emprendieron contra éste tantas veces citado Fondo y me consiguieron como amigo un EXMA- GISTRADO del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , quien con amplios conocimientos en el tema y apoyado en la sentencia C-401 DE 2.015, formulé ACCIÓN DE TUTELA, demanda que le correspondió al JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS DE LA CIUDAD DE TULUA VALLE, despacho que en todos momentos FAVORECIÓ MIS PRETENSIONES.

FALLO IMPUGNADO.

Censuro, critico, no estoy de acuerdo que PORVENIR, por intermedio de su representante hubiese presentado apelación, si se tiene en cuenta que la sentencia proferida era justa, sustentada, lógica y que ocupaba toda la extensión de los derechos fundamentales que estaba vulnerando de manera premeditada PORVENIR.

SENTENCIA CONFIRMADA.

Otro despacho judicial la CONFIRMÓ.

INCIDENTE DE DESACATO.

Ninguna de las sentencias dictadas a mi favor fueron suficientes para que PORVENIR, me concediera **MI PENSIÓN DE INVALIDEZ**, entonces hubo Necesidad de aplicar el artículo 52 del decreto 2591 de 1.991 y fue de la ÚNICA MANERA que hasta la presente está cumpliendo el FONDO tantas veces nombrado.

(55) 49

MALES QUE CAUSÓ PORVENIR POR LO NEGLIGENCIA EN EL PAGO DE MI PRESTACIÓN.

PRIMERO.

PARA MI VIDA.

El fondo de Pensiones - PORVENIR- al vulnerarme en forma despiadada mis derechos fundamentales, como a la vida, a la salud, a la misma vida en condiciones dignas, a la seguridad social, al debido proceso y por ende al **MÍNIMO VITAL**, me desprotegió en forma total, dando un acceso fácil a las patologías que siendo catastróficas las padezco.

Es decir ante la **NEGATIVA** de pago de parte de **EL FONDO DE PENSIONES PORVENIR** de pagarme la **PENSIÓN** repetidas en tantas veces, mi salud siguió en un constante desarrollo, mi pobreza absoluta me abatía y estaba en una completa orfandad; calificado como una persona totalmente inútil como lo sigo siendo, solo deseaba la muerte por cuanto disimuladamente PORVENIR, había cometido contra el suscrito **UNA INFAMIA**.

DAÑOS MATERIALES Y ECONÓMICOS.

En todo lo que indique de ahora en adelante tiene como señalamiento Responsable Porvenir, para no estarlo repitiendo.

A si es como atender de mi salud, de mi alimentación de mi arriendo, de mis cirugías debí vender **UNA MOTO ; UN CABALLO NO DE RAZA** y un pequeño lote que tenía en un vereda. Lo que tenía como fruto de mi trabajo y herencia; estos bienes los vendí por \$10.000.000.00 y así mal que bien pude sostenerme.

En cuanto a lo económico, no pude volver a trabajar y nunca podré ante mi **INVALIDEZ**, como producto del accidente, o sea que Jamás percibí dinero alguno.

(56)

Los daños sentimentales, mi hogar se destruyó mi padre legítimo abandonó a mi madre y todo se fue a pique. Mis daños morales, esta decayó en forma total y absoluta, soy un persona despreciada de la sociedad.

LOS ANTERIORES SON DAÑOS MORALES CON CULPA DE PORVENIR, QUE ADMITE REPARACIONES, pero que no los pediré.

MI PETICIÓN CONCRETA , MI PETICIÓN QUE EN FORMA URGENTE DEBE ATENDER PORVENIR.

Hasta hora lo que me pagado PORVENIR, es mi PENSIÓN desde la FECHA DE MI ESTRUCTURACIÓN, HASTA FEBRERO DE 2.017.

FALTA ES EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS, QUE SE CAUSARON DESE EL 09 DE MARZO DE 2.005 HASTA FEBRERO DE 2.017.

Lo anterior es una obligación que imponen las leyes Colombianas, la cancelación junto con el Retroactivo de los intereses moratorios.

PRETENSIONES.

Respetuosamente les pido que en forma amistosa, sin peleas, sin rencores, sin tener que recurrir a otras demandas, ni Tutelas **ME CANCELEN LA TOTALIDAD DE INTERESES MORATORIOS QUE SE CAUSARON POR EL RETARDO INJUSTIFICADO DE PORVENIR Y éste señalado FONDO quebrantando TODOS LOS DERECHOS FUNDAMENTALES E INFRINGIENDO MÚLTIPLES NORMAS ME NEGARON LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE MI PENSIÓN DE INVALIDEZ**

EL FONDO DE PENSIONES - PORVENIR- está OBLIGADO AL RECONOCIMIENTO DE ESTOS INTERES HABIDA CUENTA QUE HAY MÁS DE 10 PRUEBAS ESCRITAS Y FIRMADAS POR EMPLEADOS DE PORVENIR EN DONDE ME DICEN QUE ME RECHAZAN EL PAGO DE MI PENSIÓN DE INVALIDEZ, POR CUANTO NO TENGO LAS 50 SEMANAS COTIZADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS.

(57) \$1

Pero ACUSO MÁS A PORVENIR, cuando aprovechando MI ESTADO DE INDEFENSIÓN y DE DEBILIDAD MANIFIESTA, SUMADO A MI DESESPERACIÓN, cuando en la fecha de 09 de junio de 2.016, me hizo una de las (os) empleadas hacer una carta para que retirara los aportes; esto un acto violario y mal intencionado que muestra que PORVENIR o sus empleados muy posiblemente quieren colaborar con un Enriquecimiento sin causa a favor del Fondo.

Todos los FONDO DE PENSIONES del orden gubernamental y los PRIVADOS están en la obligación de **PAGAR ESTOS INTERESES MORATORIOS**, y se hacen más responsable de estas cancelaciones, cuando el NO PAGO de una PENSIÓN se debe a errores que han cometido los ENTES LIQUIDADORES o fondos en este caso **ME DEBE PAGAR ES PORVENIR**.

En todo caso PORVENIR, debe atender y cumplir el artículo 141 de la LEY 100 de 1.993 y para no lesionarme el DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD, deben tener en cuenta la sentencia 067 del 17 de abril de 2.015, proferida por el **JUZGADO DIECISEIS LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE**.

ARREGLO FORMAL.

Nuevamente les repito que quiero que me CANCELEN mis INTERESES MORATORIOS, en una forma rápida y sin que sea necesaria la intervención de otros entes.

En todo caso copia de esta carta haré llegar a:

- SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA con SEDE EN LA CIUDAD DE Bogotá
- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO CON SEDE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
- Al Doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

- 56
- AL DOCTOR CARLOS NEGRET- DEFENSOR NACIONAL DEL PUEBLO CON SEDE EN BOGOTÁ
 - AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Tengo pleno conocimiento de algunos afiliados a quienes el FONDO DE PENSIONES PORVENIR le ha violado sus derechos fundamentales.

CONDICIONES PARA PORVENIR.

A partir del 13 marzo y hasta el 13 del año de 2017 Abril doy de plazo único a PORVENIR, para que me cancele los **INTERESES MORATORIOS** en forma total.

Las comunicaciones que voy a remitir como lo indico en la parte superior las dejo en **SUSPENSO** y si **PORVENIR ME PAGA LOS INTERESES** sin requerir otros JUICIOS, las **DESTRUIRÉ EN FORMA INMEDIATA**.

Además si obtengo de PORVENIR, el **PAGO DE LOS INTERESES**, **RENUNCIARÉ BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO A SEGUIR HACIENDO RECLAMACIONES**, DADO ESTARÍA pendiente LA DEMANDA POR PERJUICIOS ECONÓMICOS, MORALES, MATERIALES CAUSADOS, PORQUE HOY MI VIDA NO VALE NADA, POR CUANTO NO TENGO PRONÓSTICO POSITIVO Y MENOS A MI FAVOR, ESPERANZAS DE VIDA "UTIL.

QUIERO MANIFESTARLE QUE NO ES UNA AMENAZA, QUE NO ES UNA ESPECIE DE RETALIACIÓN, QUE NO SE PUEDE TIPIFICAR COMO UNA EXTORSIÓN, ES UN PROCDEMIENTO, QUE LO AGRUPO EN LÁSTIMA Y DOLOR ANTE EL MANEJO DE ESE FONDO CON EL SUSCRITO QUE ACABARON CON MI VIDA EN FORMA TOTAL, PUES MIS ENFERMEDADES ADQUIRIDAS Y SIN NINGÚN CONTROL POR FALTA DE DINEROS PARA ATENDERLAS FUERON AVANZANDO LENTAMENTE HASTA EL MOMENTO QUE YA NO TENGO CURA O MEJORIA .

(59) \$3

ATENDERLAS FUERON AVANZANDO LENTAMENTE HASTA EL MOMENTO QUE YA NO TENGO CURA O MEJORIA .

PORQUE ME FALTÓ EL DINERO.

Porque Porvenir ME NEGÓ INJUSTAMENTE MI PENSIÓN DE INVALIDEZ, A LA QUE EN REALIDAD TENÍA DERECHO DADO QUE LA LEY ORDENÓ EL PAGO.,

ENTONCES CARECÍA DE DINEROS PARA ATENDER URGENTGEMENTE MIS ENFERMEDADES.

SIGUE MI AUTOIRZACIÓN Y PODER.

Con pleno uso de todos mis conocimientos sigue la señora LADY JOHANNA GIRALDO CASTAÑO con 38.793.858 de Tuluá (V) autorizada para atender esta reclamación, quien puede suscribir, elaborar documentos, diligenciar formularios, presentar derechos de petición, presentar documentos y otras gestiones que sean solicitadas por PORVENIR.

ESTE PODER SE CONCEDE EN FORMA VITALICIA INDEFINIDA HASTA TANTO PORVENIR ME PAGUE LOS INTERESES MORATORIOS.

ANEXOS.

Copia de la carta que me hicieron firmar para que retirara mis aportes

Copia de las cartas por medio de las cuales se me negaba constantemente el pago de mi **PENSIÓN DE INVALIDEZ.**

Sus gratas informaciones las espero en la carrera 22 B Número 15-79, barrio Maracaibo de la ciudad de Tuluá valle, celular 3215887722, fijo 2262874 .

A continuación transcribo gran parte de las normas por intermedio de las cuales se deben pagar los **INTERESES MORATORIOS.**

ARTÍCULO 31. " EL REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA ES AQUEL MEDIANTE EL CUAL LOS AFILIADOS O BENEFICIARIOS, OBTIENEN UNA PENSIÓN DE VEJEZ, DE INVALIDEZ O DE SOBREVIVIENTES O UNA INDEMNIZACIÓN, PREVIAMENTE DEFINIDAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL PRESENTE TÍTULO ".

"SERÁN APLICABLE"

ES A ESTE REGIMEN LAS DISPOSICIONES VIGENTES PARA LOS SEGUROS, DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE A CARGO DEL INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, CON LAS ADICIONES, MODIFICACIONES Y EXCEPCIONES CONTENIDAS EN ESTA LEY

"ARTÍCULO. 141. INTERESES DE MORA-

"A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 1.994 EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE LAS MESADAS PENSIONALES DE QUE TRATA ESTA LEY, LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE RECONOCERÁ Y PAGARÁ AL PENSIONADO ADEMÁS DE LA OBLIGACIÓN A SU CARGO Y SOBRE EL IMPORTE DE ELLA LA TASA MÁXIMA DE INTERÉS MORATORIO VIGENTE EN EL MOMENTO EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO "

" ADICIONALMENTE ME PERMITO TRAER A COLACIÓN LA SENTENCIA DE LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA QUE PRECISAN LAS CONDICIONES DE PAGO DE DICHOS INTERESES. SENTENCIA 43564 DE 2.001 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA /f CSJ-05-04 DE 2.011

Que ASÍ se CONDENA.

" LA IMPOSICIÓN DE INTERESES MORATORIOS DEBE HACERSE DESDE EL MOMENTO EN QUE VENCE EL PLAZO LEGAL PARA QUE LA ENTIDAD DE SEGURIDAD SOCIAL OTORGUE EL DERECHO PENSIONAL CUANDO SE ENCUENTRE FRENTE A UNA SOLA PETICIÓN DE RECONOCIMIENTO DE UNA PENSIÓN ".

64

DECLARO AMPLIAMENTE QUE POR ESTOS DERECHOS NO HE
PRESENTADO OTRAS RECLAMACIONES".

Con toda atención,

Fabio alonso espinosa
FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA,

• Carrera 22B / 15-79

Celular: 3015/887722

Fijo : 2262874

• Bogotá - Maracaibo

Fuera - Valle

104

Bogotá D.C., 2017-03-23

Señor

FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA
MZ E CA 28 EL PARAISO
TULUA
VALLE

790 231 1/2

Ref. Rad. Porvenir: 0103872011802900

CC: 14798345

T.N: 8814818

COR-BENEF

Porvenir S.A. le da un saludo cordial

En atención a su solicitud relacionada con el pago de intereses moratorios, le informamos lo siguiente:

El 3 de noviembre de 2016 esta Sociedad Administradora aprobó su pensión de invalidez toda vez que cumple con el requisito previsto en el artículo 39 de ley 100 de 1.993, modificado por el art. 11, Ley 797 de 2003, modificado por el art. 1, Ley 860 de 2003 al contar con cincuenta (50) semanas de cotización al Sistema General de Pensiones a la fecha de estructuración. Cabe aclarar que, se computaron los periodos correspondientes a prestación de servicio militar en cumplimiento de fallo de tutela proferido por el Juzgado De Pequeñas Causas y de Competencia Múltiple de Tuluá-Valle.

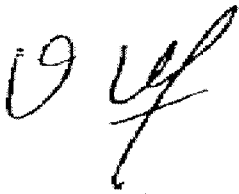
No es procedente el pago de intereses moratorios, teniendo en cuenta que esta Sociedad Administradora desde el momento de la definición de su reclamación pensional de vejez invalidez, ha reconocido y pagado su mesada pensional asignada. Por otro lado, el 7 de febrero de 2017 se pagó retroactivo por valor de \$ 90.095.854, desde la fecha de estructuración es decir el 9 de enero de 2005 al mes de febrero de 2017.

Por lo anterior, no es procedente llevar a cabo el pago de los intereses moratorios de acuerdo al artículo 141 de la Ley 100 de 1993:

ARTICULO. 141. -Intereses de mora. A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

790 231 1/2

Para nosotros es muy importante haber atendido su solicitud.



ORLANDO VALENCIA AGUDELO
Coordinación de Atención Integral a Clientes



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE TULUÁ

Código único de radicación nacional:

76-834-31-05-001-2018-00066-00

Tomo: 24

Folio: 0

Presentación: 15-feb.-2018



JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO
TULUÁ - VALLE

REFERENCIA	PROCESO ORDINARIO LABORAL PRIMERA INSTANCIA
RADICACION	76-834-31-05-001-2018-0066-00
DEMANDANTE	FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA
DEMANDADO	PORVENIR S.A.

Tuluá Valle, veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciocho (2018)

AUTO SUSTANCIACION No. 1334

El Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo No. PCSJA18-11108 de 27 de septiembre de 2018, dispuso remitir el 40% de los procesos laborales que se tenga en el inventario de este Juzgado, que no se haya efectuado audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social con destino al Juzgado 2º Laboral de este circuito.

Por lo anterior, procede este despacho a ordenar el envío de los expedientes al citado juzgado.

Finalmente, se notificará a las partes la presente decisión, por estado, conforme a lo establecido en el artículo 41 del CPTSS.

Por consiguiente, en mérito de lo brevemente expuesto el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá:

RESUELVE:

PRIMERO: PROCÉDASE a efectuar la remisión del presente asunto al Juzgado 2º Laboral de este circuito, en cumplimiento a lo ordenado por el Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo No. PCSJA18-11108 de 27 de septiembre de 2018, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes la presente decisión por estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del CPTSS.

TERCERO: Ejecutoriada la presente decisión, por secretaría déjense las constancias del caso y hágase entrega física del expediente previas anotaciones de los cuadernos y folios de los cuales se hace entrega, junto con el cuadro requerido en el acto administrativo en mención.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ENVER IVAN ALVAREZ ROJAS.

Juez



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO
TULUÁ VALLE**

9 OCT 2018

Hoy, _____ se notifica por
ESTADO No. 24, a las partes el auto que
antecede.

YUG
VIVIANA OVIEDO GÓMEZ
SECRETARIA.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**REPUBLICA DE COLOMBIA – RAMA JUDICIAL
JUZGADO 002 LABORAL DEL CIRCUITO
Tuluá – Valle del Cauca**

Ref. Ordinario laboral de primera instancia

Dte. Fabio Alonso Espinosa Olaya

Ddo. PORVENIR S.A.

Rad. 2018-00066-00

AUTO SUS No. 066

Tuluá, 19 de noviembre del 2018

Sea lo primero advertir que en virtud de lo ordenado en el **Acuerdo PCSJA18-11108**, del 27 de septiembre de 2018, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, el presente proceso fue remitido a este Despacho proveniente del Juzgado 001 Laboral del Circuito de Tuluá – Valle, por lo que se avocará su conocimiento y se impartirá el trámite respectivo.

Claro lo anterior, una vez revisados los requisitos de la demanda, y por considerarse que la misma se ajusta a las exigencias consagradas en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 12 de la Ley 712 de 2001, el Juzgado admitirá la misma.

En mérito de lo expuesto, El Juzgado,

RESUELVE:

1.- AVÓQUESE el conocimiento del presente proceso, proveniente del Juzgado 001 Laboral del Circuito de Tuluá Valle, e imprimase el trámite respectivo.

2.- ADMITIR la demanda ordinaria laboral de Primera instancia promovida por el señor Fabio Alonso Espinosa Olaya, en contra de PORVENIR S.A., a través de su representante legal.

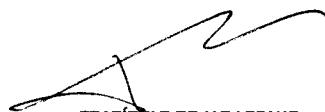
3.- NOTIFIQUESELE personalmente del presente proveído a la parte demandada. Para tal efecto, llévase a cabo la notificación conforme a lo dispuesto en los Art. 290 a 292 del Código General del Proceso, en armonía con el artículo 29 del C.P.L., córrasele traslado de la demanda por diez (10) días hábiles, para que en dicho término de respuesta a la misma por intermedio de apoderado judicial. Adviértasele que de no dar contestación a la demanda oportunamente, tal omisión se tendrá como indicio grave en su contra. **INDICASE** al interesado, que es su deber elaborar y enviar la citación respectiva a la parte demandada, a fin de surtir la notificación personal.

4.- **RECONOCER** personería para actuar en representación de la parte demandante, al doctor Orlando Gómez Novoa, portador de la T.P. 76.322 del C.S.J., de conformidad con el memorial poder visible de fol. No. 1 del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

El Juez,


VICTOR JAIRO BARRIOS ESPINOSA

<p>JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO TULLÁ VALLE</p> <p>Hoy, <u>NOV. 20-18</u> se notifica por ESTADO No. <u>10</u> , a las partes el auto que antecede.</p> <p> TRASÍBULO ROJAS LOZANO SECRETARIO</p>
--



Orlando Gómez Novoa

ABOGADO

Señor

JUEZ SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE TULUA VALLE

E.

S.

D.

REF: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

DTE: FABIO ALONSO ESPINOSA

DDOS: PORVENIR S.A.

RDO: 2018- 00066-00

ORLANDO GOMEZ NOVOA, mayor, vecino de este Municipio, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 16.356.320 de Tuluá valle, obrando en condición de apoderado judicial del señor FABIO ALONSO ESPINOSA, dentro del proceso citado en la referencia, mediante el presente escrito me permito aportar al despacho las diligencias de notificación personal a la parte demandada y su respectiva constancia de entrega.

Atentamente,

ORLANDO GOMEZ NOVOA

C.C. 16.356.320 de Tuluá V.

T. P. 76.322 del C.S.J.

18 FEB 2019 4:06:10 p.m.





Orlando Gómez Novoa

ABOGADO

Tuluá, Febrero 12 de 2019

Doctor
MIGUEL LARGACHA MARTINEZ
PORVENIR S.A.
Calle 27 Nro. 26-60 Esquina
Tuluá valle

ASUNTO: NOTIFICACIÓN PERSONAL

El suscrito en condición de apoderado de la parte demandante, le hace saber al Doctor **MIGUEL LARGACHA MARTINEZ** o quien haga sus veces, en condición de representante legal de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS "PORVENIR S.A." que debe comparecer al **Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tuluá Valle**, ubicado en la Carrera 27 con calle 26 esquina de Tuluá Valle, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de entrega de la presente, para que reciba **NOTIFICACIÓN PERSONAL** del Auto Admisorio de la demanda Nro. 066 del 19 de noviembre de 2018, proferido en su contra, dentro del proceso **ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA**, con radicación Nro. **2018-0066** adelantado por el señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA y en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS "PORVENIR S.A.".

Lo anterior con fundamento en el artículo 291 del C.G.P.

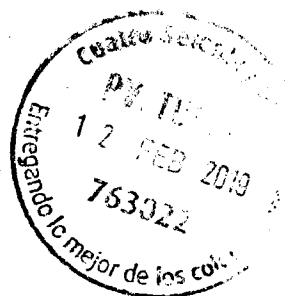
NTA - TULUA

CON EL ORIGINAL

ORLANDO GOMEZ NOVOA

C.C. 16.356.320 de Tuluá Valle

T.P. 76.322 del C.S.J





SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

NIT 900.062.917-9

Principal Diagonal 25G No 95A - 55 Bogotá Colombia
Conmutador (1): 4722005. Línea Gratuita: 018000111210
Línea de Servicio al Cliente: (57-1)4199299
Somos grandes contribuyentes Res. Dian 041 enero 2014
Somos auto retenedores Resolución Dian 1005 Dic 2 2008
Iva regimen común CIU 5310
Ley Estatutaria 1581 Protección de datos personales.
Ley 1369 de 2009 de envíos sin trazabilidad
Información adicional en www.4-72.com.co

63

TULUA - TULUÁ	
No Factura	898-41672
Fecha	12/02/2019 05:16:35 pm
Cajero	ELSA GUALTEROS
C.C.	16356320
	ORLANDO GOMEZ
	NOVOA

Servicio Postal				
Nombre	Cant	Valor Declarado	Peso gr	Valor
NOTIEXPRESS PERSONAL	1	\$0,00	200	\$8.600,00
		GUIAS		
NY0032613 45CO				
Totales	1	\$0,00	200	\$8.600,00

Valor Flete	\$8.600,00
Costo Manejo	\$0,00
Tarifa Total	\$8.600,00
SUBTOTAL	\$8.600,00
IMPUESTOS	\$0,00
DESCUENTOS	\$0,00
SEGUROS	\$0,00
TOTAL PAGAR	\$8.600,00

Forma de Pago	Valor
Efectivo	\$8.600,00

**REMITENTE**

Nombre/ Razón Social
ORLANDO GOMEZ NOVOA

Dirección: CALLE 26 NO 24-54

Ciudad: TULUA

Departamento: VALLE DEL CAUCA
Código Postal: 763022295
Envío: NY003261345CO

DESTINATARIO

Nombre/ Razón Social:
MIGUEL LARGACHA MARTINEZ

Dirección: CALLE 27 # 26 -60
ESQUINA

Ciudad: TULUA

Departamento: VALLE DEL CAUCA

Código Postal: 763022309

Fecha Admisión:
13/02/2019 08:00:00

Min. Transporte Lic. de carga 000200 del 20/05/2018
Min. TIC Res. Mensajería Express 001657 del 09/09/2018

**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. NIT 900.062.917-9****NOTIEXPRESS PERSONAL**

Centro Operativo: PO.TULUA

Fecha Admisión: 13/02/2019 08:00:00

Orden de servicio:

Fecha Aprox Entrega: 14/02/2019



NY003261345CO

7419 450	Remitente	Nombre/ Razón Social: ORLANDO GOMEZ NOVOA		NIT/C.C./T.I.: 16356320	
		Dirección: CALLE 26 NO 24-54	Referencia:	Teléfono: 3168653127	Código Postal: 763022295
7419 460	Destinatario	Nombre/ Razón Social: MIGUEL LARGACHA MARTINEZ		Código Operativo: 7419450	
		Dirección: CALLE 27 # 26 -60 ESQUINA	Tel:	Código Postal: 763022309	Código Operativo: 7419450
Valores	Peso Físico(grams): 200	Dice Contener:		Causal Devoluciones:	
	Peso Volumétrico(grams): 0	Observaciones del cliente:		Firma nombre y/o sello de quien recibe:	
Valores	Peso Facturado(grams): 200	C.C.		C.C.	
	Valor Declarado: \$0	C.C.		C.C.	
Valores	Valor Flete: \$8.600	C.C.		C.C.	
	Costo de manejo: \$0	C.C.		C.C.	
Valores	Valor Total: \$8.600	C.C.		C.C.	
		C.C.		C.C.	



74194607419450NY003261345CO

Principal: Bogotá D.C. Colombia Diagonal 25 G # 95 A 55 Bogotá / www.4-72.com.co Línea Nacional 01 8000 11 20 / Tel. contacto: (57) 472 2005. Min. Transporte Lic. de carga 000200 del 20 de mayo de 2018/Min. TIC, Res. Mensajería Express 001657 de 9 septiembre del 2018

69



Trazabilidad Web

[Ver certificado entrega](#)

Nº Guía

Buscar

Para visualizar la guía de version 1 : [sigue las instrucciones de ayuda para habilitarlas](#)

1 of 1 Find | Next

Guía No. NY003261345CO

Tipo de Servicio:		NOTIEXPRESS PERSONAL		Fecha de Envío:		13/02/2019 08:00:00	
Cantidad:	1	Peso:	200.00	Valor:	8600.00	Orden de servicio:	


Datos del Remitente:							
Nombre:	ORLANDO GOMEZ NOVOA			Ciudad:	TULUA	Departamento:	VALLE DEL CAUCA
Dirección:	CALLE 26 NO 24-54			Teléfono:	3168653127		

Datos del Destinatario:					
Nombre:	MIGUEL LARGACHA MARTINEZ	Ciudad:	TULUA	Departamento:	VALLE DEL CAUCA
Dirección:	CALLE 27 # 26 -60 ESQUINA	Teléfono:			
Carta asociada:	Código envío paquete:	Quien Recibe:			
		Envío Ida/Regreso Asociado:			

Fecha	Centro Operativo	Evento	Observaciones
12/02/2019 05:15 PM	PO.TULUA	Admitido	
13/02/2019 01:40 PM	PO.TULUA	Entregado	
13/02/2019 01:57 PM	PO.TULUA	Digitalizado	

18/2/2019

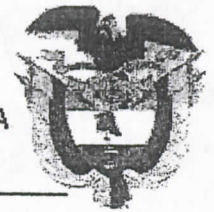
svc1.sipost.co/trazawebsip2/default.aspx?Buscar=NY003261345CO

 Fecha: 2/18/2019 9:15:07 AM

Página 1 de 1



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL



JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805012111-1

(Organismo Autónomo de Carácter Privado Creado Ley 100/93 Art. 2463/01)

El suscrito secretario de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca

C E R T I F I C A

Que la junta de Calificación de Invalidez en Sesión llevada a cabo el día **31** del mes **ENERO** del año dos mil CINCO **2005** y mediante acta No. **003-2005** de la misma fecha, se procedió a calificar al señor(a) **FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA** identificado con la cédula de ciudadanía No. **14.798.345** de **TULUA VALLE** constando en el acta que establecidos los fundamentos de hecho y Derecho, los criterios de evaluación de acuerdo al Manual Unico para la Calificación de Invalidez (Decreto 917 de 1999 y 2463 de Noviembre 20/01), por unanimidad manifestaron que en su concepto la Pérdida de Capacidad Laboral es la siguiente:

FECHA DE ESTRUCTURACION P.C. L. 09/01/2005

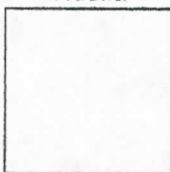
CONCEPTO	%
DEFICIENCIA	45.00
DISCAPACIDAD	9.30
MINUSVALIA	25.25
TOTAL	79.55

Determinación de Origen: **.COMUN**

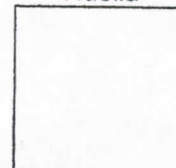
Diagnóstico. **TRAUMA CRANEOENCEFALICO CON RUPTURA COMUNICANTE POSTERIOR PARA HIDROCEFALIA Y DERIVACION VENTRICULO-PERITONEAL. SECUELA : HEMIPARESIA IZQUIERDA, CUADRO PSICOTICO.-**

BBVA HORIZONTE

Huella



Huella



Se entenderá surtida legalmente la notificación del presente dictamen mediante la presentación personal (entregando copia del dictamen), o con el vencimiento del término de fijación del mismo. Contra el presente dictamen, procede recurso de Reposición ante la Junta Regional y en subsidio el de apelación ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los diez (10) días siguientes a aquel en que fué notificado, manifestando su inconformidad por escrito ante la Secretaría Técnica de la Junta Regional. En el evento de ser interpuesto el Recurso de Apelación dentro del término legal, éste será remitido junto con la documentación que sirvió de fundamento para la emisión del dictamen, a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que funciona en la capital de la República, para su trámite pertinente, consionando el monto de los honorarios en la cuanta 000000145000.

Tuluá valle del cauca, 15 de marzo de 2.019

Doctor

VICTOR JAIRO BARRIOS ESPINOSA

Juez segundo Laboral

Presente.

REFERENCIA: Por favor su amable colaboración.

ASUNTO: Ordinario Laboral de Primera Instancia

DEMANDADO: PORVENIR S.A.

RADICACIÓN; 2.018-00066-00

Estimado Doctor:

En calidad de persona en estado de Indefensión, en estado de Debilidad Manifiesta, iletrado, porque ni siquiera terminé la primaria, con patologías degenerativas, progresivas e incurables, tales como las convulsiones en forma casi que recurrentes o permanentes, pérdida en un 80% de la visión, lesiones en un miembro superior, poca resistencia a la deambulacion y es más grave mi situación patológica cuando mi cerebro está con una lesión permanente y solo se oxigena dreña a través de una válvula de JAKER que atraviesa internamente mi cabeza desde el oído interno derecho hasta el oído izquierdo, llega a mi corazón y baja hasta mi ombligo.

Este extraño aparato de gran medicación es el que permite mi existencia siendo su colocación de forma vitalicia y cuando esta válvula se taponan deben llevarme a la clínica más cercana para limpiarla y darme nuevamente aire para seguir viviendo.

Quiero con este escrito manifestarle al señor Juez con el debido respeto que no tengo pronóstico alguno de vida y debo estar pendiente de los medicamentos para poder medio tener un poquito de existencia en condiciones de dignas.

El señor Juez debe estar enterado de que la salud en Colombia atendida por EPS, está totalmente deteriorada y que ni los casos prioritarios o de suma urgencia son atendidos y en mi caso concreto me ha tocado acudir a la caridad de la gente y de

mi familia también muy pobre para que colabore con dineros para recibir una atención.

Los graves traumas en comento fueron producto de un accidente de tránsito sucedido muchos años atrás, lesiones que nadie me las pagó y con estado de comas progresivos y la compañía de mi ser querido mi madre hemos afrontado esta funesta situación que prácticamente han culminado mi vida.

En la actualidad soy una persona totalmente Inútil y la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca con sede en la ciudad de Cali me profirió un porcentaje de mi Pérdida de capacidad Laboral del 79.55, considerado persona INVÁLIDA y por lo TANTO INÚTIL.

MI PENSIÓN DE INVALIDEZ. FONDO DE PENSIONES ANTES HORIZONTE HOY FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS "PORVENIR".

Al haber cotizado al citado Fondo 26 semanas en el año de 2.005 inicié los trámites de mi PENSIÓN DE INVALIDEZ, pero sin ningún soporte jurídico y menos causa justificada PORVENIR me NEGÓ EL PAGO DE LA PRESTACIÓN.

Seguí batallando, luchando en una forma desesperada de dineros para conseguir un abogado, hasta que hice una rifa e inicié una tutela protegido con un apoderado judicial y solo en el año de 2.016, logré la prestación de un mínimo, el que comparto en compañía de mi anciana madre.

Como la Responsabilidad en torno al no pago de mi pensión de Invalidez en forma más que injustificada recaía sobre PORVENIR, hice una demanda Ordinario Laboral de los Intereses moratorios, pero ya llevo dos años y no he obtenido resultado positivo alguno.

Solo hoy me he dado cuenta que hasta la presente solo con la llegada de este juzgado segundo laboral hacia esta ciudad se encuentra este proceso solo en aceptación o admisión de la demanda.

PETICIÓN MUY ESPECIAL.

Quiero pedirle muy respetuosamente al señor Juez Segundo Laboral, ofrecerme una calidad de vida, buscando dentro de lo posible la culminación de este urgido proceso, teniendo en cuenta que el suscrito goza de especial protección del estado por encontrarme en situación de debilidad manifiesta y en la extrema pobreza, como lo disponen múltiples sentencias de la Honorable Corte Constitucional y que además dispone que me deben tratar con más flexibilidad y menos rigor, logrando lo pretendido en tiempo prioritario.

Honorable señor Juez le manifiesto que Nunca desconozco las cantidades de demandas que llegan a su despacho, esto lo pido a manera de súplica para poder pasar o morir con una vida en condiciones dignas, sumado a una auténtica calidad de vida.

73 74

Gracias señor Juez por leer y aceptar este escrito.

Me permito anexarle una copia de la calificación o estimativo de mi Pérdida de Capacidad Laboral.

Espero sus informaciones a la carrera 22B Número 15-79 Barrio Maracaibo de la ciudad de Tuluá valle o al celular 3108261564.

Con toda atención,

FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA
14.798.345.
Demandante.
Dirección
Ciudad
Celular.

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO
TULUA-VALLE

El anterior escrito constante de 4 folios, fue
presentado hoy 18 de Marzo de 2019
por el Sr. Fabio Alonso Espinosa
Olaya
cedulado (a) bajo el número 14-798-345
expedida en Tuluá Valle

Fabio Alonso Espinosa
Compareciente

[Firma]
Secretario



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO SEGUNDO LABORAL CIRCUITO TULUA - VALLE

74

SECRETARIA

ASUNTO : PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIONANTE : FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA
ACCIONADO : PORVENIR
RADICACION : 76-834-31-05-001-2018-00066-00

El anterior memorial aportado por el demandante, mediante el cual, por sus condiciones de vulnerabilidad, hace unas peticiones especiales al Despacho. Paso a Despacho para lo de Ley.

Tuluá, marzo 20 de 2019

TRASIBULO ROJAS LOZANO
Secretario



Señor

Orlando Gómez Novoa

ABOGADO

JUEZ SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE TULUA VALLE

E.

S.

D.



REF: PROCESO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

DTE: FABIO ALONSO ESPINOSA

DDO: PORVENIR S.A.

RDO: 2010- 00066

ORLANDO GOMEZ NOVOA, mayor, vecino de esta localidad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, Abogado en ejercicio de la profesión, portador de la tarjeta profesional Nro. 76.322 del C.S.J., obrando en condición de apoderado judicial de la parte demandante dentro del proceso citado en la referencia, mediante el presente escrito apor to al despacho las diligencias correspondientes a la notificación por aviso a la parte demandada, anexo, igualmente la respectiva guía.

Atentamente,


ORLANDO GOMEZ NOVOA

C.C. 16.356.320 de Tuluá valle

T.P. 76.322 del C.S.J.



Orlando Gómez Novoa

ABOGADO

76

Doctor

MIGUEL LARGACHA MARTINEZ

Calle 27 Nro. 26-60 Esquina

"PORVENIR S.A."

Tuluá Valle

ASUNTO: NOTIFICACIÓN POR AVISO

ORLANDO GOMEZ NOVOA, en condición de apoderado judicial de la parte demandante, le hace saber al Doctor MIGUEL LARGACHA MARTINEZ, o quien haga sus veces, en condición de representante legal de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS "PORVENIR S.A. " que debe comparecer al **Juzgado Segundo Laboral del circuito de Tuluá Valle**, ubicado en el Palacio de Justicia, en la calle 26 con carrera 27 esquina de Tuluá valle, que por Auto Nro. 066 del 19 de noviembre de 2018, el cual se le notifica, se admitió demanda en su contra, dentro del **PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA**, con radicación **Nro. 2018-00066**, promovido por el señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA, y en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS "PORVENIR S.A. Lo anterior con fundamento en el artículo 292 del C.G.P.

Se advierte a la parte demandada que esta notificación queda surtida al finalizar el día siguiente hábil al de la entrega de la presente comunicación.

Además le acompaño copia informal de la providencia que se le notifica, todo de acuerdo con el artículo 292 del Código general del Proceso.

5 Nacionales S.A.

Atentamente,

NTA - TULUA

CON EL ORIGINAL

ORLANDO GOMEZ NOVOA

C.C. 16.356.320 de Tuluá Valle

T.P. Nro. 76.322 del C.S.J.





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA – RAMA JUDICIAL
JUZGADO 002 LABORAL DEL CIRCUITO
Tuluá – Valle del Cauca

Ref. Ordinario laboral de primera instancia
Dte. Fabio Alonso Espinosa Olaya
Ddo. PORVENIR S.A.
Rad. 2018-00066-00

AUTO SUS No. 066

Tuluá, 19 de noviembre del 2018

Sea lo primero advertir que en virtud de lo ordenado en el **Acuerdo PCSJA18-11108**, del 27 de septiembre de 2018, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, el presente proceso fue remitido a este Despacho proveniente del Juzgado 001 Laboral del Circuito de Tuluá – Valle, por lo que se avocará su conocimiento y se impartirá el trámite respectivo.

Claro lo anterior, una vez revisados los requisitos de la demanda, y por considerarse que la misma se ajusta a las exigencias consagradas en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 12 de la Ley 712 de 2001, el Juzgado admitirá la misma.

En mérito de lo expuesto, El Juzgado,

RESUELVE:

1.- AVÓQUESE el conocimiento del presente proceso, proveniente del Juzgado 001 Laboral del Circuito de Tuluá Valle, e imprimase el trámite respectivo.

2.- ADMITIR la demanda ordinaria laboral de Primera instancia promovida por el señor Fabio Alonso Espinosa Olaya, en contra de PORVENIR S.A., a través de su representante legal.

3.- NOTIFIQUESELE personalmente del presente proveído a la parte demandada. Para tal efecto, llévase a cabo la notificación conforme a lo dispuesto en los Art. 290 a 292 del Código General del Proceso, en armonía con el artículo 29 del C.P.L., córrasele traslado de la demanda por diez (10) días hábiles, para que en dicho término de respuesta a la misma por intermedio de apoderado judicial. Adviértasele que de no dar contestación a la demanda oportunamente, tal omisión se tendrá como indicio grave en su contra. **INDICASE** al interesado, que es su deber elaborar y enviar la citación respectiva a la parte demandada, a fin de surtir la notificación personal.

ACIONALES S.A.
TA - TULUA
CON EL ORIGINAL

4.- **RECONOCER** personería para actuar en representación de la parte demandante, al doctor Orlando Gómez Novoa, portador de la T.P. 76.322 del C.S.J., de conformidad con el memorial poder visible de fol. No. 1 del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

El Juez,


VICTOR JAIRO BARRIOS ESPINOSA

**JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO
TULUÁ VALLE**

Hoy, NOV. 20-18 se notifica por
ESTADO No. 10, a las partes el auto que
antecede.


**TRASIBULO ROJAS LOZANO
SECRETARIO**

**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.****NIT 900.062.917-9**

Principal Diagonal 25G No 95A - 55 Bogotá Colombia
Conmutador (1): 4722005. Línea Gratuita: 018000111210

Línea de Servicio al Cliente: (57-1)4199299

No Somos grandes contribuyentes

Somos auto retenedores Resolución Dian 1005 Dic 2 2008

Iva regimen común CIU 5310

Ley Estatutaria 1581 Protección de datos personales.

Ley 1369 de 2009 de envíos sin trazabilidad

Información adicional en www.4-72.com.co

78

TULUA - TULUÁ

No Factura	898-43484
Fecha	09/05/2019 10:58:17 am
Cajero	ELSA GUALTEROS
C.C.	16356320
	ORLANDO GOMEZ
	NOVOA

Servicio Postal

Nombre	Cant	Valor Declarado	Peso gr	Valor
NOTIEXPR ESS POR AVISO	1	\$0,00	200	\$8.600,00
		GUIAS		
YP0034409 87CO				
Totales	1	\$0,00	200	\$8.600,00

Valor Flete	\$8.600,00
Costo Manejo	\$0,00
Tarifa Total	\$8.600,00
SUBTOTAL	\$8.600,00
IMPUESTOS	\$0,00
DESCUENTOS	\$0,00
SEGUROS	\$0,00
TOTAL PAGAR	\$8.600,00

Forma de Pago	Valor
Efectivo	\$8.600,00

472

Servicios Postales
Nacionales S.A.
NIT 900.062.917-9
CG 25 G 95 A 55
Línea Nat: 01 8000 111 210

REMITENTE

Nombre/ Razón Social:
ORLANDO GOMEZ NOVOA

Dirección: CALLE 26 NO 24-54

Ciudad: TULUA

Departamento: VALLE DEL CAUCA
Código Postal: 763022295
Envío: YP003440987CO

DESTINATARIO

Nombre/ Razón Social:
MIGUEL LARGACHA MARTINEZ

Dirección: CALLE 27 # 26-60
ESQUINA PORVENIR

Ciudad: TULUA

Departamento: VALLE DEL CAUCA

Código Postal: 763022309

Fecha Admisión:
10/05/2019 08:00:00

Mín. Transporte: Lcs de carga 000200 del 20/05/2019
Mín. Mensajería Express: 000697 del 08/08/2019

472

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9

NOTIEXPRESS POR AVISO

Centro Operativo: PO.TULUA
Orden de servicio:

Fecha Admisión: 10/05/2019 08:00:00
Fecha Aprox Entrega: 13/05/2019



YP003440987CO

7419
450

Remite	Nombre/ Razón Social: ORLANDO GOMEZ NOVOA		Causal Devoluciones:	
	Dirección: CALLE 26 NO 24-54	NIT/C.C.T.I: 16356320	<input type="checkbox"/> RE Rehusado	<input type="checkbox"/> C1 C2 Cerrado
Destinatario	Referencia:	Teléfono:	<input type="checkbox"/> NE No existe	<input type="checkbox"/> N1 N2 No contactado
	Ciudad: TULUA	Depto: VALLE DEL CAUCA	<input type="checkbox"/> NS No reside	<input type="checkbox"/> FA Faltado
Valores	Código Postal: 763022295	Código Operativo: 7419460	<input type="checkbox"/> NR No reclamado	<input type="checkbox"/> AC Apartado Clausurado
			<input type="checkbox"/> DE Desconocido	<input type="checkbox"/> EV Fuerza Mayor
Nombre/ Razón Social: MIGUEL LARGACHA MARTINEZ		Dirección errada		
Dirección: CALLE 27 # 26-60 ESQUINA PORVENIR		Firma nombre y/o sello de quien recibe:		
Tel:		Código Postal: 763022309	C.C. Tel: Hora:	
Ciudad: TULUA		Depto: VALLE DEL CAUCA	Fecha de entrega:	
Peso Físico(grams): 200		Dice Contener:	Distribuidor:	
Peso Volumétrico(grams): 0		Observaciones del cliente:	C.C.	
Peso Facturado(grams): 200			Gestión de entrega:	
Valor Declarado: \$0			<input type="checkbox"/> 1er <input type="checkbox"/> 2do	
Valor Flete: \$8.600				
Costo de manejo: \$0				
Valor Total: \$8.600				

7419
460PO.TULUA
OCCIDENTE

74194607419450YP003440987CO

Principal: Bogotá D.C. Colombia Diagonal 76 G # 55 A55. Bogotá / www.472.com.co / Línea Nacional: 01 8000 111 210 / Tel. contacto: (57) 472 2030. Mín. Transporte: Lcs de carga 000200 del 20 de mayo de 2019 / Mín. Mensajería Express: 000697 del 8 de agosto de 2019.

47



Entregando lo mejor de
los colombianos

472⁸⁰

Certificación de entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.

Certifica:

Que el envío descrito en la guía cumplida abajo relacionada, fue entregado efectivamente en la dirección señalada.

472

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9

NOTEXRESS POR AVISO

Centro Operativo: PO. TULUA

Orden de servicio:

Fecha Admisión: 10/05/2019 08:00:00

Fecha Aprox. Entrega: 13/05/2019

YP003440987CO

7419	450	7419	460		7419	460												
Destinatario Remitente		Destinatario Remitente		Destinatario Remitente		Destinatario Remitente												
<p>Nombre/ Razón Social: ORLANDO GÓVEZ NCVOA</p> <p>Dirección: CALLE 26 NO 24-54</p> <p>Referencia:</p> <p>Ciudad: TULUA</p>		<p>MTA: C/TJ:16356020</p> <p>Teléfono:</p> <p>Depto: VALLE DEL CAUCA</p>		<p>Código Postal: 78322295</p> <p>Código Operativo: 7419460</p>		<p>Causal Devoluciones:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> RE Retenido</td> <td><input type="checkbox"/> G1 G3 Cerrado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> NE No existe</td> <td><input type="checkbox"/> M1 M2 No contactado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> NR No reside</td> <td><input type="checkbox"/> FA Fallido</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> NN No reclamado</td> <td><input type="checkbox"/> AC Aterido Cauturado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> DS Desconocido</td> <td><input type="checkbox"/> FM Fuerza Mayor</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Dirección errada</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> RE Retenido	<input type="checkbox"/> G1 G3 Cerrado	<input type="checkbox"/> NE No existe	<input type="checkbox"/> M1 M2 No contactado	<input type="checkbox"/> NR No reside	<input type="checkbox"/> FA Fallido	<input type="checkbox"/> NN No reclamado	<input type="checkbox"/> AC Aterido Cauturado	<input type="checkbox"/> DS Desconocido	<input type="checkbox"/> FM Fuerza Mayor	<input type="checkbox"/> Dirección errada	
<input checked="" type="checkbox"/> RE Retenido	<input type="checkbox"/> G1 G3 Cerrado																	
<input type="checkbox"/> NE No existe	<input type="checkbox"/> M1 M2 No contactado																	
<input type="checkbox"/> NR No reside	<input type="checkbox"/> FA Fallido																	
<input type="checkbox"/> NN No reclamado	<input type="checkbox"/> AC Aterido Cauturado																	
<input type="checkbox"/> DS Desconocido	<input type="checkbox"/> FM Fuerza Mayor																	
<input type="checkbox"/> Dirección errada																		
<p>Nombre/ Razón Social: MIGUEL LARGACHA MARTINEZ</p> <p>Dirección: CALLE 27 # 26 -40 ESQUINA PORVENIR</p> <p>Tel:</p> <p>Ciudad: TULUA</p>		<p>Código Postal: 78322309</p> <p>Depto: VALLE DEL CAUCA</p>		<p>Código Operativo: 7419460</p>		<p>Firma nombre y/o sello de quien recibe:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">porvenir</p> <p>Tel:</p> <p>Hora:</p>												
<p>Valores</p> <p>Peso Físico(gms):200</p> <p>Peso Volumétrico(gms):0</p> <p>Peso Facturado(gms):200</p> <p>Valor Declarado:\$0</p> <p>Valor Flete:\$8.800</p> <p>Costo de manejo:\$0</p> <p>Valor Total:\$8 800</p>		<p>Dice Contenedor:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">porvenir</p> <p>Observaciones del cliente:</p>		<p>Entrega: sólo hasta oficina</p> <p>Entrega a:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">porvenir</p> <p>Observaciones de oficina:</p>		<p>Fecha de entrega:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">10 MAY 2019</p> <p>Observaciones de oficina:</p>												

7419

450

7419

460

7419

460

Destinatario Remitente

Destinatario Remitente

Destinatario Remitente

Destinatario Remitente

Valores

Dice Contenedor

Entrega

Entrega a

7419

450

7419

460

7419

460

Destinatario Remitente

Destinatario Remitente

Destinatario Remitente

Destinatario Remitente

Valores

Dice Contenedor

Entrega

Entrega a

7419

450

7419

460

7419

460

Destinatario Remitente

Destinatario Remitente

Destinatario Remitente

Destinatario Remitente

Valores

Dice Contenedor

Entrega

Entrega a

7419

450

7419

460

7419

460

Destinatario Remitente

Destinatario Remitente

Destinatario Remitente

Destinatario Remitente

Valores

Dice Contenedor

Entrega

Entrega a

7419

450

7419

460

7419

460

Destinatario Remitente

Destinatario Remitente

Destinatario Remitente

Destinatario Remitente

Valores

Dice Contenedor

Entrega

Entrega a

7419

450

7419

460

7419

Protección Social S.C. Colaboración Registrales y SE ASSE Registra / www.4-22.com.mx. Número Nacional DE SUT 8.720 / Tel. contacto 029 4727235. Vía Internet: (de pago) 00228 del 20 de mayo de 2019. Vía E-mail: Reg. Minuteros / correo 07757 de 5 segundos del 20.

La información aquí contenida es auténtica e inmodificable.

Código Postal: 110911
Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.

Línea Bogotá: (57-1) 472 2005
Línea Nacional: 01 8000 111 210

WWW.4-72.COM.CO



Trazabilidad Web

[Ver certificado entrega](#)

N° Guia

Buscar

Para visualizar la versión 1 ; sigue las [instrucciones](#) de ayuda para habilitarlas

Página 1 de 1

1 of 1 Find | Next

Guía No. YP003440987CO

Fecha de Envío: 10/05/2019
08:00:00

Tipo de Servicio: NOTIEXPRESS POR AVISO

Cantidad: 1

Peso: 200.00

Valor: 8600.00

Orden de
servicio:

Datos del Remitente:

Nombre: ORLANDO GOMEZ NOVOA

Ciudad: TULUA

Departamento: VALLE DEL
CAUCA

Dirección: CALLE 26 NO 24-54

Teléfono:

Datos del Destinatario:

Nombre: MIGUEL LARGACHA MARTINEZ

Ciudad: TULUA

Departamento: VALLE DEL
CAUCA

Dirección: CALLE 27 # 26 -60 ESQUINA PORVENIR

Teléfono:

Carta asociada:

Código envío paquete:

Quien Recibe:

Envío Ida/Regreso Asociado:

Fecha	Centro Operativo	Evento	Observaciones
09/05/2019 10:57 AM	PO.TULUA	Admitido	
10/05/2019 03:17 PM	PO.TULUA	Entregado	
10/05/2019 05:51 PM	PO.TULUA	Digitalizado	



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA – RAMA JUDICIAL
JUZGADO 002 LABORAL DEL CIRCUITO
Tuluá – Valle del Cauca

Ref. Ordinario laboral de primera instancia
Dte. Fabio Alonso Espinosa Olaya
Ddo. Porvenir S.A.
Rad. 76-834-31-05-001-2018-00066-00

AUTO SUS No. 927

Tuluá, 30 de mayo del 2019

Revisado el expediente, el Despacho verifica la notificación nombrada por el demandante como “notificación por aviso”, que si bien, no se encuentra regulada en el C.P.L. y de la S.S., es procedente de conformidad con el artículo 292 del C.G.P., sin embargo, al hacer la revisión de la misma, se advierte que el apoderado omitió dar aplicación al artículo 29 del C.P.L. y de la S.S., que regula la empresa procesal de nombramiento de curador Ad-Litem y emplazamiento en caso no conocer la dirección de notificación del demandado o ante la imposibilidad de surtir efectos la misma aun conociéndola, puesto que al diligenciarla no advirtió a la parte que pretende notificar las consecuencias de no comparecer una vez se encuentre surtida la segunda citación, por lo que, a consideración del Despacho, no se tendrá en cuenta esta notificación arrojada al proceso por no contar con las reglas procesales propias de la notificación personal en armonía con el artículo antes citado.

Por lo anterior, se requerirá a la parte demandante, para que envíe nuevamente la segunda citación al demandado, con las reglas procedimentales enunciadas anteriormente, para así cumplir a cabalidad con lo reglado en nuestro Estatuto Procesal.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado,

RESUELVE:

REQUERIR a la parte demandante, Sr. FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA, para que envíe nuevamente la segunda citación para surtir la notificación personal al demandado, de conformidad con los presupuestos procesales antedichos, en armonía con el artículo 29 del C.P.L. y de la S.S.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

El Juez,

VICTOR JAIRO BARRIOS ESPINOSA

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL
CIRCUITO
TULUÁ VALLE

Hoy, **31 MAY 2019** se
notifica por ESTADO No. , a las
partes el auto que antecede.

TRASIBULO ROJAS LOZANO
SECRETARIO



Orlando Gómez Novoa

ABOGADO



82
16 AGO 2019

Señor

JUEZ SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE TULUA VALLE

E.

S.

D.

H. 10:43 PM-

REF: PROCESO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

DTE: FABIO ALONSO ESPINOSA

DDO: PORVENIR S.A.

RDO: 2018 - 00066

ORLANDO GOMEZ NOVOA, mayor, vecino de este Municipio, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 16.356.320 de Tuluá valle, Abogado en ejercicio de la profesión, portador de la tarjeta profesional Nro. 76.322 del C.S.J., obrando en condición de apoderado judicial de la parte demandante dentro del proceso citado en la referencia, mediante el presente escrito me permito manifestar al despacho que la notificación personal a la parte demandada le será remitida a la dirección que aparece en el certificado de cámara de comercio, calle 13 Nro. 46-15 de la ciudad de Bogota. Lo anterior con el fin de hacer más efectivo dicho acto de notificación y de paso garantizarle a la parte demandada su comparecencia al proceso y su derecho a la defensa.

Atentamente,


ORLANDO GOMEZ NOVOA

C.C. 16.356.320 de Tuluá valle

T.P. 76.322 del C.S.J.

Señores

JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE TULUA

Bogotá D.C

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA
DEMANDADO: PORVENIR S.A
RADICADO: 20180066

GLORIA AVILA COPETE, mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando como Representante Legal Judicial de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías **PORVENIR S.A.**, Sociedad anónima vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con domicilio principal en Bogotá D.C., legalmente constituida, con permiso de funcionamiento conferido mediante Resolución número 3970 el treinta (30) de octubre de 1991, expedido por esa Superintendencia, tal y como se acredita en el certificado anexo expedido por la misma, a Usted con todo respeto manifiesto que confiero poder especial amplio y suficiente al Doctor (a) **LUIS FELIPE ARANA MADRIÑAN**, identificado con la C.C. **79157258** portador de la tarjeta profesional **54805** expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que se notifiquen, contesten la demanda, adelanten y lleven hasta su terminación el proceso citado en la referencia en defensa de los intereses de Porvenir S.A.

El Doctor (a) **LUIS FELIPE ARANA MADRIÑAN** quedan facultados conforme a los términos del artículo 77 del Código General Del Proceso para conciliar, recibir, transigir, desistir, sustituir, presentar demanda de reconvencción, reasumir, absolver interrogatorio de parte y en general realizar todo acto en defensa de los intereses de Porvenir S.A.

Atentamente,



GLORIA AVILA COPETE
Representante Legal Judicial
C.C 52622936

Acepto,



LUIS FELIPE ARANA MADRIÑAN
C.C. **79157258**
54805 del C. S. de la J

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN
Y RECONOCIMIENTO

NOTARIAL



Bogotá, D.C.

El Notario Dieciocho del Círculo de
Bogotá D.C. hace constar que el anterior escrito
fue presentado personalmente por:

GLORIA LUCIA AVILA COPETE

52.622.936

Identificado (a) con C.C. _____

y declaró que la firma y la huella que aparecen en
el presente documento son suyas, y el contenido
del mismo es cierto. la huella se autentica por
solicitud del interesado.

Bogotá: **09 MAY 2019**

Gloria Lucia Avila Copete



FIRMA

INDICE DEET



84

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 4592813882282382

Generado el 02 de mayo de 2019 a las 08:55:09

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

EL SECRETARIO GENERAL AD-HOC

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el numeral 10 del artículo 11.2.1.4.59 del Decreto 1848 del 15 de noviembre del 2016, en concordancia con el artículo 1° de la Resolución 1765 del 06 de septiembre de 2010, emanada de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Anónima De Nacionalidad Colombiana. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 5307 del 22 de octubre de 1991 de la Notaría 23 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).

Resolución S.F.C. No 0628 del 03 de abril de 2013 la Superintendencia Financiera de Colombia, no objeta la adquisición de BBVA Horizonte Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías S.A. por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

Resolución S.F.C. No 2134 del 22 de noviembre de 2013 La Superintendencia Financiera de Colombia no objeta la fusión por absorción de HORIZONTE Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía PORVENIR S.A., protocolizada mediante Escritura Pública 2250 del 26 de diciembre de 2013 Notaria 65 de Bogotá, produciéndose en consecuencia la disolución sin liquidación de la entidad absorbida.

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 3970 del 30 de octubre de 1991

Resolución S.B. 3970 del 30 de octubre de 1991 Autorizó a la citada sociedad para desarrollar las actividades comprendidas dentro de su objeto social, esto es, la administración de Fondos de Pensiones y de Cesantía, acto a partir del cual administra el FONDO DE CESANTIAS.

Oficio 92042984-9 del 01 de julio de 1993 Autoriza a la sociedad denominada PORVENIR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., para administrar fondos de pensiones voluntarias

Resolución S.B. 535 del 30 de marzo de 1994 Autoriza a la sociedad denominada PORVENIR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., para administrar fondos de pensiones del Régimen de ahorro Individual con Solidaridad en los términos en que dicha autorización fue solicitada y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

REPRESENTACIÓN LEGAL: La administración y representación de la sociedad estará a cargo del Presidente y de los Vicepresidentes, que para el efecto designe la Junta Directiva. Los representantes legales serán nombrados por la Junta Directiva de manera indefinida, pudiendo ser removidos en cualquier tiempo. Los representantes podrán ser socios o extraños. **FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL** Son funciones de los Representantes Legales las que, dentro de los límites que le imponen el objeto social y los estatutos de PORVENIR, las que les corresponden de acuerdo con la naturaleza de su cargo y en particular las siguientes: a) Usar la denominación social y ejercer la representación legal y además representar judicial y extrajudicialmente a la compañía, ante cualquier autoridad o persona natural o jurídica, con facultades para novar, transigir, comprometer y desistir y para comparecer en juicios en que se dispute la propiedad de bienes o derechos sociales; b) Ejecutar o celebrar toda clase de actos y contratos relativos al objeto social, en que



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 4592813882282382

Generado el 02 de mayo de 2019 a las 08:55:09

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

tenga interés la compañía; c) Convocar a la Junta Directiva a reuniones ordinarias y extraordinarias, y presentar en las primeras un informe sobre el estado de los negocios sociales; d) Designar los empleados cuyo nombramiento no esté asignado a otro órgano social, removerlos y firmar los respectivos contratos de trabajo; e) Abrir cuentas bancarias a nombre de la Sociedad para mantener en ella los dineros sociales, girar contra ellas y negociar toda clase de títulos valores; f) Constituir mandatarios que representen a la Sociedad en juicio o fuera de él y delegarles las funciones o atribuciones que considere necesarias, en cuanto sean delegables; g) Suscribir las escrituras de reformas estatutarias; h) Suscribir los contratos que sean necesarios para la administración de los patrimonios autónomos que constituyan las entidades territoriales y sus descentralizadas, con independencia de su cuantía; i) Resolver, en primera instancia, sobre la procedencia de auditorías especiales solicitadas por los accionistas, en los términos definidos en el Código de Buen Gobierno Corporativo de la Sociedad; j) Presentar a la Junta Directiva para su aprobación y velar por su permanente cumplimiento, las medidas específicas de Buen Gobierno de la Sociedad, su conducta y su información, con el fin de asegurar el respeto de los derechos de quienes en ella invierten o en cualquier otro valor que llegare a emitir y la adecuada administración de sus asuntos y k) Ejercer todas aquellas funciones que le sean asignadas por la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva o la Ley y que no se encuentren aquí relacionadas. (Escritura Pública 1674 del 30 de septiembre de 2009 Notaria 65 de Bogotá D.C.). Para efectos de la Representación Legal de la Sociedad, tendrán la calidad de Representantes Legales judiciales los abogados que con tal fin designe la Junta Directiva, quienes representarán a la sociedad ante las autoridades jurisdiccionales, administrativas, políticas, entidades centralizadas y descentralizadas del Estado (Escritura Pública 1708 del 11 de octubre de 2010 Notaria 65 de Bogotá)

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Miguel Largacha Martínez Fecha de inicio del cargo: 06/10/2008	CC- 79156394	Presidente
Roberto Díez Trujillo Fecha de inicio del cargo: 06/02/2014	CC - 79292143	Vicepresidente
Andres Vasquez Restrepo Fecha de inicio del cargo: 08/01/2004	CC - 71695255	Vicepresidente
Alonso Angel Lozano Fecha de inicio del cargo: 28/10/2010	CC - 16799132	Vicepresidente
Diana Cristina Visser Álvarez Del Pino Fecha de inicio del cargo: 08/01/2009	CC - 38940883	Vicepresidente
Erik Andrés Moncada Rasmussen Fecha de inicio del cargo: 15/11/2018	CC - 79781438	Vicepresidente
Alejandro Gómez Villegas Fecha de inicio del cargo: 27/10/2011	CC - 79941020	Vicepresidente
Juan Pablo Salazar Aristizabal Fecha de inicio del cargo: 07/10/2004	CC - 71731636	Vicepresidente
Alba Lucia Rodríguez Pedraza Fecha de inicio del cargo: 11/11/2011	CC - 63305689	Representante Legal Judicial
Elizabeth Mira Hernandez Fecha de inicio del cargo: 29/01/2014	CC - 43868037	Representante Legal Judicial
Diana Martínez Cubides Fecha de inicio del cargo: 29/01/2014	CC - 52264480	Representante Legal Judicial
Genny Carolina Ramírez Zamora Fecha de inicio del cargo: 17/03/2015	CC - 52829319	Representante Legal Judicial

85

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 4592813882282382

Generado el 02 de mayo de 2019 a las 08:55:09

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Alejandro Osorio Velez Fecha de inicio del cargo: 30/09/2015	CC - 98533292	Representante Legal Judicial
Gloria Ávila Copete Fecha de inicio del cargo: 19/02/2016	CC - 52622936	Representante Legal Judicial
Jorge Eduardo Montañez Cortés Fecha de inicio del cargo: 19/02/2016	CC - 79443280	Representante Legal Judicial
José Edgar Bahamón Vargas Fecha de inicio del cargo: 06/02/2017	CC - 1075235517	Representante Legal Judicial
Jaime Alberto Gutiérrez Muñoz Fecha de inicio del cargo: 06/02/2017	CC - 94478973	Representante Legal Judicial
Eliana Margarita Camacho Ortega Fecha de inicio del cargo: 13/06/2017	CC - 43818430	Representante Legal Judicial
Doris Yolanda Guerrero Rodriguez Fecha de inicio del cargo: 13/06/2017	CC - 52171334	Representante Legal Judicial
Kelly Alexandra Reina Quintero Fecha de inicio del cargo: 13/06/2017	CC - 53065421	Representante Legal Judicial
Alba Janneth Moreno Baquero Fecha de inicio del cargo: 13/06/2017	CC - 53077586	Representante Legal Judicial
María Angélica Aguirre Aponte Fecha de inicio del cargo: 27/04/2018	CC - 1018430499	Representante Legal Judicial
Laura Hernández Galvis Fecha de inicio del cargo: 27/04/2018	CC - 1020768708	Representante Legal Judicial
Paula Natalia Carreño Correa Fecha de inicio del cargo: 27/04/2018	CC - 1098706699	Representante Legal Judicial
Claudia Ximena Valencia Tovar Fecha de inicio del cargo: 27/04/2018	CC - 1114830343	Representante Legal Judicial
Susana Correa Acebedo Fecha de inicio del cargo: 27/04/2018	CC - 1152434005	Representante Legal Judicial
Hernando Pico Cubides Fecha de inicio del cargo: 27/04/2018	CC - 19498811	Representante Legal Judicial
Jacqueline Rodríguez Rojas Fecha de inicio del cargo: 27/04/2018	CC - 52230797	Representante Legal Judicial
Zonia Bibiana Gómez Misse Fecha de inicio del cargo: 27/04/2018	CC - 52969989	Representante Legal Judicial
David Alberto Herrera Castañeda Fecha de inicio del cargo: 27/04/2018	CC - 8358405	Representante Legal Judicial
Jair Fernando Atuesta Fecha de inicio del cargo: 27/04/2018	CC - 91510758	Representante Legal Judicial
Rugby Karina Sánchez Acosta Fecha de inicio del cargo: 11/11/2011	CC - 52425305	Representante Legal Judicial
Lorena Botero Botero Fecha de inicio del cargo: 11/11/2011	CC - 51999530	Representante Legal Judicial
Nancy Adriana Rodríguez Casas Fecha de inicio del cargo: 11/11/2011	CC - 51970146	Representante Legal Judicial



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 4592813882282382

Generado el 02 de mayo de 2019 a las 08:55:09

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Ivonne Amira Torrente Schultz Fecha de inicio del cargo: 11/11/2011	CC - 32737160	Representante Legal Judicial
Luz Stella Martínez Idrobo Fecha de inicio del cargo: 11/11/2011	CC - 31944867	Representante Legal Judicial
Consuelo Adriana Peñuela Guerrero Fecha de inicio del cargo: 25/03/2011	CC - 52713168	Representante Legal Judicial
Marcela Munevar Salcedo Fecha de inicio del cargo: 25/03/2011	CC - 52034007	Representante Legal Judicial
Carlos Andres Sánchez Medina Fecha de inicio del cargo: 07/01/2016	CC - 94501244	Representante Legal Judicial

María Catalina E. C. Cruz García

MARÍA CATALINA E. C. CRUZ GARCÍA
SECRETARIO GENERAL AD-HOC

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."



ARANA BRANDO S.A.S.
ABOGADOS LABORALISTAS

Autos Jueces Laborales del Circuito de Cau
E. S. D.


REFERENCIA: Proceso Ordinario Laboral de Fabio Norberto Espinosa
vs FORVINT SA

LUIS FELIPE ARANA MADRIÑAN, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad Apoderado Judicial Principal de FORVINT SA

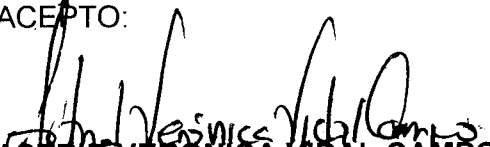
en el proceso de la referencia, por medio del presente documento me permito manifestar que **SUSTITUYO** el poder a mi conferido, en cabeza de la Doctora **ASTRID VERONICA VIDAL CAMPO**, abogada en ejercicio, titular de la T.P. No. 212.604 del C.S.J.

La Doctora **ASTRID VERONICA VIDAL CAMPO** quien gozará de las mismas facultades a mi conferidas

Atentamente,


LUIS FELIPE ARANA MADRIÑAN
C.C. # 79.157.258 de Bogotá
T.P. # 54.805 del C.S.J.

ACEPTO:


ASTRID VERONICA VIDAL CAMPO
C.C. # 34.325.896 de Popayán.
T.P. # 212.604 del C.S.J.

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO-TULUA VALLE



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

PALACIO DE JUSTICIA LISANDRO MARTINEZ ZUÑIGA
CALLE 26 CARRERA 27 ESQUINA

NOTIFICACION PERSONAL Y TRASLADO DE LA DEMANDA

Hoy diecinueve (19) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), presente en el Despacho del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tulúa Valle del Cauca, la doctora ASTRID VERONICA VIDAL CAMPO, cedulada bajo el N° 34.325.896, portadora de la T.P. N° 212.604 del C.S.J., a quien en su calidad de apoderada judicial sustituta de la demandada PORVENIR S.A., tal como se acredita con el memorial poder presentado, el cual se agrega al expediente, le notifico personalmente el contenido del auto admisorio de la demanda proferido dentro del proceso que se identifica como sigue:.

N° DE RADICACION DEL PROCESO

FECHA DE LA PROVIDENCIA

2019-00066-00

NOVIEMBRE 19 DE 2018

DEMANDANTE.

DEMANDADO:

FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA

PORVENIR S.A..

Se notifica como ya se dijo, en calidad de apoderada judicial de la demandada en mención, tal como se acredita con el poder de sustitución que presenta y se glosa a los autos.

Se le corre traslado de la demanda por el término legal de diez (10) días hábiles para que la conteste si lo estima conveniente.

Bien enterada, se le hace entrega de copia de la demanda con sus anexos.

LA NOTIFICADA,

DRA. ASTRID VERONICA VIDAL CAMPO..

EL SECRETARIO

TRASIBULO ROJAS LOZANO

Secretario

hg

ARANA BRANDO S.A.S.
ABOGADOS LABORALISTAS

SEÑOR

JUEZ SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE TULUA
E. S. D.



REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA DE
FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA VS. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. Rad. No. 2018 -
00066

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE DEMANDA.

ASTRID VERÓNICA VIDAL CAMPO, abogada en ejercicio, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de Apoderada Judicial sustituta de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, en virtud del poder conferido por el Doctor Luis Felipe Arana Madriñan, quien a su vez le fue otorgado poder amplio y suficiente por parte de la Representante Legal de la citada sociedad, Doctora Gloria Ávila Copete, los cuales obran en autos, procedo a contestar la demanda interpuesta por el señor **FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA**, en los siguientes términos:

En cuanto a las **PRETENSIONES, PETICIONES y/o DEMANDA**, las considero infundadas y solicito desde ya se absuelva a mí representada de todas y cada una de ellas.

Así las cosas, pasamos a pronunciarnos expresamente frente a cada una de las **PRETENSIONES Y CONDENAS** del escrito de la demanda, en la forma como quedaron planteadas, en los siguientes términos:

LA 1. Nos oponemos a que se imponga cualquier tipo de condena por concepto de intereses moratorios, a favor del señor **FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA**, teniendo en cuenta que mi representada ya liquidó y reconoció la pensión de invalidez y la prestación está siendo pagada al beneficiario, razón por la cual, no se ha presentado mora en el reconocimiento y pago del derecho a favor del demandante.

Es del caso precisar que mediante comunicación de radicado CJB-05-7989 del 25 de febrero de 2005, mi representada definió de fondo la solicitud de pensión de invalidez presentada por el actor, rechazándola y otorgando la devolución de saldos, toda vez que el actor no había cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003.

Posteriormente, el 19 de septiembre de 2016, el demandante radicó un derecho de petición solicitando la reconsideración frente al reconocimiento de su pensión de invalidez, y por ello, el 22 de septiembre de 2016, mi representada ratificó el rechazo por el no cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para acceder a la misma. Y posteriormente el actor decidió interponer una acción de tutela en contra de mi representada, la cual en primera instancia

el Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Tuluá, ordenó a mi representada computar las semanas en que se prestó el servicio militar, ello con fundamento en sentencias de la Corte Constitucional como la T-413 del 2016, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tuluá, y por ello, conforme a lo anterior, mi representada dio cumplimiento a la orden judicial, y aprobó el reconocimiento de la pensión de invalidez, tomando en cuenta la inclusión de los referidos tiempos, y así mismo, se procedió a pagar el retroactivo pensional por valor de \$90.095.854.00 desde la fecha de estructuración, es decir el 09 de enero del 2005 hasta el mes de febrero del 2017, mes a partir del cual se efectuó el pago.

Teniendo en cuenta lo expuesto, es claro que de acuerdo a la normatividad vigente para la fecha de estructuración de la invalidez del actor, la norma aplicable al caso concreto es el artículo 1 de la Ley 860 del 2003, la cual exigía el cumplimiento del requisito de 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración, lo cual no cumplía el demandante conforme a las cotizaciones acreditadas ante la AFP, sin embargo bajo el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional que se citó en el párrafo precedente y que corresponde al año 2016, fue a partir de esa fecha que se impartió la orden de computar los tiempos del servicio militar. En este orden de ideas, al haberse basado la decisión aun cuando fuera por el Juez Constitucional, en una interpretación jurisprudencial y no en la Ley, es menester indicar que no puede haber una condena de intereses moratorios en contra de mi representada, toda vez que así lo ha dilucidado la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en la sentencia SL2756-2017 rad. 68425 del 22 de febrero de 2017, con Ponencia de la de la Doctora Clara Cecilia Dueñas, quien textualmente expresó lo siguiente:

“...Le asiste razón a la censura, toda vez que como lo ha reiterado la Sala, los intereses moratorios son improcedentes cuando, como en el sub lite, la administradora de pensiones niega la prestación con fundamento en el tenor literal de la ley, sin los alcances que en un momento determinado puedan darle los jueces en su función de interpretar las normas sociales y bajo los principios fundamentales de la seguridad social que a las entidades les es imposible predecir...”

A LA 2. Si no son de recibo las pretensiones elevadas en contra de mi representada, mucho menos puede prosperar una condena accesorio por concepto de costas y agencias en derecho, amén de que mi representada siempre ha actuado de buena fe y con estricta sujeción a la ley, por lo cual nos oponemos radicalmente a que se profiera este tipo de condena.

A LA 3. Nos oponemos a que se de aplicación a las facultades extra y ultra petita conferidas al señor Juez Segundo Laboral del Circuito de Tuluá, por cuanto mi representada no adeuda ni lo solicitado en la demanda, ni ningún otro concepto.

En cuanto a los **HECHOS** de la demanda, estos se responden en los siguientes términos:

EL PRIMERO. Contiene varios hechos que respondo en los siguientes términos:

No me consta lo relacionado con el accidente de tránsito al que se hace alusión, por cuanto se trata de un hecho que no se encuentra dirigido en contra de mi representada la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.**, por lo tanto, no me puedo pronunciar, ni afirmativa, ni negativamente debiendo ser demostrado por la parte que lo alega.

Es cierto que la Junta Regional de Calificación de Invalidez, determinó que el actor tenía el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y fecha de estructuración que se aduce en el presente hecho.

EL SEGUNDO. Es cierto.

EL TERCERO. No es cierto, toda vez que fue mediante comunicación del 25 de febrero de 2005, que mi representada definió de fondo la prestación pensional.

EL CUARTO. No es cierto, no existe evidencia documental respecto de las peticiones que el demandante arguye, le efectuó a mi representada.

EL SEXTO (SIC). Contiene varios hechos que respondo en los siguientes términos:

No me constan las situaciones personales del actor que se aducen al inicio del presente hecho, y por lo tanto, no me puedo pronunciar, ni afirmativa, ni negativamente, debiendo ser demostradas por la parte que las alega.

Es cierto que el actor presentó una acción de tutela en contra de mi representada, cuya orden fue la expresada, por parte del Juez de primera instancia.

No es cierto que mi representada no hubiese suministrado una respuesta positiva frente a lo ordenado en el fallo de tutela, y simplemente ejerció su derecho a la defensa efectuando la impugnación correspondiente.

Es cierto que en sede de segunda instancia el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tuluá confirmó el fallo de primera instancia.

EL SÉPTIMO. No es cierto como está redactado y aclaro: Precisamente en cumplimiento del fallo proferido por el Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Tuluá, mi representada procedió a reconocer la pensión de invalidez, y por ello debe tenerse en cuenta que la orden judicial implicaba el que se realizaran una serie de trámites por parte de mi representada ante el Ministerio de Defensa y Ministerio de Hacienda y Crédito Público; así mismo, mi representada debió solicitar a la Aseguradora con la cual se tenía contratada la póliza previsional para las contingencias de invalidez y muerte, la viabilidad del pago de la suma adicional de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 100 de 1993, motivo por el cual la aprobación de la pensión se le informó al actor el 13 de febrero del 2017.

EL OCTAVO. Es cierto.

EL NOVENO. Es cierto.

EL DÉCIMO. No se trata de un hecho, sino de una pretensión indebidamente relacionada en el presente acápite.

EL DÉCIMO PRIMERO. Es cierto, el actor presentó el derecho de petición en los términos indicados en el presente numeral.

EL DÉCIMO SEGUNDO. Es cierto.

EL DÉCIMO TERCERO. No se trata de un hecho, sino de fundamentos de derecho indebidamente relacionados en el presente acápite.

HECHOS, FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO DE LA DEFENSA

1. El 01 de julio del 2004, el señor **FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA** suscribió el formulario de vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por **BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS S.A** hoy **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, como vinculación inicial al sistema.

2. El 12 de enero del 2005, el señor **FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA**, radicó ante la AFP que represento, una solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

3. La **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, asumió el estudio de la reclamación pensional y luego de efectuar en su momento todas las acciones y verificaciones respectivas, para determinar la viabilidad del reconocimiento pensional a favor de la actora y su representado, rechazó la solicitud pensional, lo cual fue informado al actor mediante comunicación de radicado CJB-05-7989 de fecha 25 de febrero de 2005, en la cual se le indicó textualmente lo siguiente:

“...Una vez en firme el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca se procedió a verificar el cumplimiento de las semanas que le dan derecho a pensión de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado pro el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, que establece los requisitos para obtener la pensión de invalidez en los siguientes términos:

Artículo 1. Requisitos para obtener la pensión de invalidez.

Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado invalido y acredite las siguientes condiciones:

- a) La invalidez causada por enfermedad que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los ultimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración...”*

“...5. Se procedió a verificar si usted cumple con el requisito de (50) semanas en los tres (3) años anteriores a su fecha de estructuración de la invalidez, esto es dese enero del 2002 hasta enero del 2005.

6. El estudio demostró que usted tan solo cotizó al Sistema General de Pensiones 25.71 semanas durante este tiempo, por lo que no reúne el requisito de las 50 semanas exigidas por la ley...”.

4. Dentro de la misma comunicación se le indicó al actor lo siguiente:

“...Ahora bien, la Ley 100 de 1993 en su artículo 72 establece la devolución de saldos por invalidez de la siguiente manera:

ART. 72. DEVOLUCIÓN DE SALDOS POR INVALIDEZ. Cuando el afiliado se invalide sin cumplir los requisitos para acceder a una pensión de invalidez, se le entregará la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los rendimientos financieros y adicionado con el valor del bono pensional si a ello hubiere lugar.

No obstante, el afiliado podrá mantener el saldo en la cuenta individual de ahorro pensional y cotizar para construir el capital necesario para acceder a una pensión de vejez...”

5. El 09 de junio del año 2016, el actor radicó ante mi representada su solicitud de devolución de saldos existente en su cuenta de ahorro individual, bajo los siguientes términos:

“La presente tiene por objeto manifestarles que estoy de acuerdo con el rechazo de la pensión de invalidez y acepto la devolución de saldos a la cual hay lugar”.

6. No obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el 19 de septiembre del 2016, el señor **FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA** radicó un derecho de petición solicitando la reconsideración de la AFP, frente al reconocimiento de su pensión de invalidez, y por ello, el 22 de septiembre de la misma anualidad, mi representada reiteró su rechazo frente a la pensional por no cumplir los requisitos establecidos.

7. En el mes de octubre del 2016, el actor interpuso una acción de tutela en contra de mi representada, la cual correspondió en primera instancia al Juzgado Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Tuluá, cuya decisión fue la de amparar los derechos constitucionales que había solicitado el actor y ordenó:

“SEGUNDO. ORDENAR a la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. para que el en termino no superior de 20 días proceda a computar las cotizaciones bajo el servicio militar obligatorio y generar una nueva historia laboral de los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad labora”.

La sentencia proferida fue impugnada por mi representada, y en sede de segunda instancia que correspondió al Juzgado Tercero Civil del Circuito de

Tuluá la decisión de primera instancia fue confirmada.

8. Vale la pena precisar que como fundamento de su decisión el Juez Constitucional para impartir la orden judicial ya reseñada, hizo alusión entre otras cosas, a pronunciamientos de la Corte Constitucional en los cuales se establece la procedencia de tener en cuenta tiempos militares para el reconocimiento de pensiones:

“...En reciente pronunciamiento de la Corte, en sentencia T- 413 del 2016, manifiesta la necesidad de contabilizar el tiempo para efecto del reconocimiento de pensiones y demás prestaciones.

La sentencia T-063 de 2013 analizó el caso de una persona con más de setenta años de edad y con una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, a quien el ISS no le tenía en cuenta el tiempo correspondiente a la prestación del servicio militar obligatorio. En este caso, la Corte le ordenó a la accionada liquidar y pagar la pensión de vejez incluyendo las semanas correspondientes a la prestación del servicio militar obligatorio. Después de analizar las normas que establecen los beneficios para las personas que prestaron el servicio militar obligatorio concluyó que “desde el año de 1945 se estableció un régimen de carácter legal y reglamentario, en el que se reconoce la obligación de tener en cuenta el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio para el cálculo de varias prestaciones sociales, entre ellas la pensión de vejez. Este régimen se mantuvo con la expedición de la Constitución Política de 1991, en la que se dispuso el deber del legislador de reconocer prerrogativas a quienes prestan dicho servicio y así se consagró en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993.”

9. En este punto, ha de resaltarse que con relación a los tiempos del servicio militar, en el literal a) del artículo 40 de la Ley 48 de 1993, se estableció que los mismos únicamente podían computarse para pensión de **jubilación de vejez** y prima de antigüedad en los términos de ley, beneficio que era entendido en estricto sentido por parte de mi representada, tanto para la fecha en que el actor había solicitado su pensión de invalidez en el mes de enero del 2005, como para el momento en el cual se había presentado la acción de tutela, toda vez que conforme a lo establecido en la norma en comento, dicho beneficio no era aplicable para otros tipos de pensión, como la deprecada por el demandante.

10. Teniendo en cuenta lo expuesto, es claro que de acuerdo a la normatividad vigente para la fecha de estructuración de la invalidez del actor, la norma aplicable al caso concreto es el artículo 1 de la Ley 860 del 2003, la cual exigía el cumplimiento del requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, situación de hecho que no cumplía el demandante, toda vez que ese número de semanas NO se encontraban acreditadas entre el 09 enero del 2002 y el 09 de enero del 2005, sin embargo bajo el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional que se citó en el numeral 8 del presente acápite y que data del año 2016, fue que se impartió por parte de un Juez Constitucional, la orden de computar los tiempos del servicio militar prestado por el actor, con los cuales el actor logró cumplir con el requisito mínimo de las 50 semanas cotizadas en el trienio anterior a la fecha de estructuración de su estado de invalidez, orden judicial que fue de obligatorio cumplimiento para de mi representada, por ser

proferida por un Juez Constitucional, en la interpretación jurisprudencial extensiva a la que nos hemos referido y NO en la aplicación estricta de la Ley, y por ello, debemos indicar que NO se puede proferir ahora una condena por el concepto de los intereses moratorios en contra de mi representada, por cuanto así lo ha definido la propia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la sentencia SL2756-2017 Rad. 68425, de fecha 22 de febrero de 2017, con Ponencia de la Doctora Clara Cecilia Dueñas, quien concluyó textualmente lo siguiente:

“...Le asiste razón a la censura, toda vez que como lo ha reiterado la Sala, los intereses moratorios son improcedentes cuando, como en el sub lite, la administradora de pensiones niega la prestación con fundamento en el tenor literal de la ley, sin los alcances que en un momento determinado puedan darle los jueces en su función de interpretar las normas sociales y bajo los principios fundamentales de la seguridad social que a las entidades les es imposible predecir.

...La Sala como consecuencia de su nueva integración ha considerado pertinente moderar esta posición jurisprudencial, para aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir.

Entiende la Corte que la jurisprudencia en materia de definición de derechos pensionales ha cumplido una función trascendental al interpretar la normativa a la luz de los principios y objetivos que informan la seguridad social, y que en muchos casos no corresponde con el texto literal del precepto que las administradoras en su momento, al definir las prestaciones reclamadas, debieron aplicar por ser las que en principio regulaban la controversia; en esas condiciones, no resulta razonable imponer el pago de intereses moratorios porque su conducta no estuvo guiada por el capricho o la arbitrariedad, sino por el respeto de una normativa que de manera plausible estimaban regía el derecho en controversia.

En el sub lite procede entonces la exoneración de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues como se dejó suficientemente explicado con ocasión del recurso extraordinario, la concesión de la pensión de invalidez obedeció a la regla jurisprudencial establecida en la sentencia CSJ SL, 2 ago 2011, rad. N° 39766, y no a la aplicación literal del artículo 1° de la Ley 860 de 2003...”

11. Adicionalmente, debemos insistir que a la parte demandante se le reconoció el RETROACTIVO pensional desde el año 2005 al 2016, por lo que NO sufrió desmedro alguno en cuanto al pago TOTAL de sus mesadas pensionales; y por

otra parte, es importante tener en cuenta, que los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, exclusivamente operan en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales, evento en la cual, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al **pensionado**, el interés respectivo, de lo cual se desprende que la causación de los intereses moratorios, presupone el reconocimiento del status de pensionado del afiliado o los beneficiarios, condición que solo nace a la vida jurídica mediante la correspondiente comunicación o resolución de reconocimiento pensional o con la ejecutoria de la sentencia que reconce el derecho, es decir, que con anterioridad al acto jurídico de reconocimiento del beneficio pensional o la ejecutoria de la decisión judicial que lo reconoce, solo existe para el afiliado una mera expectativa de acceder al derecho pretendido.

12. En este sentido, la sentencia No. 145 del 15 de agosto de 2008, proferida dentro del proceso de María Luz Mila Vargas Ruiz contra Asia Santiago de Cali y Citi Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, la Sala de Descongestión Laboral, con ponencia de la doctora Sandra Inés Castro Zuluaga, señaló:

“...No ocurre lo mismo con los intereses de mora que se impusieron a partir del 30 de Junio de 1999, toda vez que la filosofía de ellos está referida a la sanción que se impone a la entidad encargada del pago, tal como se aprecia de la lectura de ese artículo 141 de la Ley 100 de 1993, cuando señala que: “ en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales ... la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó (sic) el pago.”

*Nótese además que tampoco es posible hacerlo, acudiendo a las pautas jurisprudenciales sobre el término que debe respetar la entidad del sistema de seguridad social para responder las peticiones, y que es de cuatro meses desde que recibe la petición del reconocimiento del derecho respectivo, porque aunque aquí no se tiene la más mínima idea de cuándo se reclamó el derecho, si de cuenta con la respectiva respuesta de la entidad como se acredita con la comunicación del 30 de Julio de 1999 (fl 23), es decir, la entidad solucionó la reclamación de la interesada pese a que fuera negativa, con fundamento en la existencia de multiafiliación, lo que de cara al material probatorio entregado por las partes, y debidamente analizado, se pudo establecer cómo se solucionaba y de contera a quien le competía la responsabilidad, **así que era necesaria la intervención de la justicia para que emergiera la existencia del derecho que reclamaba sobre la pensión de sobrevivientes la hoy demandante, señora María Luzmila. En consecuencia no se reconocerán los intereses de mora...**” (La negrilla es nuestra).*

13. Así las cosas, los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, solamente se hacen exigibles en aquellos eventos en los que con posterioridad al reconocimiento del derecho pensional, la entidad responsable del pago de las mesadas pensionales, de manera injustificada incumple con el pago de las mismas, lo que no ha ocurrido en este caso, por cuanto la AFP reconoció la pensión de invalidez a través de la comunicación de fecha 13 de

febrero del 2017, en la cual se le manifestó sobre el reconocimiento y pagao del retreoactivo pensional por valor de \$90.095.854, desde la fecha de estructuración, es decir desde el 09 de enero del 2005.

14. Por todo lo anterior mí representada, la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, nada adeuda al señor **FABIO ALFONSO ESPINOSA OLAYA**.

PRUEBAS: Solicito se decreten a favor de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, los siguientes medios de prueba:

1.- DOCUMENTOS:

- Formulario de afiliación suscrito por el actor. ✓
- Reclamación Solicitud de pensión de invalidez radicada el 12 de enero del 2005. ✓
- Comunicación del 25 de febrero del 2005 dirigida al señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA. ✓
- Comunicación del 22 de septiembre del 2016 dirigida al señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA. ✓
- Comunicación dirigida a la señora Lina María Torres Camargo- Coordinadora Grupo Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional. ✓
- Comunicación del 09 de junio del 2016 suscrita por el señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA aceptando la devolución de saldos. ✓
- Comunicación del 25 de octubre del 2016 dirigida al señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA. ✓
- Comunicación del 09 de noviembre del 2016 dirigida al señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA. ✓
- Comunicación del 06 de diciembre del 2016 dirigida al señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA. ✓
- Comunicación del 16 de diciembre del 2016 dirigida al señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA. ✓
- Comunicación del 13 de febrero del 2017 dirigida al señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA. ✓
- Comunicación del 13 de febrero del 2017 dirigida al señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA. ✓
- Impugnación acción de tutela instaurada por el señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA. ✓
- Sentencia proferida por el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Tuluá el 16 de octubre del 2017.
- Sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tuluá el 30 de noviembre del 2016. ✓
- Comunicación del 23 de marzo del 2017 dirigida al señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA. ✓
- Comunicación del 04 de enero del 2018 dirigida al señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA. ✓
- Relación Histórica de Movimientos Horizonte. ✓
- Relación de Aportes. ✓

PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE ACTORA: De conformidad con lo

dispuesto en los artículos 272 y 273 del Código General del proceso, aplicables por analogía al procedimiento laboral, desde ya manifestamos que desconocemos el contenido de los documentos presentados por la parte actora, que provengan de terceros, toda vez que por esa circunstancia, mi representada no tiene certeza de su veracidad y/o autenticidad, por lo cual las declaraciones extra juicio que se hayan presentado, deberán ser ratificada por los declarantes. Tampoco se reconoce valor probatorio a los documentos apócrifos.

EXCEPCIONES DE FONDO: Para ser decididas en la sentencia de fondo.

1.- PRESCRIPCIÓN: Sin implicar confesión o aceptación de los hechos de la demanda, me permito proponer la excepción de prescripción de la totalidad de las obligaciones de tracto sucesivo, que tuvieron más de tres (3) años desde la fecha de su causación, hasta la fecha de notificación de la presente demanda.

2.- INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, COBRO DE LO NO DEBIDO, FALTA DE CAUSA EN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, AUSENCIA DE DERECHO SUSTANTIVO, CARENCIA DE ACCIÓN Y FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA ACCEDER A LOS INTERESES MORATORIOS: Excepción que fundamentamos en el hecho de que la AFP que represento en primera medida rechazó la reclamación pensional por el no cumplimiento de las 50 semanas dentro de los tres años anteriores al momento de la estructuración de su invalidez, por cuanto estas no se encontraban acreditadas ante mi representada, en aplicación a la norma correspondiente, dio respuesta negativa. No obstante lo anterior el 13 de febrero del 2017, le comunicó al actor el reconocimiento y pago de la mesada pensional y su respectivo retroactivo pensional, ello en virtud del fallo de tutela proferido por el Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Tuluá, el cual ordenó computar los periodos correspondientes a la prestación del servicio militar, con fundamento en un pronunciamiento jurisprudencial de la Corte Constitucional, periodos con los cuales cumplió con el requisito establecido en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, en consecuencia no hay lugar al pago de intereses moratorios, toda vez que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral ha sido clara en indicar que no procede esta condena cuando para conceder una prestación económica la base sea una interpretación jurisprudencial y no la Ley.

3.- PAGO: De la pensión de invalidez y de su RETROACTIVO PENSIONAL, en los términos en que fue reconocido el derecho conforme a la comunicación del 13 de febrero del 2017.

4.- COMPENSACIÓN: Sin implicar confesión o aceptación de los hechos de la demanda, solicitamos se compensen las sumas de dinero que ha pagado al beneficiario del causante, por concepto de mesadas pensionales.

5.- BUENA FE DE LA ENTIDAD DEMANDADA: Excepción que se fundamenta en el hecho de que mi representada al rechazar la solicitud de pensión de invalidez, no lo hizo en forma arbitraria, sino con fundamento en las normas aplicables al caso concreto y que regulan el sistema de seguridad social integral.


6.- INNOMINADA o GENÉRICA Excepción que se fundamenta con base en lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso, aplicable por analogía al procedimiento laboral, que indica: *“Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente, en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda...”*

NOTIFICACIONES:

-Las personales las recibiré en la secretaría de su despacho o en mi oficina de Abogada ubicada en la Calle 8 No.3-14 Oficina 801, del Edificio Cámara de Comercio de la ciudad de Cali.

-La sociedad demandada y su Representante Legal, Doctora Gloria Avila Copete, o quien haga sus veces, las recibirá en la Calle 21 Norte No. 6N14 de la ciudad de Cali y en la Carrera 13 No. 26A-65, de la ciudad de Bogotá D.C.

Del Señor Juez,
Atentamente


ASTRID VERÓNICA VIDAL CAMPO
C.C. No. 34.325.896 de Popayán.
T.P. No. 212.604 del C.S.J.

Calle 8 No. 3-14, Oficina 801, Edif. Cámara de Comercio. CALI -COLOMBIA
TELÉFONOS: (052)8823187 – 8823103 – 8822257; CELULAR: 3146305734
E-MAIL: lfarana@une.net.co

100

Fecha de Otorgamiento: 03/12/2004 Ciudad: Tulua Departamento: Valle del Cauca Uso Intero: 1844

A. INFORMACIÓN DEL AFILIADO (A) DO

Documento de Identidad: 7 14 17 19 18 13 14 15 1 CC: 12 CE: 08 FE: 12 ME: 1982 DIA: 22 SEX: M
Primer Apellido: ESPINOSA Segundo Apellido: OLAYA Nombres: FABIO ALONSO
Dirección Residencia: Manzana F casa no. 96 Urb. Paez Ciudad o Municipio: Tulua Departamento: Valle del Cauca
Teléfono Residencia: 2315000 Fono Comercial: 2315000

B. INFORMACIÓN ÚLTIMO EMPLEADOR

Número de Identificación del Empleador: 9 14 12 12 15 12 16 10 1 NIT: 12 CC: 12 CE: 12 Nombre Razón Social del Empleador: MADERANDO
Dirección del Empleador: Calle 46 No. 24 A - 30 Ciudad o Municipio: Tulua Departamento: Valle del Cauca
Teléfono Empleador: 2255885 Fecha de Inicio de Empleado: 02/26/2004 Fecha de Fin de Empleado: 07/12/2004 Tiempo en el Empleo: 4 1/2 aproximadamente
Último Cargo Desempeñado: Operario de maquina Último Salario Cotizado: \$358.000 Tiempo en el Cargo: 4 1/2 Aprox. Tiempo laborado en todo el vida: 6 años

C. INFORMACIÓN DEL SINIESTRO

Fecha de Ocurrencia del Siniestro: 07/11/2004 Lugar de Ocurrencia del Siniestro: EN LA CALLE Ciudad donde Ocurre el Siniestro: Tulua
Hora Ocurrencia del Siniestro: 11:00 Actividad que estaba ejecutando: COMPRANDO UNAS COSAS Depto. de Ocurrencia del Siniestro: Valle del Cauca
Descripción de los Hechos: EL DIA 11 DE JULIO IBA PARA MI CASA EN UNA MOTO COMO PARRILLERO CUANDO DE REPENTE ME CAI ME APORTE LA CAREZA Y BUENO E SENTIR UN FUERTE DOLOR EN LA CAREZA - QUELLA Y TODA EL CUERPO

SI EL SINIESTRO SE PRODUJO POR UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR FAVOR INDIQUE:

Placas del Vehículo: Marca: Modelo (Año): CC: 12 CE: 12 DIA: 12 No. de Identificación Conductor:
Primer Apellido del Conductor: Segundo Apellido del Conductor: Nombre del Conductor:

D. BENEFICIARIOS DE PENSION

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	EDAD	PARENTESCO CON EL AFILIADO	FECHA DE NACIMIENTO
OLAVA	VARGAS	CESTIA	42	madre	62 6 30

RECIBIDO 3:00 pm SERVICIO AL CLIENTE

Si conoce otra persona que tenga derecho sobre esta pensión por favor indique el nombre y los siguientes datos:

APELLIDOS	NOMBRES	PARENTESCO CON EL AFILIADO	DIRECCIÓN	TÉLFONO

E. DECLARACIÓN DEL AFILIADO

Yo, FABIO ALONSO ESPINOSA OLAVA, en la ciudad de Tulua, a la fecha de hoy, declaro bajo la gravedad de juramento que la información que he suministrado es verdadera y correcta, que no tengo a mi favor otro derecho a la pensión que estoy reclamando. Asimismo me comprometo a que en caso de que tenga derecho a la pensión de invalidez, reportaré a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. cualquier cambio de información de la cual me beneficiaré o de la cual no me beneficiaré, en pago hasta la fecha en la que actualice mi información.

ÍNDICE DERECHO